

mensual/Abril 80
nueva serie/número 14

COSTA RICA: 7 Colones/ESPAÑA: 75 Ptas./FRANCIA: 5 F/PANAMA: B/1.-
PERU: 100 Soles/REP. DOMINICANA: RDS1.-/SUECIA: 5 Kr./VENEZUELA: 5 Bs.

inprecor

correspondencia de prensa internacional / intercontinental press

PERU: ELECCIONES EL 18 DE MAYO

*“Por un gobierno de los
trabajadores, sin generales
ni patrones”*



Los PCs europeos ante Afganistán.
El movimiento democrático en China.

DESEO SUSCRIBIRME

Rellena este boletín claramente.
Envíalo al Aptdo./ 50.370 Madrid
Giro postal/Transf. bancaria a: JOSE VICENTE IDOYAGA, cta. n° 1.184,
Banco Hispano Americano, Ag. Urbana Ntra. Sra. de Fátima, 13. Madrid-25.
Cheque nominal adjunto, por carta al Apartado de correos 50.370 (Cibeles) Madrid.



Inprecor

de prensa internacional / intercontinental press

ESPAÑA / EUROPA / AMERICA
12 números / 900 ptas. / 1.100 ptas. / 1.300 ptas.
6 números / 450 ptas. / 550 ptas. / 650 ptas.

Apellidos Nombre
Domicilio
Ciudad Distrito postal
Provincia/Estado
No. del giro postal/transerencia/cheque

Oferta especial para suscriptores

El libro
VIVA NICARAGUA LIBRE,
de Miguel Romero
por 100 Pesetas
(1,5 Dólar U.S.A.)

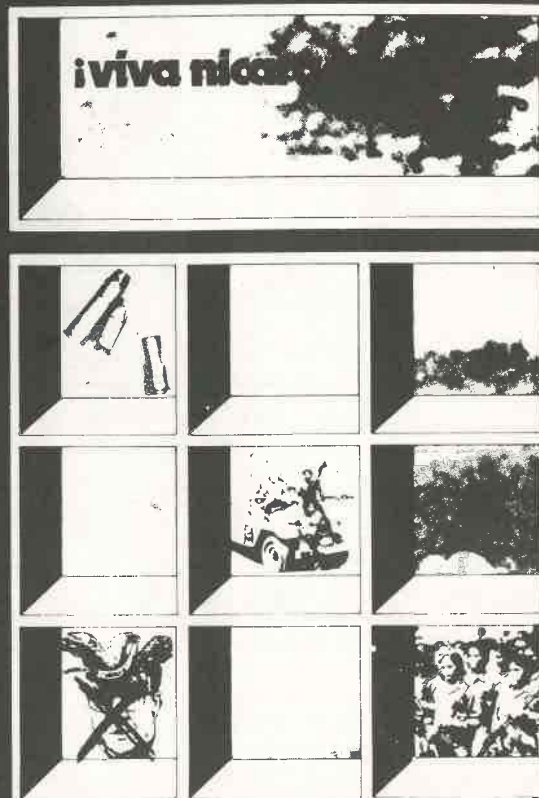
Rellena el boletín de suscripción adjunto, y envíanoslo junto con:

1.000 Pesetas
suscriptores en España

1.200 Pesetas
suscriptores en Europa

1.500 Pesetas
suscriptores en América

viva nicaragua libre! m. romero



Sumario

Perú: Ante las elecciones del 18 de mayo (J.P. Beauvais)...3

La crisis económica y política en el Perú (M. Lajos)...7

Nicaragua: Ocho meses después de la caída de Somoza (C.A. Udry)...10

La prohibición de "El Pueblo" y la condena de sus dirigentes...18

Afganistán: Los PC europeos, trastornados por la intervención soviética (A. Libera)...19

Debate: resoluciones minoritarias del S.U....25

China: El movimiento democrático en China (J. Krasny)...32

Los artículos firmados no representan necesariamente el punto de vista de la redacción.

Edita:

Liga Comunista Revolucionaria (IV Internacional)

Apartado de Correos
50.370 (Cibeles)
Madrid / España

Imprime:

Ratiles
Mallorca 206. Barcelona

Deposito legal:
B - 40.029/79

APOYA
inprecor
correspondencia de prensa internacional / intercontinental press
SUSCRIBETE !!

Forma de pago:

- ☐ Giro postal
☐ Transferencia bancaria
☐ Talón a nombre de José Vicente Idoyaga

José Vicente Idoyaga
cuenta n° 1.184

Banco Hispano Americano
Agencia Urbana Ntra. Sra. de Fátima, 13
MADRID-25 / ESPAÑA

Correspondencia: Apartado de Correos 50.370

(Cibeles)
MADRID
ESPAÑA

Perú

Ante las elecciones del 18 de Mayo

J.P. BEAUVAIS

LOS once candidatos burgueses a la Presidencia de la República ponen en evidencia la crisis política, la crisis de dirección de la burguesía peruana tras doce años de dictadura militar. Pero la profundidad de la crisis —más allá de la proliferación de candidatos, algunos de los cuales sólo representan intereses sectoriales marginales— se refleja sobre todo en la actual situación interna de las dos grandes fuerzas políticas de la burguesía: APRA y Acción Popular (AP).

Sólo a ultimísima hora han sido capaces estos dos grandes partidos de inscribir oficialmente a sus candidatos presidenciales (a la presidencia y a las dos vicepresidencias), y sus listas de candidatos a diputados y senadores. La elaboración de estas listas ha revelado y exacerbado los conflictos internos entre distintas corrientes, camarillas y caudillos con intereses divergentes.

En el seno de APRA, por ejemplo, en las últimas semanas no han dejado de producirse auténticas batallas campales y ajustes de cuentas físicos entre los partidarios de Armando Villanueva -candidato a la presidencia y descolorido sucesor de Haya de la Torre en la dirección del partido - y los de Townsend, que finalmente ha sido designado candidato a la primera vicepresidencia.

En cuanto a AP, si bien aparentemente las cosas han sucedido en el ambiente más sigiloso de una clásica agrupación de notables, tan sólo tras largas semanas de conciliábulos, declaraciones contradictorias, conferencias de prensa anuladas en último momento, Belaúnde Terry, antiguo presidente de la república depuesto por los militares en 1968 y nuevo candidato, ha sido capaz de dar a conocer el nombre de sus compañeros de lista para las dos vicepresidencias y la lista de sus candidatos al Parlamento.

En ambos casos, los militares han ejercido numerosas presiones para que se resolvieran los conflictos, no dudando en intervenir más o menos abiertamente, dando a conocer sus preferencias en cuanto a la selección de ciertos candidatos.

Los militares, y con ellos el imperialismo

y sectores cada vez más numerosos de la burguesía, temen que esta proliferación de candidaturas, combinada con la crisis interna de las principales formaciones burguesas, desemboque en una situación "a la boliviana" tras las elecciones, es decir, en una situación de inestabilidad como la que conoce Bolivia desde las elecciones del año pasado.

¿Hacia un gobierno civil débil?

Según la ley electoral, no puede

proclamarse presidente electo ningún candidato que haya obtenido menos del 36% de los votos emitidos. En tal caso, será el Parlamento el que tendrá que elegir al Presidente y a sus adjuntos. ¿Obtendrá uno de los principales candidatos burgueses, Villanueva o Belaúnde, ese 36%? Nada es menos seguro en el contexto actual.

En la hipótesis de una elección en el Parlamento, ¿podrá formarse una mayoría coherente para elegir a un candidato que disponga de autoridad suficiente y de margen de maniobra para gobernar con "eficacia" al servicio de los intereses de la burguesía peruana en su conjunto? El hecho de que estos interrogantes no sólo se planteen hoy en día, sino que además estén en el centro de todas las preocupaciones de las clases poseedoras, demuestra que los planes de la dictadura - en gran parte - ya han fracasado.

El proceso lento y tortuoso iniciado hace cuatro años, para volver a un régimen civil estable apoyado ante todo en la APRA y lo que queda de su audiencia en sectores de las masas peruanas, hasta ahora sólo ha servido para prolongar la vida del régimen militar. Pero no ha permitido en absoluto que empiece a resolverse la crisis de dirección política de la burguesía. Los militares, que habían tomado el poder en 1968 para



detener los efectos disgregantes de esta crisis, han contribuido de hecho a agravarla en sus doce años de régimen dictatorial.

Esta situación es a su entender tanto más grave, cuanto que el retorno a un régimen civil era una respuesta al creciente aislamiento de la dictadura, ante la proliferación y la radicalización de las movilizaciones de las masas explotadas del Perú, víctimas de la grave crisis económica por que atraviesa el país desde 1975-76.

Pese a la mejora coyuntural de la situación, gracias sobre todo al aumento de los precios, en el mercado mundial, de determinados productos que el Perú exporta tradicionalmente (cobre, plata), los factores que están en la raíz de esta crisis siguen intactos e incluso se han visto agravados por la crisis mundial del capitalismo. El poder adquisitivo de los asalariados ha descendido en un 35% en el transcurso de los últimos cinco años, según varias estadísticas oficiales coincidentes, y pese a los discursos electorales rebosantes de demagogia, ninguno de los candidatos burgueses propone una política económica significativamente distinta de la del régimen actual, dictada por los expertos del Fondo Monetario Internacional.

Un gobierno civil débil y sin mucha autoridad, no apoyado en una sólida mayoría parlamentaria, incapaz de canalizar o hacer frente "seriamente" a las movilizaciones de masas, que se mantienen a un nivel alto en este periodo electoral, esta es la perspectiva que aparece en la confusión y el caos pre-electoral del momento.

Era un objetivo diametralmente opuesto el que se habían fijado los militares cuando decidieron planificar su retorno a los cuarteles. Aunque de momento la mayoría del ejército siga siendo favorable a esta perspectiva, proliferan los signos de un refuerzo de las tendencias militares más reaccionarias, favorables al mantenimiento de la dictadura —o a un golpe de Estado, cuando los civiles, divididos, demuestren su incapacidad para gobernar.

Este contexto ha influido profundamente en la agravación de las divisiones en el seno de la izquierda, y particularmente en la ruptura de la *Unidad de la Izquierda* (UI).

Ruptura de la "Unidad de la Izquierda"

La UI era el frente electoral formado por el Partido Comunista Peruano (Unidad), mayoritario en la dirección de la CGTP, la central sindical más representativa del Perú; el Partido Socialista Revolucionario, una formación burguesa que agrupa sobre todo a antiguos generales favorables a la política de reformas desarrollada durante los primeros años de la dictadura; y un sector minoritario del FOCEP, que rompió con la línea de independencia de clase de este último y que está dirigido por Genaro Ledesma. El candidato a la presidencia de este frente era



En las elecciones a la Constituyente, el FOCEP, con Hugo Blanco a la cabeza, consiguió 12 escaños

precisamente Ledesma.

Pocos días antes de la fecha tope para presentar las candidaturas, este frente se ha roto, oficialmente a causa de una discrepancia en torno a la proporción de candidatos del FOCEP — Ledesma por un lado, y el PCP y PSR por otro. Más allá de las peripecias y los insultos mutuos recogidos con complacencia por la prensa burguesa, una cosa es cierta: ha sido el PCP el que ha tomado brutalmente la iniciativa de la ruptura. La razón aducida es que Ledesma y sus amigos, que según el PCP "representaban realmente poca cosa", tenían demasiado apetito en términos de escaños parlamentarios.

Pero la auténtica razón es mucho más política. Frente a la evidente agravación de la crisis de dirección burguesa, la Unidad de la Izquierda, ese frente de colaboración de

clases a nivel de su programa y de su composición, puede desempeñar un papel significativo a muy corto plazo, pese a ser minoritario. Concretamente, se trata de responder a los llamamientos de la APRA y de su candidato, Villanueva, que se dice ahora abierto a una colaboración con la izquierda "responsable". Caso de que el Presidente deba ser elegido en el Parlamento, el PCP, aunque oficialmente no se haya definido en torno a la cuestión, está dispuesto a dar sus votos a la APRA, al igual que el PSR, máxime cuando la APRA está a favor de mantener los importantes acuerdos comerciales firmados entre la dictadura y la URSS.

Ledesma, pese a su oportunismo, no era un elemento suficientemente seguro para desarrollar semejante política. Entre los votos adicionales que podría aportarles Ledesma, utilizando las siglas del FOCEP, y la garantía de una aplicación coherente e inmediata de una estrategia de colaboración de clases, el PCP —y accesoriamente el PSR— ha tomado una opción. Ledesma y su pedazo de FOCEP han sido "evacuados" sin miramientos ni escrúpulos del frente electoral Unidad de la Izquierda, cuyo nuevo candidato a la presidencia es el general Leónidas Rodríguez, una de las principales figuras de los primeros años de la dictadura, flanqueado por Jorge del Prado, secretario general del PCP y candidato a la primera vicepresidencia.

¡Una auténtica provocación a los trabajadores peruanos, que aún no hace mucho tiempo tuvieron que sufrir la política represiva, de la que estaba particularmente encargado el general Leónidas Rodríguez!

En cuanto a Ledesma, aislado y caído en descrédito, ha decidido presentar su candidatura bajo las siglas del FOCEP, tras algunos contactos que rápidamente fracasaron, con varios sectores maoístas. Ha iniciado su campaña electoral con un violento ataque contra Hugo Blanco, que según él es un "agente de la CIA". Su abortada colaboración con los estalinistas del PCP parece haberles sugerido algunas ideas en cuanto a los temas a desarrollar en su campaña...

Apenas consumada la ruptura de la UI, se abrió la crisis de la ARI, partiendo de consideraciones evidentemente distintas.

El impacto y la crisis de la ARI

Cuando se formó, la Alianza de la Izquierda Revolucionaria agrupaba a todas las organizaciones maoístas, centristas y trotskistas (con la excepción del PST, organización que se reclama de la Fracción Bolchevique). La ARI fue fundada básicamente gracias a la iniciativa del PRT, sección peruana de la IV Internacional, y un sector de la UDP (Unión Democrática Popular), un agrupamiento de varias organizaciones centristas y maoístas. Los demás sectores

maoístas, agrupados en el seno de otra alianza, la UNIR, por un lado, y los trotskistas del POMR (afiliado al CORCI), por otro, se unieron al acuerdo PRT-UDP.

Dos factores fundamentales favorecieron en la época la creación de la ARI: la voluntad y la presión unitaria de las masas peruanas, particularmente de los sectores de vanguardia del movimiento obrero y del campesinado; y la enorme popularidad de Hugo Blanco, "*candidato natural de los hambrientos*", según la prensa burguesa peruana.

Desde que se creó, y gracias a que respondía a un nivel determinado a las aspiraciones a disponer de un marco de movilización y de organización unitaria de las masas oprimidas, la ARI tuvo un impacto considerable.

Un ejemplo, entre otros muchos, puede darnos una idea: los días 22 y 23 de febrero se celebraron las elecciones sindicales en el complejo siderúrgico de Chimbote, el más importante del Perú. Espontáneamente, los militantes de las distintas organizaciones miembros del ARI presentes en la empresa organizaron una lista unitaria, reivindicándose de la ARI. En ese bastión del aparato sindical de la APRA, donde por primera vez, el año pasado, la izquierda había ganado las elecciones por unos cuantos votos de diferencia, la lista unitaria que se reivindicaba de la ARI fue elegida con dos tercios de los votos.

De hecho, la ARI era en un doble sentido una victoria para las masas peruanas. Una victoria, en primer lugar, sobre el increíble sectarismo que reina en el seno de las organizaciones obreras y revolucionarias, y cuyos orígenes son muy diversos: la importancia de la corriente maoísta, después su crisis y atomización que engendró, en el periodo de reflujo, en las peores épocas de la dictadura y cuando la actividad sólo podía ser clandestina; lazos muy particulares de los grupos centristas y maoístas con las masas; detrás de un lenguaje muy impregnado de populismo se esconde casi siempre una concepción manipuladora de sus relaciones con éstas, fuente de toda una práctica sectaria; la gran dificultad, finalmente, que tienen todas las organizaciones para adaptarse al nuevo contexto político tras largos años de actividad clandestina o semiclandestina.

Las consecuencias de este sectarismo son catastróficas, haciendo imposible, en la mayoría de los casos, la más modesta táctica de frente único. En este contexto, la creación de la ARI implicaba un gran paso adelante, a partir del que podían expresarse mejor y con mayor fuerza las aspiraciones reales de las masas.

Sin embargo, la creación de la ARI fue sobre todo una **victoria gracias a las bases políticas** en que descansaba. Es cierto que estas bases eran limitadas y no podían por más que ser limitadas, dadas las divergencias programáticas existentes entre sus distintas componentes. Pero estos límites in-

cluían lo **fundamental**, en un contexto en que, como es el caso del Perú, la independencia política del proletariado aún está por lograr.

Es fundamental que una alianza de tal amplitud asuma el conjunto de reivindicaciones avanzadas por las masas en sus movilizaciones más recientes; es fundamental, sobre todo, que se defina globalmente como un marco que excluye a toda formación burguesa de su seno y todo acuerdo con cualquier organización burguesa, o en otras palabras, que se defina globalmente —y de la forma más concreta y explícita posible— como un marco de expresión de la independencia de clase.

El derecho de cada una de las organizaciones integrantes de la ARI, de defender la integridad de la fórmula "*Por un gobierno de los trabajadores, sin patronos ni generales*", como principal candidato y portavoz de la ARI, garantizaban y ampliaban estos logros fundamentales.

Los explotados y hambrientos del Perú, a diferencia de un puñado de sectarios, encabezados por los dirigentes del PST, saludaron la victoria de la ARI como su propia victoria, y han sufrido su ruptura como una derrota. Esto lo han comprendido inmediatamente la burguesía y los militares, al convertir a la ARI en su principal enemigo en las elecciones del 18 de mayo —y también más allá—, y ejerciendo todo tipo de presiones sobre algunas de sus componentes, en particular las organizaciones maoístas.

En el origen de la ruptura de la ARI estuvo precisamente la ofensiva del sector maoísta más coherente y fuerte, agrupado en torno a la organización *Patria Roja* y al frente que impulsa, UNIR. A los pocos días de integrarse en la ARI, este grupo fue legalizado por la dictadura, lo que le daba la posibilidad de presentarse solo a las elecciones. A partir de ahí empezó a desarrollar una ofensiva provocadora en el seno de la ARI, intentando cambiar su carácter: introdujo de hecho, en las reuniones de los delegados, a un grupúsculo burgués, la ARS, explícitamente excluido de la ARI en los acuerdos iniciales; exigió que la ARI se dotara de una fórmula de gobierno, la suya, es decir, "gobierno democrático, popular y no alineado"; planteó que la ARI funcionara sobre la base del centralismo democrático (!), con el fin de neutralizar la influencia trotskista; finalmente, en las provincias designaba sistemáticamente a sus militantes como candidatos de la ARI, violando totalmente los acuerdos iniciales.

Más allá de las peripecias sectarias, el eje político de esta ofensiva saltaba a la vista: o bien la ARI se transformaba en un frente de colaboración de clases, o tenía que desaparecer.

Frente a una ofensiva de esta naturaleza, la UDP, que agrupa tanto a grupos maoístas —que en el fondo están de acuerdo con *Patria Roja*— y a una mayoría centrista, que muestra confusión en torno a la cuestión de la independencia de clase, se quedó

paralizada y al borde del estallido.

Sólo el PRT y el POMR, en un primer momento, batallaron por la defensa de la ARI y de sus bases políticas y organizativas iniciales. A pocos días de la fecha tope para presentar las candidaturas, y cuando parecía que la ofensiva maoísta podía ser contenida —el grupúsculo burgués ARS había sido expulsado definitivamente y se habían reafirmado las bases de la ARI—, el POMR cambió radicalmente de línea, tras la intervención de la "Comisión Paritaria CORCI-FB", preocupada sobre todo de armonizar la orientación hasta entonces antagónica de sus dos organizaciones peruanas, el PST y el POMR. Este último se unió, sin dar ninguna explicación seria, a la orientación sectaria del PST, y abandonó el combate en el seno de la ARI.

Aprovechando la ocasión que se le ofrecía, los maoístas pasaron de nuevo a la ofensiva, denunciando el sectarismo trotskista y reivindicando la hegemonía política y organizativa de la ARI —particularmente, exigiendo una parte considerable de candidatos a diputados y senadores.

Hugo Blanco, candidato del PRT

Cuarenta y ocho horas antes de cerrarse el plazo para la presentación de las candidaturas, es decir, el tiempo mínimo para poder organizar y presentar sus propias listas, y al cabo de tres días y tres noches de reuniones maratonianas, en el transcurso de las cuales no pudo llegarse a ningún acuerdo, el PRT decidió presentar sus propios candidatos, bajo sus propias siglas y con su propio programa, como le permitía la legislación arrancada, pese a todos los obstáculos, a la dictadura. Así, Hugo Blanco pasó a ser el candidato del PRT a la presidencia.

Paralelamente, los maoístas de *Patria Roja* y de UNIR organizaron su propia lista y presentaron la candidatura de uno de los suyos, Horacio Zeballos, miembro de la dirección del sindicato de enseñantes SUTEP, a la presidencia de la República. Los maoístas de la UDP se integraron en esta lista, rompiendo de hecho la UDP. El otro sector de la UDP, compuesto sobre todo de corrientes centristas como el MIR y *Vanguardia Revolucionaria*, decidió presentar entonces sus propias listas, bajo las siglas UDP, y con su dirigente, Carlos Malpica, del MIR, como candidato a la presidencia.

Para nuestros camaradas del PRT, que han batallado hasta el último minuto por la unidad de la ARI sobre la base de sus acuerdos fundacionales, la alternativa estaba clara: o una amplia unidad sobre la base de un programa limitado pero que incluyera lo esencial, es decir, la independencia de clase, o candidaturas propias del PRT, sobre la base del programa del PRT. Cualquier solución intermedia, como por ejemplo un acuerdo con un sector reducido de la ARI, sobre la base con que se había formado la ARI, habría sido un grave



La ruptura de la ARI vuelve a poner de relieve la importancia de la lucha por la independencia de clase...

error, pues debilitaría políticamente una campaña falsamente unitaria, que en ningún caso habría tenido, a los ojos de las masas y en sus efectos prácticos, el significado que podría haber tenido la campaña de la ARI.

En este nuevo marco, el POMR y el PST han aceptado inmediatamente integrarse en la campaña del PRT, sobre la base de un documento político conjunto. En la medida en que ya no era posible inscribir una nueva

alianza electoral, estos camaradas irán a la campaña bajo las siglas del PRT, presentando, junto a Hugo Blanco, a Ricardo Napuri y Enrique Fernández, candidatos a la presidencia y las dos vicepresidencias, respectivamente.

La ruptura de la ARI ha vuelto a poner de relieve la importancia decisiva de la lucha por la independencia de clase en el Perú, como en otros países de América Latina, y la necesidad de un combate encarni-

zado por su materialización. El impacto de masas de la candidatura de Hugo Blanco, "Por un gobierno de los trabajadores, sin generales ni patrones", y sobre la base de un programa trotskista, puede implicar un gran paso adelante en esta dirección.

Es un deber imperioso, una tarea internacionalista prioritaria para todos los militantes de la IV Internacional, para todos los marxistas revolucionarios, apoyarle concretamente.

PERU

La crisis económica y política en el Perú

Manuel LAJO

PERU conoce actualmente una profunda crisis, que sólo puede compararse a la que se produjo tras la derrota de la Guerra del Pacífico, hace exactamente un siglo.

En el Perú, el ciclo de la crisis del capitalismo dependiente parece repetirse cada diez años, aunque tiende a acortarse. El déficit de la balanza de pagos, la devaluación, la inflación, la recesión y el paro masivo se redoblaron en 1958-59, en 1968-69 y de una forma mucho más dramática desde 1975.

A comienzos de los años 60 hubo un breve periodo de recuperación económica, lo que permitió el acceso al poder de un gobierno civil, populista y moderado, encabezado por Fernando Belaúnde Terry, bajo la égida de la Alianza por el Progreso. La crisis que se inició en 1967 preparó el terreno a la sustitución de ese gobierno por los militares, con un gobierno de tipo populista radical, al menos en los primeros tiempos. La crisis naciente, yugulada hasta 1973, creó las condiciones del golpe de Estado del general Morales Bermúdez contra el general Velasco Alvarado.

Entre 1975 y 1980, paralelamente a un proceso de desmantelamiento de las reformas velasquistas, difícil de llevar a cabo, y bajo el efecto de la crisis económica más grave desde comienzos de siglo, asistimos a un proceso de radicalización de las masas populares, que se expresó en tres huelgas nacionales victoriosas, millares de huelgas locales, ocupaciones de tierras, el surgimiento de centenares de organizaciones de masas, la creciente audiencia electoral de la izquierda y el desarrollo de sus organizaciones.

Por su parte, la burguesía intenta, mediante la elección de una Asamblea Constituyente (de julio de 1978 a julio de 1979), y mediante elecciones presidenciales y parlamentarias, que tendrán lugar el 18 de mayo de 1980, reestructurar el gobierno a través de un proceso de "transferencia del poder a los civiles", que permitiría ofrecer una alternativa a las fuerzas armadas, desgasta-

das tras doce años de gobierno, y establecer una "democracia restringida", capaz de prolongar la vida de un Estado burgués que no puede dar ninguna respuesta a la crisis que sufre la sociedad peruana en su conjunto.

La crisis: su perfil estructural y coyuntural

El Perú tiene una población de 17 millones y medio de habitantes. Esta crece a una tasa anual del 2,9%. Así, cada año aumenta

en medio millón de personas.

No obstante, el Producto Nacional Bruto (PNB) ha disminuido durante los últimos años (1,2 y 1,8% en 1977 y 1978, respectivamente). En 1979, el PNB aumentará en un 1,7% pero fundamentalmente gracias al incremento de las exportaciones —particularmente las exportaciones no tradicionales— y al aumento puramente coyuntural de los precios de determinadas materias primas exportadas.

El coste de esta aparente recuperación ha sido un incremento de la deuda exterior (renegociada a finales de 1978), una disminución de los salarios reales en alrededor del 50% en comparación con 1973, una devaluación de la moneda, que pasó de 40 soles en 1976 a 250 soles en 1979 por un dólar, un aumento del paro, que se acerca al 10%, y del subempleo, del 50%, una aceleración del proceso de centralización y de concentración del capital, que se manifiesta, como en los demás países del cono sur, en el creciente peso de los mecanismos financieros y especulativos.

En 1978, en PNB alcanzó cerca de los 9.000 millones de dólares, es decir, 530 dólares por habitante. La deuda exterior ascendía a 8.864 millones de dólares. Así, la deuda exterior por habitante es casi igual al PNB por habitante. Cada peruano adeuda 510 dólares, o en otras palabras, toda la población peruana debería trabajar sin con-



Doce años de dictadura militar han agravado la crisis

sumir ni invertir durante un año entero para pagar la deuda.

La población rural representa el 39% de la población, pero la agricultura apenas participa con un 12% en el PNB. La industria representa el 24% del PNB. El hecho de que el 50% de la población esté subempleada en 1979 significa que la mitad de la fuerza de trabajo trabaja menos de 35 horas semanales o percibe ingresos inferiores al salario mínimo vital (48 dólares al mes). Hay prácticamente medio millón de personas que están en paro total y más de dos millones y medio subempleadas.

Los que tienen un puesto de trabajo, si están asalariados (empleados), percibían en noviembre de 1979 tan sólo un 49%, en promedio, de lo que ganaban en 1973. Si son obreros, ganan el 72%, y aún así tan sólo si están sindicados.

El salario mínimo ha disminuido en términos reales en un 40% en comparación con 1973. Pero las remuneraciones que más han descendido en relación a 1973 son las de los empleados del sector público: algunos ganan solamente el 26,6% de lo que ganaban en 1973.

En 1972, la parte de la renta nacional correspondiente a los salarios era del 51,3%. Los beneficios alcanzaban el 15,5%. En 1979, los salarios no representaban sino el 40%, mientras que los beneficios se aproximaban al 30%.

El valor de las exportaciones (cobre, cinc, hierro, plata, algodón, azúcar, café y lanas, fundamentalmente), fue en 1978 de 1.940 dólares. Las importaciones ascendían solamente a 1.600 dólares, es decir, que hubo un excedente de unos 300 millones de dólares en la balanza comercial. Si lo comparamos con el año 1975, cuando esta balanza dió un déficit de 1.099 millones de dólares, y el déficit de la balanza de pagos era de 1.538 millones (para un importe total de las importaciones de 2.390 millones de dólares), podemos apreciar la gravedad de la recesión.

El FMI y los diez planes de recuperación

No cabe duda que la intervención del FMI, con miras a controlar la política económica peruana, no es nada nuevo. La novedad consiste en el "seguimiento" muy estricto de las recomendaciones que hace y que desde 1975 son cada vez más draconianas. Ha llegado a imponer prácticamente todo lo que quiere y los diferentes "planes de recuperación económica" no han sido elaborados por el gobierno peruano, sino por el propio FMI. Y las sucesivas visitas de la delegación del "Fondo" —cada vez más familiares—, delegación que preside Linda Koenig, no dejan de tener alguna relación, por ejemplo, con los cinco cambios de ministros de Economía entre 1974 y 1978.

Tras los primeros años de reforma, Velasco había logrado que la recesión de 1968

quedara superada y que el ritmo de crecimiento económico recuperara su tasa "normal" (5% en promedio entre 1969 y 1974).

Tras el periodo más duro de enfrentamiento entre el nacionalismo militar, el capital y el gobierno norteamericano —que llegó incluso a amenazar con la aplicación de la Enmienda Hickenlooper—, el reformismo militar obtuvo el apoyo del capital internacional por medio de préstamos, acuerdos sobre inversiones en asociación con el Estado, la financiación de proyectos gigantescos de sistemas de regadío en la costa, así como la exploración y construcción de un oleoducto en Amazonia del norte. Estas inversiones contribuyeron ampliamente a aumentar la deuda exterior; al mismo tiempo, por cierto, se compró en Occidente y en la URSS gran cantidad de armamento, lo que se explica por el carácter militar del régimen y por la aproximación del centenario de la Guerra del Pacífico.

Durante los primeros años del régimen de Velasco, la política monetaria, fiscal y cambiaria se desarrolló con cierto rigor, gracias a la instauración de un control de los cambios, que fijaba el cambio en 40 soles por dólar entre 1970 y 1976, y que regulaba la importación de determinados productos clave y la compra y comercialización interior de ciertos productos alimenticios (como el arroz) y los abonos.

La política económica aplicada por el general Morales Bermúdez, ministro de Economía y Finanzas hasta 1974, era claramente proteccionista y logró contener la inflación. Pero bajo el mandato de su sucesor, el general Vargas Gavilano, se hicieron sentir presiones inflacionistas más fuertes. Entre 1974 y 1975, el gobierno de Velasco trató de atenuar y disimular la crisis económica que se venía encima, mediante cambios de menor importancia.

Sin embargo, en junio de 1975 se vió obligado a promulgar el primero de sus célebres "paquetes" de medidas impuestas por el FMI: aumento de precios, punciones fiscales, disminución de los salarios reales y aplicación de la "austeridad" en el gasto público.

A este "paquete" han ido sumándose algunos otros, desde el golpe de Estado de agosto de 1975, que derribó a Velasco: uno de ellos, cuando Luis Barúa era ministro de Economía, en octubre de 1975, y otros en enero y junio de 1976.

A medida que aumentaba el malestar social, fueron aplicándose nuevos "paquetes"; entre mayo y agosto de 1977. En junio de 1977, el ingeniero Walter Piazza asumió la cartera de Economía; quiso imponer un "paquete" tan impopular que precipitó la gran huelga nacional del 19 de julio, que obligó al régimen a anunciar la fecha de las elecciones a la Asamblea Constituyente y a cambiar al ministro de Economía.

Se nombró entonces al general Sáenz Barsallo; no trató de satisfacer las exigencias del FMI, y con sus medidas y contrame-

das, acabó cayendo en mayo de 1978. En ese momento llegaron nuevos "paquetes" memorables de medidas económicas, inaugurando el mandato del actual ministro Javier Silva Ruete.

Este ministro civil, que cuenta con un equipo sólido y mantiene lazos evidentes con el capital financiero y los organismos internacionales, logró promulgar, en el segundo semestre de 1978, un plan económico que fue avalado por el FMI y que le permitió al ministro renegociar la deuda exterior en octubre, cuando Perú se encontraba prácticamente al borde de la suspensión de pagos.

La aplicación del plan Silva-FMI chocó con una fuerte resistencia popular. Por ejemplo, en agosto de 1978 se produjeron importantes movilizaciones —que llegaron a impedir parcialmente el despido de miles de empleados del sector público— y las huelgas nacionales del 22 y 23 de mayo de 1978 y la del 19 de julio de 1979.

Sin embargo, gracias a la experiencia de cinco años de crisis, el nuevo equipo económico ha logrado ir imponiendo los "paquetes" sucesivos, con habilidad y combinando represión y promesas de "transferencia del poder a los civiles", ganando tiempo y construyendo una base de apoyo a los partidos de derecha, que se disponen a tomar el relevo del régimen militar desgastado.

Con la ley sobre las exportaciones no tradicionales, promulgada en diciembre de 1978, se impuso oficialmente un nuevo modelo de acumulación en el Perú, que abandona el mercado interior y trata de reducir el coste de la fuerza de trabajo peruana con el fin de permitir la integración de la economía nacional en el seno de las naciones que ya han operado una reestructuración, en el marco de la división internacional del trabajo y de la producción, bajo la égida de las multinacionales. El FMI encabeza este movimiento internacional.

Una recuperación artificial y pasajera

La política aplicada por el ministro de Economía, Silva Ruete, que para renegociar la deuda exterior en octubre de 1978 tuvo que aceptar un compromiso con el FMI —que preveía la puesta en práctica de un plan de recesión económica muy riguroso—, ha permitido equilibrar la balanza comercial, aunque sin lograr contener la inflación, que por segundo año consecutivo supera el 65% en 1979, ni a subsanar el déficit fiscal (831 millones de dólares en 1979, prácticamente la mitad de los gastos corrientes del Estado).

Esta política no ha permitido obtener un excedente importante de la balanza de pagos, pese a que de un año a otro se hayan reducido las importaciones y aumentado las exportaciones no tradicionales, a que se hayan incrementado los excedentes y los beneficios privados realizados en el exterior y

que se registran a cuenta de la balanza de pagos (dado que los que no se registran deben ser bastante más altos): 158 millones de dólares en 1978 (el 8% del importe de las exportaciones), 446 millones en 1979 (el 13% del valor de las exportaciones), y probablemente 604 millones en 1980 (el 17% del total de las exportaciones).

Pero esta recuperación aparente de las exportaciones tiene dos causas inmediatas: cierto aumento de los precios mundiales de las materias exportadas por el Perú, y un salto importante de las exportaciones no tradicionales (de hecho, han pasado de más de 170 millones de dólares en 1976 a casi 700 millones de dólares en 1979). ¿Cómo explicar este "milagro"? Podemos avanzar tres elementos:

1. Las enormes subvenciones dadas al capital extranjero y nacional que realiza exportaciones no tradicionales. El Estado ha pagado entre 55 y 80 millones de dólares a empresas como la CERTEX (lo que se denomina la "desgravación fiscal", y que en realidad son subvenciones a un escaso número de empresas, particularmente extranjeras, como la Bayer). Esto representa más del 10% del gasto público.

Un número restringido de empresas —no más de 30— realizan más de la mitad de las exportaciones no tradicionales del Perú. Y las condiciones ofrecidas son tan buenas que en 1979 el Perú se ha transformado en un país exportador de bienes que hasta entonces jamás había intentado exportar: pastas alimenticias, leche concentrada, patatas, huevos. Además, se da la paradoja de que se exportan alimentos cuando la mayor parte de la población conoce una situación de desnutrición generalizada.

2. La devaluación del sol fue otro estimulante del *boom* de las exportaciones. Entre 1976 y finales de 1979, la devaluación alcanzó una tasa superior al 400%, mientras que la inflación interna fue del 160%. Las ganancias de los exportadores vinieron facilitadas por las ventas en dólares, a precios cada vez más altos de los productos fabricados, pagando salarios (y costes de producción) que no crecían con la misma rapidez.

3. La disminución de los salarios reales. Jamás ha tenido el Perú una fuerza de trabajo tan barata como ahora. El precio de esta fuerza de trabajo es actualmente, en la gran empresa, de 40 ó 50% de lo que era en 1973. En el sector industrial, los costes de mano de obra han descendido en un 50%, en términos reales.

Para terminar esta breve ojeada a los datos económicos fundamentales de la actual crisis peruana, hay que señalar que en las recesiones anteriores jamás se alcanzó el actual nivel de deterioro. Por ejemplo, en 1968, la tasa de inflación sólo había alcanzado el 19% (el 73% en 1978). La devaluación de 1967 no fue de más del 50%,

mientras que la inflación, durante estos últimos años —si tomamos como base el año 1975— ha alcanzado el 476%.

La profundidad de esta crisis anuncia un cambio en el modelo de desarrollo seguido por el Perú. Igual que a finales de los años 60 en Chile, en el Perú de finales de los años 70 las contradicciones del capitalismo dependiente exigen soluciones radicales.

Orígenes y especificidad de la crisis peruana

Al margen de los orígenes estructurales que explican las crisis de los últimos decenios en el Perú, las causas de la última crisis pueden encontrarse en el reformismo del régimen precedente. El radicalismo del reformismo burgués del general Velasco explica incluso en parte la profundidad de la crisis y debe permitir arrojar luz sobre las perspectivas de solución que se abren.

El régimen de Velasco realizó en siete años reformas y modernizaciones que en un país como Chile exigieron varios decenios para llevarse a cabo: el desarrollo del sector capitalista de Estado y de las inversiones públicas (financiadas en gran parte mediante créditos extranjeros, que han generado una deuda exterior gigantesca); una política de apoyo al desarrollo de capas medias urbanizadas (que incluye subvenciones al consumo de gasolina y productos alimenticios básicos importados, lo que ha contribuido a profundizar la crisis); un programa de reformas en la agricultura, y en la propiedad industrial, destinado a conciliar el capital y el trabajo mediante una co-gestión limitada; de la prensa, mediante la expropiación de los periódicos de la oligarquía, sin tratar de transferirlos a las "organizaciones populares"; un programa de nacionalización de las grandes empresas mineras, cuyos efectos, sin embargo, se vieron relativizados debido a la introducción de nuevos contratos y nuevas concesiones en torno al cobre y al petróleo; una política de fomento de las organizaciones populares y de radicalismo ideológico antiimperialista y antioligárquico, que permitió romper las barreras culturales sin lograr encauzarlas hacia el "tercerismo", esa vía "ni capitalista, ni comunista", desarrollando en cambio una dinámica de organización y de toma de conciencia entre las masas, hoy en día capitalizada por la izquierda revolucionaria.

Hay que tener en cuenta todos estos fenómenos a la hora de valorar el nivel actual del proceso político y socioeconómico peruano. En resumen, la crisis peruana debe analizarse teniendo en cuenta cuatro factores centrales que la diferencian de las demás experiencias similares en América Latina, por ejemplo la de Chile de 1970:

a) el reformismo de Velasco fue un reformismo burgués mucho más radical que el de Frei, Vargas o Perón;

b) en el terreno económico, la crisis peruana

na es mucho más profunda que la de Chile en 1968-69, de Argentina en los mismos años, o de Bolivia antes del régimen de Torres. Las contradicciones entre las fracciones de la burguesía orientadas hacia el mercado interior y los que se dedican a la exportación tradicional y no tradicional pueden ser más importantes en el Perú que en otros países latinoamericanos. El fraccionamiento actual de la burguesía en tres bloques (que pueden llegar a ser dos en las elecciones presidenciales) parece reflejar estos problemas, debidos en parte también al reformismo anterior, que había llevado a cabo un proceso de sustitución de las importaciones, un proteccionismo industrial, etc.

c) Las bases sociales populares del Perú son mucho más heterogéneas que las de los demás países del cono sur. La clase obrera es aún muy joven y el campesinado pobre, los parados parciales de las ciudades y del campo, junto a un crecimiento de las nuevas y antiguas capas medias, hoy depauperadas con la misma intensidad, hacen que el espectro político sea más diversificado y difícil de abarcar. Esto explica también las orientaciones políticas de los elementos de izquierda que siguen globalmente al maoísmo, al trotskismo y al comunismo prosoviético, y que tienen un peso equivalente, sin que haya una hegemonía clara de ninguna organización y sin relación con su influencia en las organizaciones populares.

d) el papel de las fuerzas armadas en el Perú es distinto del de los demás países. Estas fuerzas armadas han gobernado durante doce años y han puesto en práctica, en los primeros siete años, un programa radical (pero inconsecuente) de reformas en el marco del capitalismo e institucionalizado por las fuerzas armadas. Desde 1975 asistimos a un proceso vergonzoso de desmantelamiento del proyecto de "revolución peruana", y esto en un contexto de crisis económica, la peor que jamás haya conocido el Perú.

En conclusión, se trata de saber si la aplicación de la política del FMI podrá llevarse a cabo en un país en que el movimiento de masas está en pleno auge, que ha conocido doce años de gobierno militar desgastado y que tras la experiencia del reformismo militar radical, encuentra graves dificultades para no desembocar en una situación revolucionaria.

En otras palabras, la crisis económica peruana, atizada por la enorme deuda exterior, podría comportar el triunfo electoral de la izquierda, o por lo menos un ascenso del movimiento popular, de tal envergadura que resultara imposible instaurar una "democracia restringida". Pero el golpe militar de derechas es una solución muy difícil de imponer, pues difícilmente encontraría una base social de apoyo.

Así, la crisis peruana puede desembocar en una situación revolucionaria.

Ocho meses después de la caída de Somoza

C.A. UDRY

MIDA (Ministerio de Desarrollo Agropecuario). El titular del Ministerio de Industria pasa a ser Fernando Guzmán, que anteriormente dirigía el FIDEICOMISO, es decir, el organismo de gestión de los bienes industriales y comerciales confiscados a Somoza y los somocistas. El exministro de Industria, Noel Rivas Gasteasoro, había sido en su tiempo el presidente de la Cámara de Comercio y miembro del Partido Conservador.

El MIDA, de reciente creación, centraliza los sectores de la producción agraria, la transformación de los productos agrícolas y la ganadería. Su misión es la de insertarlas en el marco de la Reforma Agraria. Jaime Wheelock, comandante de la Revolución, dirige directamente este Ministerio, y sigue

EL editorial de *Barricada*, diario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), del 22 de diciembre de 1979, afirma: "Con la reorganización del Gobierno, podemos decir que hemos escrito el prólogo del Plan de relanzamiento económico". Los cambios operados en el Gobierno y en diversas instituciones del Estado están relacionadas con la agravación de la crisis económica, el peso del sector privado en la economía, que ha revelado el Plan de relanzamiento, las contradicciones socioeconómicas que de ahí se derivan y también el ascenso revolucionario en América Central.

El 4 de diciembre de 1979 dimite el Gobierno constituido tras la victoria del 20 de julio. Los cambios de composición de los gabinetes ministeriales traducen la voluntad del FSLN de aumentar su control, entre otras cosas, en el sector económico.

En efecto, en un documento de trabajo publicado tras la primera asamblea nacional de cuadros del FSLN, a finales de setiembre, la dirección del Frente constata que "de hecho, el sector financiero y económico del Estado —con excepción de la ejecución de la Reforma Agraria (...)— está en manos de la burguesía". En otras palabras, el FSLN observa con temor y preocupación el papel preponderante que han conservado los cuadros administrativos del antiguo aparato estatal en instituciones como el Banco Central y algunos ministerios. Se subraya también el peligro que encierra esto de cara al futuro: "Los elementos más reaccionarios y el imperialismo podrían aprovecharse de ello para reconstruir y consolidar un modelo de desarrollo económico" que implicaría la "dependencia" y el "refuerzo de la empresa privada".

La adjudicación del Ministerio de Planificación al comandante de la Revolución Henry Ruiz debe entenderse como una respuesta parcial del FSLN a esta problemática. Henry Ruiz sustituye a Roberto Mayorga Cortés, ex-secretario general del Mercado Común Centroamericano. El Ministerio de Planificación pasa a ocupar un puesto central y coordina los Ministerios de Industria, Comercio Interior y Exterior y el



encabezando al INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria). Anteriormente, el Ministerio de Agricultura tenía una función decorativa. Su titular era Manuel José Torres, terrateniente acaudalado y demócrata cristiano.

Humberto Ortega, que está al mando del EPS (Ejército Popular Sandinista), asume la cartera de la Defensa, que detentaba —aunque sólo formalmente— Bernardino Larios, antiguo coronel de la Guardia Nacional, arrestado en 1978 por intentar dar un golpe contra Somoza. Edén Pastora se une a Luis Carrión como viceministro de Defensa. Está encargado de organizar las Milicias Populares Sandinistas.

Un sector privado que aún es fuerte

Estos cambios se han operado en vísperas de la publicación del Plan Económico para 1980-1981, el "programa de urgencia y de reactivación a favor del pueblo".

A este respecto cabe subrayar un primer hecho: la proporción entre el sector privado y el sector público en los distintos ramos incluidos en el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB) es la siguiente (previsiones para 1980): agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: (sector privado) 80,9% y (sector público) 19,1%; industria manufacturera: 75% y 25%; construcción: 30% y 70%; minas: 1% y 99%; servicios: 45,3% y 54,7%.

Pero la contribución proporcional de los distintos sectores al PIB, prevista por el plan de 1980, es la siguiente: agricultura: 22,9%; minas y construcción: 4,7%; industria: 22,9%; servicios en que predomina el sector público (banca, seguros, transporte, agua potable, actividades gubernamentales): 23,1% y servicios en que domina el sector privado: 26,8%.

Esta doble serie de datos —aunque sean muy aproximativos— revela la importancia del sector privado, sobre todo en las **actividades productivas**. Así, la aplicación del Decreto n° 3 —que estipula la confiscación de los bienes de Somoza y los somocistas— no ha tenido la trascendencia esperada, la que ponía de relieve el editorial del semanario del FSLN, *Poder Sandinista*: "Confiscar a los somocistas significa confiscar el sector más grande de la burguesía, y por tanto significa mutilar a la burguesía en su conjunto, debilitarla como clase" (18.10.1979).

Sin embargo, los resultados de la confiscación demuestran que el "grupo Somoza" había concentrado sus propiedades sobre todo en el terreno financiero, comercial y de servicios, y en menor medida en el sector productivo, con excepción de la transformación de la carne y del cemento. Además, sus empresas vivían en buena medida de los subsidios directos e indirectos del Estado, y su rentabilidad efectiva es muy distinta de lo que podía dar a entender el importe de

los beneficios que en la época retiraba el dictador.

Todo ello confirma, por cierto, lo que escribió Jaime Wheelock en su libro *"Imperialismo y dictadura"* (Ed. Siglo XXI, p. 141-176), de que el grupo Somoza, pese al incremento de sus actividades a comienzos de los años setenta, compite con otros tres grupos financieros: Calley Dagnal, Banco Nicaragüense (Banic) y Banco de América (Banamérica).

La burguesía, que no se ha visto afectada —o sólo parcialmente— por las medidas de confiscación y nacionalización, dispone aún de una fuerza económica notable, aunque es cierto que las decisiones tomadas en relación al comercio exterior, a la distribución de los productos en el mercado interior, a la banca y a los seguros, estrechan su margen de maniobra.

En resumen, el Plan económico incluye al sector privado —industrial y agrícola— en el proyecto de relanzamiento, y le ofrece una serie de garantías que concretan la opción actual de la dirección del FSLN de llegar a un acuerdo con dicho sector. Según algunos analistas bien informados, Mayorga —el exministro de Planificación— desempeñó un papel importante en la definición del programa económico... (*Latin America News Letter —Regional report—* 11.1.1980).

Algodón, azúcar... y entrada de divisas

Un somero examen de la situación de la **agricultura** permite comprender mejor los problemas a que se enfrenta el FSLN y los obstáculos que aparecen en el camino de la profundización del proceso revolucionario. El algodón, el azúcar, el café, la carne y los productos del mar representaban, en 1977, el 68,3% del valor total de bienes exportados. El algodón y el café constituyen las dos fuentes de divisas más importantes; entre ambos suman casi el 55% del valor de los bienes exportados en 1977.

En cuanto al algodón, el Plan prevé una gama de tierras sembradas que van de las 170.000 manzanas (1 manzana = 0,709 hectáreas) a 225.000. En su conjunto, el INRA tiene previsto sembrar unas 20 a 25.000. Por lo tanto, del 10 al 15% de la producción total corresponderán al INRA. Ante los cuadros del sindicato sandinista, Núñez explicaba: "El cultivo del algodón es el sector más tecnificado y moderno; en la actual situación del Gobierno, la iniciativa privada es la que tiene los medios para cultivar el algodón, que es el producto que proporciona más puestos de trabajo y más divisas, y que tiene los efectos multiplicadores más grandes" (*Barricada*, 12.12.1979).

Durante la guerra civil no se sembraron las tierras. En 1978-79, la producción de algodón ascendió a 499.000 balas de 480 libras. En 1980 está previsto que ascienda a 80.000 balas (*Informe Semanal —América*

Latina— 22.2.1980). En lo inmediato, la cuestión crucial es esta: ¿sembrarán los grandes propietarios para la cosecha de 1981? Sobre ellos se cierne la amenaza de la nacionalización... si sabotean. La aplicación de esta medida implicaría un nuevo hito de la revolución, tan importante como el de la nacionalización de la industria del azúcar y de las plantaciones de caña en Cuba.

El Gobierno se esfuerza por organizar en cooperativas a los pequeños productores de algodón, que sin embargo sólo tienen una importancia marginal en cuanto al volumen de la producción. Además, ha limitado fuertemente el precio de arriendo de las tierras, fijándolo en un máximo de 300 córdobas por manzana, mientras que antes podía ascender a 2.000 córdobas (*Barricada*, 2.1.1980). Una parte de las tierras aldoneras, del 20 al 30% aproximadamente, están en régimen de arriendo.

En cuanto al café, la situación es algo distinta. Los pequeños y medianos productores ocupan un lugar más importante en la producción. El capital se aseguraba el control de la producción cafetera por medio del crédito y de la comercialización, además de su participación directa. La nacionalización de la banca y de la comercialización otorga al Estado un medio de intervención fuerte en este terreno. Pero sólo un poco más del 10% de la producción está bajo el control inmediato del INRA.

El problema social y político de las relaciones de este tipo de pequeños y medianos propietarios con el proceso de la revolución nicaragüense está en el centro de las preocupaciones del FSLN. Los resultados de la última cosecha son inferiores a los previstos; entre las razones que se han dado se citan más de una vez las reticencias de determinados propietarios.

En cuanto al azúcar, la nacionalización del sector somocista le permite al MIDA controlar más del 30% de la producción. Sin embargo, una de las "grandes familias" de Nicaragua —los Pellas— detenta una parte preponderante de la producción azucarera. Alfredo Pellas es el propietario de la principal empresa azucarera de América Central, la de San Antonio, en el departamento de Chinandega. Así, el 66% de la producción de azúcar corresponde fundamentalmente a algunos propietarios. Las cuatro empresas azucareras nacionalizadas (Amalia, Camilo Ortega, Benjamín Zeledón y Julio Buitrago) tienen en total una capacidad de producción inferior a la de San Antonio (*INRA —Boletín Informativo*, 4.12.1979). El sector público en la industria azucarera emplea de forma permanente a 3.365 trabajadores (*ibid.*, 18.1.1980).

En cuanto al tabaco, aproximadamente el 50% de la producción está en manos de la AGROINRA-TABACO. Desde el 29 de febrero, el único comprador de sésamo (oleaginoso) es la empresa estatal ENAL

(Empresa Nicaragüense de Algodón). Las exportaciones de sésamo deben aportar 12 millones de dólares (*Barricada*, 18.1.1980).

En cuanto al ganado y la carne, la realidad es más compleja. Dado que Somoza detentaba una posición muy fuerte en la industria cárnica (mataderos), el Estado domina el 80% de este ramo. En cambio, el INRA sólo posee del 6 al 8% de las cabezas de ganado. La cabaña nicaragüense era la más importante de América Central. Para realizar su capital, los propietarios exportan ganado ilegalmente, cosa que denuncia virulentamente el FSLN. A finales de 1979, Robelo afirmaba que se habían exportado de contrabando unas 500.000 reses (sobre una cabaña de 2.500.000).

Finalmente, el Estado detenta lo fundamental de la pesca y de los diversos productos del mar, que en 1977 representaban el 3,5% del total de bienes exportados. Nicaragua acaba de recuperar una parte de su flota pesquera, que habían evacuado los somocistas a Honduras.

La producción de bienes alimenticios es un problema capital que se plantea en Nicaragua, si quiere hacer frente, en un plazo no demasiado largo, al déficit alimenticio provocado por la guerra civil. El INRA controla alrededor del 30% de la producción de arroz, y del 13 al 15% de la de maíz, sorgo y frijoles. Gracias a su control sobre la ENABAS (Empresa Nacional de Alimentos Básicos), el Gobierno detenta ya más del 40% de la distribución de los cereales básicos. El Plan fija un objetivo superior al 70%.

En la producción de bienes alimenticios, los propietarios pequeños y medianos ocupan una función considerable. Bajo Somoza, los exportadores de productos agrarios utilizaban de hecho a los propietarios pequeños y medianos para el mercado interior y la autosubsistencia. De este modo podían acentuar la explotación de los 350.000 trabajadores empleados durante cuatro meses al año en las plantaciones dedicadas a una producción orientada a la exportación.

El Plan de reactivación da la prioridad a la producción de bienes alimenticios. Debido a la estructura de la propiedad de este sector y a las complicaciones propias del relanzamiento de un ciclo de producción agraria interrumpido por la guerra civil, los objetivos del Plan se sitúan dentro de una gama que va de algunos tantos por ciento por debajo de la cosecha de 1979-80, a algunos tantos por ciento por encima (salvo en el caso del maíz). El déficit alimenticio amenaza pues con prolongarse durante cierto tiempo. En 1980 se destinarán 130 millones de dólares a la importación de bienes alimenticios (*Poder Sandinista*, 3.1.1980). En cuanto al algodón, Wheelock estima que la producción podría triplicarse en relación a la de 1979-1980, lo que la situaría, sin embargo, a un nivel inferior a la media de 1975-1978.

Las dificultades en la agricultura, que emplea al 48% de la población activa, son por tanto gigantescas y requieren una movilización masiva de los campesinos y un nuevo avance de la Reforma Agraria, para empezar a superarlas.

El sector del pueblo y el sector privado

En la industria, la participación del Estado es muy alta en el sector de la madera, los materiales de construcción, el cemento, la transformación de la carne y los productos del mar. Es significativa en el textil (el 40%).

En cambio, el sector privado sigue ocupando un lugar central en otros ramos (agroquímico y químico, que son decisivos para la agricultura y la ganadería, las refinerías de azúcar, las fábricas de harina, los aceites y grasas vegetales, las máquinas, etc.). Alrededor de 13.000 personas trabajan en el sector público, industrial y comercial. De acuerdo con los objetivos del Plan, la producción industrial deberá sobrepasar en 1980 la de 1979 en cerca del 20%, lo que a pesar de todo la situará en un 20% por debajo de la de 1978.

Cerca del 15% del total de inversiones estatales, es decir, 56 millones de dólares sobre 375, se consagrará a la industria y al comercio. El relanzamiento planificado de las inversiones industriales y comerciales descansa casi en la misma cantidad en la iniciativa del capital privado, siempre que las empresas obedezcan.

La mayor parte de las inversiones del Estado se consagra, en el Plan, a las vías de comunicación, a los transportes, a la producción de energía y al sector social (educación, sanidad, vivienda). En una proporción muy elevada deberán financiarse mediante el crédito exterior. La creación de 90.000 puestos de trabajo —una decena de miles de ellos en la industria—, es el objetivo muy ambicioso que se asigna al Plan de cara a combatir un paro permanente que afecta al 33% de la población activa (o sea, a 250.000 personas).

Henry Ruiz explica del modo siguiente la función general del Plan: *“Con la aparición de la propiedad del pueblo —compuesta por los bienes de Somoza y los somocistas— la economía se compone: por un lado del sector del pueblo, y por otro del sector privado. La planificación trata de que la economía se desarrolle hacia un mismo objetivo, que lógicamente es el de las necesidades del pueblo, y de que asuma las responsabilidades que históricamente ha contraído Nicaragua con la banca internacional ... ¿Cómo hacer una economía mixta? La única manera es desarrollar una planificación que englobe a ambas partes”*.

Subraya las contradicciones que de ahí se derivan y añade: *“La planificación trata de activar, de armonizar estas contradicciones”*. Tras utilizar el palo de la nacionali-

zación contra el sector privado, Ruiz enseña el caramelo y señala que *“la iniciativa privada debe comprender que si se pone a producir puede estar segura de sacar ventaja del fin del estacamiento económico provocado por el somocismo y proyectarse hacia el futuro como una fuerza importante del país”* (*Barricada*, 30.12.79). En su opinión, el incremento del consumo, es decir, del mercado interior, debe ser uno de los principales mecanismos para relanzar las inversiones privadas.

Pero las vagas promesas no bastan para asegurar la participación del capital privado en el esfuerzo de reconstrucción. Hay que darle algunas garantías concretas. Esto es lo que da a entender Ruiz cuando declara: *“Cuando hablamos de financiamiento del sector privado, lo hacemos con sentido de responsabilidad”* (ibid.). Entre las garantías concedidas hasta ahora, podemos citar: la unificación del cambio (1 dólar = 10 córdobas), para poner fin a los múltiples cambios instaurados por Somoza con objeto de penalizar a la “burguesía opositora”; la venta de divisas por parte del Banco Central; la ley de regularización fiscal, que permite disminuir o anular las demoras en el pago de impuestos y reevaluar los bienes proporcionalmente a la devaluación del córdoba en abril de 1979; los contratos con empresas privadas, que conceden créditos del Estado; la compra de productos a precios garantizados y garantías en el terreno de las reivindicaciones salariales (*Barricada*, 18.11.1979).

Durante la elaboración del Plan se suspendió el Decreto n° 3, con el fin de combatir el sentimiento de “incertidumbre” del sector privado (ibid., 21.11.1979). Robelo declaró a este respecto: *“En ninguna de las leyes adoptadas hasta ahora hemos hecho discriminación alguna que traicione al empresario privado”* (*Cuadernos del Tercer Mundo*, diciembre de 1979, página 50).

Son numerosos los capitalistas que aprovechan estas disposiciones, que oficialmente deberían impulsarlos a invertir, para evadir capitales, ya sea facturando los bienes exportados a un precio inferior (lo que les permite depositar la diferencia en una cuenta en el extranjero), ya sea facturando los bienes importados a un precio superior (lo que les permite dejar una parte de las divisas obtenidas en la cuenta de un banco extranjero), o bien tirando de todos los hilos del mercado negro de divisas.

En el terreno político, este intento de integrar el sector privado en la fase actual de “reconstrucción” se traduce en la afirmación de la unidad necesaria con el sector “no vendepatria” de la burguesía. Esta unidad se celebró con motivo de las jornadas organizadas en conmemoración del asesinato de Joaquín Chamorro, antiguo líder de la “oposición burguesa”. En esta ocasión, el comandante Carlos Núñez Téllez explicó que *“la unidad nacional tiene un sentido revolucionario, es decir, alcan-*

zar el objetivo de construir un régimen distinto, depurado de la explotación descarada, claramente popular, democrático y antiimperialista. En esto debe englobar a las organizaciones de masas populares, las empresas privadas, la Iglesia, los grupos políticos intermedios, a todos los que quieran estar allí" (Barricada, 10.1.1980).

Encontramos ahí un tema que retoman a menudo los dirigentes del FSLN. Al poner el acento en la lucha contra la **dependencia** del imperialismo, establecen una diferencia entre el sector "vendepatria" de la burguesía y otro sector que podría inscribirse en el combate por la independencia frente al imperialismo.

Es cierto que cuando el FSLN define a la burguesía "vendepatria", sus rasgos pueden aplicarse a todos los capitalistas: *"Es el sector de la vieja clase dominante que subsiste a pesar de todo, y que naturalmente teme por sus capitales, sus puestos de trabajo, en que el beneficio de la producción no es colectivo, sus inmensas propiedades de tierra, sus privilegios personales (Poder Sandinista, n° 3, noviembre de 1979). Sin embargo, esta distinción entre un sector "liquidador de la patria" y otro que manifiesta una "buena voluntad revolucionaria", puede dar lugar a alguna que otra contrariedad, máxime cuando la lucha contra la presencia económica directa del imperialismo tiene poco alcance debido a la debilidad histórica de su implantación económica en Nicaragua.*

La Reforma Agraria

Todas estas declaraciones y las garantías dadas a la burguesía no logran tranquilizarla. Ve con malos ojos el creciente control del FSLN sobre las palancas de mando, la consolidación de las organizaciones de masas y toda una serie de decisiones tomadas por el Frente.

A las nacionalizaciones de la primera etapa se suman, desde el otoño de 1979, las de las minas y compañías de seguros. Una sociedad nacional —Petronic— se creó con el fin de arrebatarse el control de los suministros de petróleo a la EXXON. La principal empresa farmacéutica, SOLKA, acaba de ser nacionalizada.

Para defender los ingresos de los trabajadores se promulga un decreto que impone una disminución de los alquileres en un 40% para los que van de 500 a 1.000 córdobas, y en un 50% para los de menor cuantía. Este decreto lesiona los intereses de un sector representativo de la burguesía. El arriendo de la tierra, en la región algodoneira, ha disminuido; en las tierras de producción cerealística se fija en 100 córdobas por manzana.

En la reunión organizada por la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), en Managua, el 17 de febrero pasado, los pequeños campesinos y los trabajadores rurales exclamaban: *"No queremos que las*

tierras intervenidas sean devueltas". Jaime Wheelock y Sergio Ramírez les dijeron explícitamente que las tierras "intervenidas" por el Estado (al margen del decreto n° 3) debido al sabotaje de los propietarios o a su no respeto de las leyes sociales, serían expropiadas (El País, 19.2.1980).

A partir de noviembre de 1979 se toman medidas para controlar los precios, con el fin de combatir la especulación. Cuando a comienzos de 1980 esta última se acelera, se forman Comités de Aprovisionamiento, organizados conjuntamente por los CDS (Comités de Defensa Sandinistas), la ATC y el INRA. La ENABAS refuerza sus redes de distribución directa para dar la batalla a los intermediarios especuladores. Se establece un precio máximo para todos los bienes de consumo esenciales.

Al mismo tiempo, la dirección del FSLN consolida las organizaciones de masas e impulsa importantes movilizaciones. La ATC celebró su primer Congreso los días 20 y 21 de diciembre de 1979. Cuenta con 60.000 afiliados en 14 departamentos. Organiza a los trabajadores agrícolas —proletarizados y semiproletarizados— y a los pequeños campesinos. El objetivo que se fijan sus dirigentes: agrupar a 200.000 campesinos de aquí a un año y medio o dos. La concentración de 30.000 campesinos, procedentes de distintas provincias, el 17 de febrero, demuestra la capacidad de movilización de la ATC. Ha empezado a organizar a los campesinos de la costa atlántica.

En esta primera manifestación se retomaron las principales reivindicaciones del Plan de Lucha de la ATC, presentado el 7 de febrero de 1980. Afectan tanto a las condiciones salariales y a la salud de los trabajadores de las haciendas del Estado y privadas, como a los derechos de gestión de los obreros agrícolas en las "unidades estatales de producción" y a medidas radicales a favor de los pequeños campesinos (supresión de la deuda con los bancos, reducción del tipo de interés del 14% al 5% etc.).

La ATC es un instrumento privilegiado por el FSLN para hacer frente al sabotaje y al contrabando en la agricultura, y para llevar a cabo la Reforma Agraria. En este sentido iban dos de las consignas de la manifestación del 17 de febrero: *"Sólo los campesinos y los obreros irán hasta el final, sólo su fuerza organizada permitirá la victoria"*, y *"Sin la organización de los trabajadores de la tierra no podremos avanzar"*.

De cara a la organización de las masas campesinas, la campaña de **alfabetización** —que se ha fijado el objetivo inmenso de alfabetizar a 590.000 personas— desempeña un papel importante. Ha sido concebida como una campaña de **politización** y de alfabetización. Con este fin se ha movilizado masivamente a la juventud estudiantil; las "columnas" que recorrerán el país formarán sin duda una fracción de las futuras milicias populares.

La Reforma Agraria es entendida por los

dirigentes del INRA *"no como un proyecto de desarrollo técnico-agrícola, sino ante todo como una parte integrante de un programa político-social que se inserta en el marco de las líneas maestras generales de la revolución popular sandinista"* (Boletín del INRA — Los objetivos de la Reforma Agraria).

Se pone el acento en la formación de **unidades estatales de producción**, que o bien combinan la producción y la transformación de los productos (proyecto *Agroinra*), o bien están consagradas únicamente a la producción (*Fincas Nacionales*). Las *"fincas asociativas"* son haciendas que agrupan a pequeños campesinos. No son propietarios de la tierra, únicamente se las dan en usufructo. Las tierras no pueden ser fraccionadas. Las *"fincas asociativas"* son presentadas por el FSLN como una respuesta al problema de los minifundios.

La actividad del INRA se ha intensificado de cara a los campesinos pequeños y medianos, para organizarlos en cooperativas, asegurarles los créditos, los abonos, unas condiciones de venta adecuadas de los productos (cooperativas de venta y de compra, vinculadas a la ENABAS).

Wheelock declaró ante los representantes de 42 cooperativas cafetaleras, que agrupan a un millar de campesinos pobres: *"Una época ha pasado definitivamente, la del pequeño productor sin medios técnicos, sin carretera, sin posibilidades de crédito, que tiene que pagar precios altos para comprar los productos de primera necesidad y que recibe un precio muy bajo por la venta de su producción... No les permitiremos a los grandes productores entrar en las cooperativas, porque no tienen ningún derecho a ello. No pueden reclamar el derecho de organizarse, esos que desorganizaron durante tanto tiempo a los pequeños cultivadores y los estrujaron en santa alianza con el somocismo"*.

La atención prestada a los campesinos pequeños es muy intensa y los lazos entre la ATC y la CST (Central Sandinista de Trabajadores) se han consolidado. Esta organización de pequeños campesinos y esta alianza con los trabajadores constituyen una tarea prioritaria a los ojos de la dirección del FSLN, no sólo para impedir que esta fuerza social pueda ser utilizada por la contrarrevolución, sino también para responder al problema urgente de la producción de bienes alimenticios y al sabotaje iniciado por los grandes y medianos propietarios.

La CST: de la defensa de la "economía mixta" al control obrero

Durante los últimos meses, la CST ha crecido considerablemente. Según el secretario de organización de la Central, Denis Meléndez, cuenta con 320 sindicatos, de los que 148 están en Managua. Organiza a unos 100.000 trabajadores (obreros, empleados,

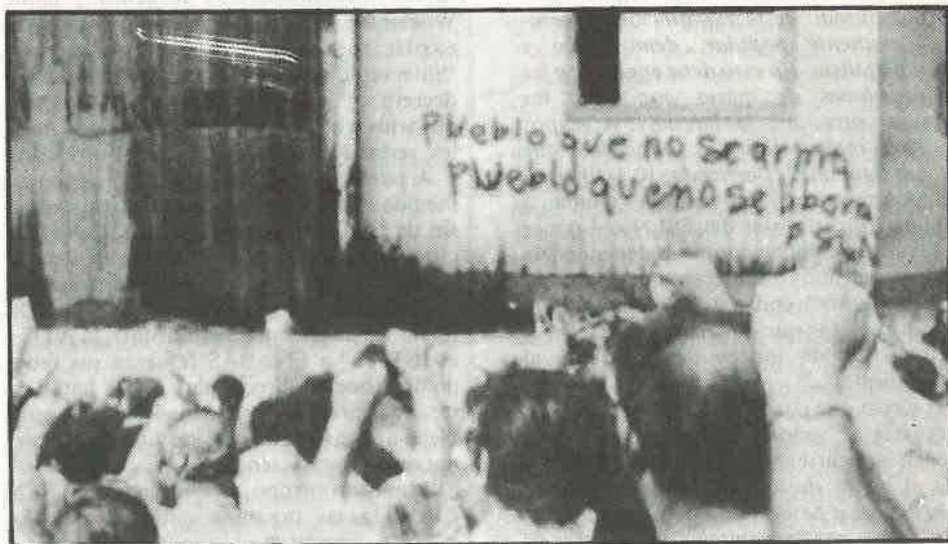
América Latina

etc.).

Para valorar la amplitud de la sindicalización, al socaire de la victoria de julio, hay que saber que en 1974 había 10.400 sindicados (600 en la agricultura, 1.800 en la industria y 8.000 en la construcción). Entre 1974 y 1976, el movimiento sindical se reforzó, y entonces se estimaba que el número de afiliados era de 25.000. Una simple suma de los miembros de la ATC y de la CST revela el cambio radical que se ha producido en el nivel de organización de las masas trabajadoras.

En un discurso pronunciado el 10 de diciembre de 1979, con ocasión del primer seminario de cuadros de la CST, y reproducido en su órgano, *El Trabajador*, el comandante de la Revolución, Carlos Núñez, resume las normas de conducta del cuadro sindical. De este modo revela también las ambigüedades de una orientación sindical que debe obedecer a los objetivos de una "economía mixta":

"... desplegar todos los esfuerzos para resolver la cuestión del paro, estando dispuesto a ganar un poco menos para que los demás parados puedan trabajar, ser consciente de que este problema sólo podrá resolverse si volvemos a poner en marcha el aparato productivo con la participación de los trabajadores, de los pequeños y medianos productores, de sectores de la iniciativa privada..., esto es ser sandinista; convencer a las organizaciones de izquierda y democráticas de la función de las organizaciones de masas en las nuevas condiciones, considerar al Estado como un instrumento que garantiza los intereses de todo el pueblo, educar a las masas, y particularmente a los trabajadores, en torno a la dramática situación del país para que comprendan plenamente el por qué de una serie de medidas que a veces lesionan a sectores relativamente acomodados para satisfacer las necesidades de los que están hundidos en la más profunda miseria, y obtener apoyo de todos, esto es ser sandinista; defender el salario real, mantener el poder adquisitivo de la moneda, combatir la especulación, poner fin a toda tendencia inflacionista que afectaría a los planes del gobierno revolucionario, esto es ser sandinista; estar dispuesto a los peores sacrificios, a una política sistemática de austeridad, exigir que sea el vector de la política de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, aunque ello implique la necesidad de consumir cereales de base y de eliminar las mercancías de lujo y el gasto en productos que no tienen nada que ver con nuestras necesidades más urgentes, esto es ser sandinista; apoyar con entusiasmo las medidas destinadas a emplear de 80.000 a 90.000 obreros en la construcción —aunque para lograrlo cada obrero tenga que ganar algunos córdobas menos— y comprometerse plenamente a trabajar a ritmos acelerados en los trabajos iniciados, sin perder tiempo, sin estimular la apatía, sin exigir



menos horas de trabajo, y, por el contrario, estar dispuesto a entregar horas de trabajo al fondo de subsidios de paro y a trabajar gratuitamente los fines de semana para que este dinero pueda invertirse en otros proyectos, esto es ser sandinista; convencer a nuestro pueblo del carácter del régimen que está construyendo, del modelo económico mixto - propiedad estatal, propiedad privada, propiedad mixta - y que, por consiguiente, se experimentarán unas relaciones laborales totalmente nuevas, sujetas a las leyes del país, esto es ser sandinista; combatir con energía a las organizaciones ultraizquierdistas, las de izquierda que se equivocan y difunden el economicismo entre los trabajadores, apoyar los estímulos atribuidos a la iniciativa privada para que esta participe en el plan de reactivación de la economía del país, sabiendo que esto se hará en bien de la nación, esto es ser sandinista" (22.12.1979).

Esta orientación no dejará de crearles dificultades a los cuadros de la CST. En primer lugar, porque entre las amplias masas se espera con ansiedad una redistribución de las rentas. Además, dicha política - en una economía en que el sistema de producción está mayoritariamente en manos del sector privado que combina el sabotaje, el atentismo, con la exigencia de garantías para invertir - conduce a tratar de limar las asperezas de los enfrentamientos entre las clases y puede dificultar rápidamente la movilización y la organización sindical de las masas.

Finalmente, algunas organizaciones sindicales minoritarias - como la CUS, vinculada a la AFL-CIO - se alzan como portavoces de las reivindicaciones salariales de algunos sectores de la clase organizados desde hace un período relativamente largo, no para emprender una batalla anticapitalista, sino para mantener posiciones frente a la CST. Moisés Hassán, miembro de la Junta, militante del FSLN y antiguo dirigente del MPU (Movimiento del

Pueblo Unido), reconoce explícitamente el problema: "Esto (esta política de austeridad y de aumento de la productividad) coloca a los dirigentes de la CST en una posición difícil. Representan los intereses de los trabajadores, pero en el período actual un trabajador consciente sabe que no puede reivindicar un aumento de su salario debido a la situación del país" (*The Miami Herald*, 1.2.1980).

Pero frente al sabotaje y la evasión de capitales, la CST y el FSLN han lanzado, desde comienzos de año, una campaña de denuncia. Proponen el control obrero como el instrumento más eficaz para poner fin a estas prácticas: "El control obrero de las organizaciones de clase debe desempeñar un papel fundamental en la vigilancia, para que cese la descapitalización en las empresas y no se exporten bienes ni capitales de forma ilegal. Es tan importante, sinó más, como las medidas legales adoptadas para controlar las prácticas ilegales de empresarios antipatriotas. Las tareas de vigilancia permiten conocer el coste real de los productos, saber si se los exporta y cómo son exportados. Cuando se descubren procedimientos de este tipo, hay que denunciarlos inmediatamente, defender la herramienta de trabajo, exigir que se mantengan los niveles de producción y exigir el control de la contabilidad real de esa empresa. Si se afirma que los trabajadores son los principales protagonistas de esta revolución, que como clase revolucionaria son el principal apoyo y actor, no es por nada. Este proceso se impulsa y asegura en el terreno de la práctica concreta, cotidiana, y a través del ejercicio del control obrero, manteniendo y aumentando la producción en la perspectiva señalada por el Programa de Urgencia y de Relanzamiento Económico al servicio del pueblo para el año 1980" (*Poder Sandinista*, 14.2.1980).

A comienzos de febrero, la CST presenta un plan de lucha cuyos aspectos principales

son: asegurar el salario mínimo para los más desfavorecidos, aumentar este salario en una segunda etapa, aumentar el salario social, rebajar los salarios más "jugosos" de algunos administradores, para respetar las normas igualitarias, revisar el Código del Trabajo, campaña contra el "burocratismo" de numerosos cuadros del aparato de Estado, creación de centros de aprovisionamiento en los lugares de producción, construcción de clínicas populares gracias al trabajo voluntario, apoyo al plan de relanzamiento económico, por la unidad de los trabajadores (central única), contra la derecha y la ultrazquierda (*Barricada*, 7.2.1980 y 13.2.1980).

Defender la Revolución

Paralelamente al esfuerzo de organización de la CST y de la ATC, el FSLN prosigue su campaña de movilización de las mujeres y de la juventud, estructurando la *Asociación de Mujeres Nicaragüenses*, la *Juventud Sandinista 19 de Julio* y la *Asociación de Niños Sandinistas*. Los CDS siguen siendo fundamentalmente organismos integrados en tareas de gestión y organización a nivel de barrio.

El 24 de febrero de 1980 se crearon las **Milicias Populares Sandinistas**. El 16 de diciembre, Tomás Borge, en una reunión de miembros de la policía nacional sandinista, precisó las líneas maestras de la organización de las milicias: *"Vamos a organizar a decenas de miles de nicaragüenses en las milicias populares sandinistas. La participación del pueblo en su conjunto, mediante la organización de las milicias, es necesaria. Si un día vienen a atacarnos a nuestro país, no sólo tendrán que enfrentarse al ejército sandinista, sino a todo el pueblo en armas... Son los trabajadores mismos en las fábricas, los estudiantes en las escuelas, los que serán milicianos. Asegurarán la guardia de sus fábricas, de su lugar de trabajo, de sus escuelas, de las universidades. Porque algún día, nuestros enemigos nos atacarán de todas partes... En las fábricas, todos los trabajadores querrán integrarse en las milicias para defender su fábrica. En primer lugar, por supuesto, en las que ahora pertenecen al pueblo, pero también en las empresas del sector privado. Vamos a organizar milicias para defenderlas. A menudo, por supuesto, esto no le gustará al patrón. Esto no le gustará, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Vamos a organizar a los trabajadores de las fábricas, no sólo en los sindicatos, sino también en las milicias y en otras organizaciones de masas."*

Barricada, en su editorial del 24 de febrero de 1980, explica claramente la función de las milicias: *"Mientras que el EPS es el instrumento militar de los trabajadores y campesinos, bajo una dirección revolucionaria, las milicias populares son la más alta expresión del pueblo en armas. En los*

lugares de trabajo y en las escuelas, en las aldeas y en los barrios, en los ministerios y en las oficinas, las masas populares pueden unirse a las milicias para defender la revolución. Las milicias son de carácter voluntario, pero es un deber de todos los nicaragüenses unirse a ellas para defender las conquistas revolucionarias de todo el pueblo".

Junto a la creación de las milicias populares se desarrolla una campaña sistemática de politización y educación en el EPS.

Así, como contrapunto a las declaraciones sobre la economía mixta o la "unidad nacional", hay una preocupación constante: un esfuerzo por organizar a las masas y controlar directamente las instancias clave del aparato de estado.

Préstamos contra la "vía cubana"

La actitud de la burguesía está directamente relacionada con esta **situación contradictoria** - y eminentemente transitoria - que impera actualmente en Nicaragua.

Por un lado, los capitalistas y terratenientes, apoyándose en sus bases económicas y en la ayuda imperialista, tratan de arrancar concesiones. Por otro lado, el mayor control del FSLN sobre las palancas de mando y la organización política, social y militar de las masas les inquietan mucho y los llevan a sabotear más o menos abiertamente, a pasarse al campo de los "vendepatria".

Estos dos aspectos aparecen en una encuesta realizada en Nicaragua, entre los dirigentes del COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), por la *Christian Science Monitor*: *"Los que poseen empresas importantes y tierras se quejan más que nadie, pues temen que el gobierno preste demasiada atención a los pobres y no se preocupe lo suficiente de las necesidades del sector privado. La principal organización patronal, el COSEP, ha aceptado el plan económico para este año, pero tiene muchas dudas sobre el lugar que le será asignado para participar en él..."* (11.2.1980).

En el comunicado publicado para explicar su aceptación del Plan, lo fundamental de la posición del COSEP consiste en exponer que es necesaria la "unidad" y la "armonía" entre todas las componentes sociales de la nación, para tener éxito en la aplicación del Plan y para evitar *"caer en el impulso de otros modelos revolucionarios"* (*La Prensa*, 18.1.1980). La referencia a Cuba salta a la vista.

Los discursos y declaraciones de la jerarquía religiosa van en la misma dirección: la advertencia contra el "totalitarismo" se ha convertido en el *leitmotiv* de quienes reivindican la libertad de la "iniciativa privada" y el respeto del "pluralismo".

Al no disponer de fuerzas políticas organizadas con una base sólida, al no tener a su servicio una fuerza militar, la burguesía se ve obligada a obrar con cautela para defender y posteriormente reforzar sus posiciones. Trata de utilizar de manera combinada su control sobre una parte considerable del aparato de producción, su influencia directa en el sector financiero del Estado, sus lazos con las organizaciones patronales de América Central y las burguesías latinoamericanas, y las manobras de las instituciones monetarias y bancarias internacionales, cuyos préstamos son decisivos para financiar el grueso de los proyectos de inversión estatal previstos en el Plan.

La burguesía imperialista no camufla sus intenciones al respecto. En un editorial del *Washington Post* se puede leer: *"Un nuevo préstamo de 75 millones de dólares tiene por objeto demostrar a los nicaragüenses que existe una alternativa al modelo cubano, y responder a las necesidades de créditos de la clase media. Muchos empresarios esperan esta señal de los Estados Unidos antes de comprometer su fortuna y sus energías en el combate por una sociedad abierta (sic)"* (*International Herald Tribune*, 22.2.1980).

The Economist, a su vez, *"que, aún hay razones para esperar que las necesidades de dinero de los sandinistas para reconstruir las ciudades devastadas de Nicaragua (dinero que Cuba no puede darles, mientras que los Estados Unidos sí pueden), reforzará los espíritus independientes entre ellos"* (22 y 29.2.1980).

Robelo reconoce explícitamente que *"en ese tipo de organismo (Banco Mundial, FMI...), hemos tenido una buena acogida. El flujo actual nos infunde optimismo en cuanto a la disposición de estos organismos internacionales a ayudar a la reconstrucción"* (*Tercer Mundo*, diciembre 1979).

Esta disponibilidad calculada de los organismos financieros internacionales es el reflejo de una opción política del imperialismo norteamericano, aunque de momento en muchos casos sólo se trata, de hecho, de una refinanciación de la deuda.

Frente a la ayuda restringida de la URSS y de Europa del Este, los Estados Unidos se perfilan como uno de los "donantes" menos avariciosos.

A comienzos de enero, Washington había vertido un total de 28 millones de dólares en Nicaragua, en forma de donativos, de suministro gratuito de alimentos, de préstamos en condiciones excepcionales (*Barricada*, 13.1.1980). Además se ha abierto una línea de crédito de unos 25 millones para la compra de bienes alimenticios.

Sin embargo, la última sesión a puerta cerrada (¡la tercera en 150 años!) de la Cámara de Representantes estadounidense, para tratar de las condiciones de una ayuda

América Latina

de 75 millones de dólares, revela las dudas de algunas fracciones de la burguesía imperialista en cuanto a la eficacia de esta política: el proyecto, pese a las enmiendas introducidas, fue adoptado por 202 votos contra 197. La voluntad de precisar las condiciones de la ayuda la convierte en un chantaje explícito.

Los 75 millones de dólares votados no pueden emplearse para la campaña de alfabetización en las escuelas en que hay enseñantes cubanos, y lo esencial de ese dinero debe ir al sector privado, etc. esta ayuda podrá suspenderse inmediatamente si el gobierno juzga que la influencia cubana va en aumento o si Managua apoya las guerrillas en América Central.

El Banco Mundial concedió en enero de 1980 un préstamo de 52 millones de dólares a plazo muy largo, 20 y 50 años (*La Prensa*, 11.1.1980). El FMI ha dado luz verde a un crédito de compensación, sin condiciones, de unos 22 millones de dólares. Ha aumentado la cuota de DEG (derechos especiales de giro) de que dispone Nicaragua para saldar los déficits de su balanza de pagos (*Barricada*, 18.1.1980). El *Inter-American Development Bank* discute de un préstamo, en condiciones muy favorables, de varios centenares de millones de dólares en tres años. El *Bank of America* asume la dirección de un consorcio de bancos privados para renegociar las condiciones de devolución de la deuda, tras conceder una moratoria de dos años para los 490 millones de dólares que les debe el sector público.

Así, el imperialismo está decidido a utilizar al máximo la extrema penuria que sufre Nicaragua, su enorme endeudamiento ante los bancos privados imperialistas y las instituciones financieras internacionales, y el relativo aislamiento - con la excepción de Cuba - en que la abandona la burocracia de los estados obreros. Cuba acaba de decidir, en efecto, una ayuda muy importante de 50 millones de dólares para 1980 (*Barricada*, 26.2.1980); esto constituye un esfuerzo considerable, vistas las dificultades económicas que conoce Cuba.

Esta política imperialista se articula con el lugar que ocupa en la economía la burguesía y su influencia en las instituciones financieras del Estado. Arturo Cruz, que trabajó durante mucho tiempo en la IDB en Washington, es el director del Banco Central. Joaquín Cuadra Chamorro, vinculado anteriormente al Banco de América, ocupa un puesto clave en las finanzas. Cruz explica, en una larga entrevista publicada en *Barricada*, el papel decisivo del Banco Central en la aplicación del Plan económico. Precisa asimismo que "debemos recordar que el programa de reactivación para 1980-1981 se efectúa con una balanza de pagos con un importante déficit por cuenta corriente en 1980. Esto implica que por un lado deberemos proseguir nuestra política destinada a estimular al máximo las exportaciones, y por otro ob-

servar una conducta de las más austeras en lo que se refiere a las divisas" (18.1.1980).

La orientación de Cruz coincide con las ideas de la CEPAL, que sobre la base de una economía mixta" propone un modelo intermedio de industrialización basada en la sustitución de las importaciones y en la exportación de productos agroindustriales.

Entre las burguesías latinoamericanas, la de México - interesada en el mercado centroamericano - es la más activa en la ayuda económica y en las relaciones con Nicaragua, con el objetivo de mantenerla dentro del sistema capitalista. El mexicano Bernardo Quintana encabezaba, en enero de 1980, una delegación de la Federación Interamericana de Cámaras de la Construcción, que visitó Managua. Acudió a discutir sobre su posible participación en el Plan de reactivación económica. Quintana declaró que *América Latina debe ser construida por América Latina*" (*La Prensa*, 13.1.1980). Haciendo gala de un lenguaje "independentista", trató de obtener una parte de los créditos internacionales concedidos a Nicaragua para su reconstrucción. Declaró su apoyo, junto con sus acólitos del Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, a los representantes de la Cámara de la Construcción de Nicaragua.

Sin embargo, inquietos por los acontecimientos que se desarrollan en América Central y en la propia Nicaragua, en más de un gobierno latinoamericano se denota un cambio de actitud. Carrazo, de Costa Rica, abunda en sus declaraciones ferozmente anticomunistas. Los socialcristianos de Venezuela no ocultan su oposición radical al FSLN y son favorables a una intervención en El Salvador. El gobierno Turbay de Colombia ha lanzado toda una campaña contra Nicaragua, que al declarar nulo el tratado de 1928 con Colombia y al ampliar sus aguas territoriales, pone en tela de juicio la posesión por el Estado colombiano de las islas San Andrés y Providencia.

Por un lado, la burguesía de numerosos países latinoamericanos multiplica las iniciativas para consolidar los lazos de Nicaragua con la economía capitalista internacional, y por otro se prepara para una contraofensiva con miras a tratar de quebrar el ascenso revolucionario en la región.

Una "transición lenta"

La discrepancia entre una serie de iniciativas tomadas por el FSLN, en el terreno de la organización de las masas y el establecimiento de un Plan económico que descansa en el funcionamiento presuntamente "armónico" de los tres sectores (privado, mixto y público), no puede prolongarse demasiado. La dinámica real de los enfrentamientos entre las clases,

estimulados por la profunda crisis socioeconómica, por el empuje de las masas tras la victoria de julio de 1979, por el grado de organización y movilización de los trabajadores y campesinos que reconocen en el FSLN a su dirección, por la resistencia de las fracciones de la burguesía, por las iniciativas del imperialismo en el actual contexto de crisis en América Central, amenaza con poner patas arriba más de un plan y más de una declaración, igual que en el pasado.

A la vista del legado del somocismo, de las destrucciones perpetradas por la Guardia Nacional, de la sangría provocada por la guerra civil, de los problemas de la reanudación de la producción, propios a todos los procesos revolucionarios, no cabe duda que se necesitarán tres años para reparar simplemente la maquinaria económica. Por supuesto, sobre el papel puede trazarse una "transición lenta", en la que se combinan por un lado una economía "mixta" (es decir, capitalista); y por otro, el refuerzo de las organizaciones de masas (sindicatos, CDS y milicias), así como un creciente desplazamiento de la burguesía de los centros de decisión.

Pero no podrá resistir los embates de las fuerzas sociales. Habrá que cortar el nudo, habrá que romper la alianza con sectores de la burguesía (lo que es distinto del intento de integrar a los cuadros técnicos, dada la penuria de personal cualificado), so pena de que esta refuerce sus posiciones y encuentre incluso algún "espíritu independiente" en el FSLN.

Cerca del 30% de la población activa en paro, gran número de familias - casi cien mil - malviviendo al nivel de subsistencia, una masa de pequeños campesinos esperando créditos, abonos, etc., un déficit muy grave de la balanza alimenticia, estos son algunos de los problemas a que las masas y el FSLN deberán responder.

Está claro que esta respuesta no radica, por ejemplo, en un incremento de los salarios directos de un sector de la población asalariada. Como subraya el FSLN, en la fase actual se trata de incrementar el salario social (educación, guarderías, sanidad, vivienda, distribución de alimentos y de agua, transportes a precio reducido etc.), para responder a las necesidades de las masas y estimular su organización.

Pero esta solución exige un control estrecho sobre el sobreproducto social, sobre todas las decisiones estratégicas en el terreno de las inversiones. A los trabajadores puede pedírseles un esfuerzo considerable si existe la seguridad de que las opciones en torno a la reinversión del excedente pueden hacerse y se hacen en beneficio de ellos y con su participación directa. Esto conduce inevitablemente a un enfrentamiento con el sector privado, que tiene poder de decisión sobre un volumen de inversiones muy grande, y que no puede

obedecer al mismo tiempo a los imperativos de la economía capitalista y a la satisfacción de las necesidades sociales de la población trabajadora.

En la medida que se conceden créditos a los capitalistas y que sólo invierten marginalmente sus capitales propios, pueden volver a poner en marcha las empresas. Pero de ahí a relanzar un auténtico proceso de acumulación de capital hay una distancia nada despreciable, sin hablar ya de la misma naturaleza de las inversiones realizadas.

Un ejemplo puede servir para ilustrar las contradicciones que entraña la situación actual. El FSLN pidió a los trabajadores que ganan más de 1.500 córdobas al mes que renuncien voluntariamente a la paga extra de fin de año para invertir esta suma en un fondo destinado a la creación de 15.000 puestos de trabajo. La patronal debía embolsar al Estado los importes equivalentes a estos "donativos". A mediados de febrero sólo se había recuperado una parte muy pequeña de estas entregas voluntarias de los trabajadores. Los patronos no tienen prisa en devolverlos a las cajas del Estado. El objetivo de crear 15.000 puestos de trabajo puede no ser alcanzado.

Otro ejemplo: el FSLN ha emprendido un esfuerzo considerable para luchar contra la especulación. Todas las experiencias del pasado demuestran que el éxito de este combate debe basarse en el control efectivo de la oferta (producción), de la distribución, y en la participación de las masas, máxime cuando incluso si se alcanzan dichos objetivos, se manifestarán tensiones debido al déficit real.

Pero la extensión del control existente actualmente, y de la movilización popular, sólo puede provocar choques con propietarios grandes y medianos, y con un sector de la distribución. Esto ya se ha dado en relación al arroz, sector en el que grandes propietarios son fuertes. En el mercado oriental de Managua, los CDS se enfrentan a los mayoristas y grandes comerciantes, organizados en la Cámara Nacional de Comercio (1).

Las huelgas que estallaron en la industria azucarera (Azucarera de San Antonio), en los hospitales y en la construcción (4.000 trabajadores de los tajos de Managua), revelan también las tensiones sociales producidas por la situación socioeconómica, aunque sea cierto que algunos dirigentes de los antiguos sindicatos se aprovechen de ellas para defender sus intereses particulares.

En estas ocasiones, la dirección del FSLN explica a los trabajadores, en diálogo directo, que el acento debe ponerse en una mejora del salario social, favoreciendo a los más pobres, y no en el salario directo. No recurre en absoluto a las amenazas o medidas represivas, y ante la presión obrera concede una parte de las reivindicaciones.

Frente a la resistencia de la burguesía in-

dustrial y terrateniente, al igual que frente a las amenazas que blande el imperialismo, el FSLN declara que los campesinos y obreros representan la única fuerza que puede llevar a término la revolución.

La creación de las milicias populares y la función que se les asigna, el programa de lucha de la ATC, la campaña de alfabetización, la respuesta de la CST a la COSEP (2) y su campaña contra el sabotaje patronal, las movilizaciones organizadas en Managua para denunciar el chantaje económico de los EE.UU. y las actividades de la CIA que reveló, de hecho, la sesión *a puerta cerrada* de la Cámara de Representantes - todo ello son indicios de que el FSLN se prepara para el enfrentamiento.

Pero al mismo tiempo, el FSLN crea un "bloque popular democrático", reuniendo en el seno de una coordinadora al Partido Socialista Nicaraguense (tendencia Luis Sánchez), al Partido Comunista de Nicaragua y a formaciones burguesas como el Partido Liberal Independiente, el Partido Popular Socialcristiano (partidos muy pequeños) y al Movimiento Democrático Nicaraguense (de Robelo). Este bloque ha sido creado con miras a la formación del Consejo de Estado - en el que se confirma la presencia de las organizaciones de masas -, a la aplicación del Plan económico y a la proclamación de una Constitución (*Barricada*, 20.2.1980).

Los ritmos que se perfilan (relanzamiento del cultivo del café y del algodón, recuperación del aparato industrial, decisiones referentes a las condiciones de la ayuda internacional y a la renegociación de la deuda (3), creación del Consejo de Estado prevista para el 4 de mayo, situación en El Salvador) serán determinantes para el porvenir de la revolución nicaraguense.

Van a producirse nuevas pruebas de fuerza. Si sus plazos no son en absoluto rígidos, no pueden ser aplazadas más allá de ciertos límites mediante maniobras tácticas y juegos de equilibrio. Se producirán en el terreno político, económico e internacional, pues es imposible asociar a los capitalistas a la transformación socialista de la economía y el imperialismo hará todo por arrebatárselo al pueblo nicaraguense la dirección de su propio destino. Su resultado dependerá de la relación de fuerzas sociales, con sus reflejos en el seno mismo de la dirección de la revolución, que se establezca en el curso de las movilizaciones.

El imperialismo norteamericano despliega sus esfuerzos para estrangular y golpear el ascenso revolucionario en El Salvador e impedir su extensión a Guatemala y Honduras. Cualquier éxito en esta dirección no haría sino reforzar el chantaje económico (bloqueo) y los golpes de mano militares contra la revolución nicaraguense.

El apoyo a la revolución en América Central debe estar en el centro de las preocupaciones y actividades de los revolucionarios

de la Cuarta Internacional, particularmente en América Latina.

NOTAS

(1) El 9 de marzo, 2.000 pequeños comerciantes del Mercado Oriental protestaron contra la política de control de precios, reclamando "un comercio libre en una Nicaragua libre".

(2) "Hoy en día, estos señores reclaman un puesto en esta revolución y hablan de su unidad y su consolidación, pero no hablan del apoyo incondicional a la revolución, no hablan de crear puestos de trabajo con el dinero que han depositado en el extranjero, ni de adoptar posturas honestas en el relanzamiento económico, lo único que les permitiría ocupar un sitio en el proceso...Aquí, el único juego que vale, es la voluntad garantizada por 40.000 muertos y 80.000 huérfanos, que exigen que este proceso llegue a su punto culminante, el triunfo de la clase obrera."

(3) De momento, las instituciones financieras han acordado, de hecho, una moratoria. Al organizar la refinanciación de la deuda, tratan de obtener compromisos más sólidos por parte del FSLN, y de influir en las opciones estratégicas y, por tanto, políticas. La táctica de tratar de aplazar los vencimientos, a la vista de las necesidades de la reconstrucción y de la constitución de una reserva de divisas - de 3 millones en julio ha pasado a 123 millones en diciembre - no puede ser rechazada. En realidad, la cuestión crucial se refiere a la aceptación o no de las condiciones que refuerzan efectivamente el sector privado y tienden a limitar las medidas favorables a las masas.

La prohibición de "PUEBLO" y la condena de sus dirigentes

C.A. UDRY

EL 23 de enero de 1980, las fuerzas de seguridad del FSLN ocupan los locales del diario *El Pueblo* y detienen a siete dirigentes del Frente Obrero. El 4 de febrero, el responsable del periódico, Melvin Wallace, se entrega a las autoridades.

El Frente Obrero es el "frente de masas" y ala sindical del MAP (Movimiento de Acción Popular). El MAP procede de una antigua escisión del FSLN. Al comienzo adoptó una orientación maoísta pro-Pekín, manifestó después una inclinación por las posiciones pro-albanesas, con las consecuencias que de ello se derivan en la lógica de los juicios políticos sobre la URSS.

Durante la guerra civil, los militantes del FO participaron en la organización de las MILPAS (Milicias Populares Anti-Somocistas), que entraron en combate por el derrocamiento de la dictadura.

Barricada del 11 de febrero señala que el juez del distrito de Managua ha condenado a dos años de trabajos forzados a Melvin Wallace Simpson, Juan Alberto Enríquez, Carlos Cuadra Cuadra e Isidro Téllez, por "delito consistente en difundir por escrito proclamas, libelos y artículos cuyo fin es el de atentar contra los intereses populares y abolir las conquistas logradas por el pueblo". Se ha aplicado el artículo 4, párrafo c, de la Ley sobre el Mantimiento del Orden y la Seguridad Pública. *El Pueblo* ha sido clausurado.

El juez Víctor Manuel Ordóñez explicó que los acusados habían violado la ley porque los "individuos mencionados, por medio del diario *El Pueblo*, han lanzado ataques contra el proceso revolucionario, las autoridades de la Junta del GRN y los dirigentes del FSLN, sin tener en cuenta las profundas transformaciones sociales realizadas en favor de la gran mayoría, y han utilizado abiertamente este medio de información para atentar contra el orden público".

"Además, no sólo han atacado este proceso revolucionario en las páginas de *El Pueblo*, sino que hay pruebas suficientes de su apoyo a la organización Frente Obrero y al MAP, grupúsculos que han proclamado abiertamente su voluntad de desobedecer a las directrices de la JGRN y del FSLN, con el fin de defender intereses muy particulares" (11.2.1980).

Finalmente, en su discurso, el juez "hizo alusión a algunos números de *El Pueblo*, como el del 7 de diciembre de 1979, donde bajo el título 'Un marxista comenta la fiesta de la Inmaculada Concepción' se desarro-

llan una serie de argumentos contra esta tradición y contra su lugar en el actual proceso revolucionario. Otro número demuestra el interés de *El Pueblo* en atentar contra el orden público. En el número del 21 de enero de 1980 está escrito que el FSLN se aproxima cada vez más a la burguesía".

Barricada ha hablado de armas en poder del FO (2.2.1980). El Gobierno había exigido, en octubre de 1979, que se devolvieran todas las armas al EPS, con el fin de facilitar su armamento. Sin embargo, hay que subrayar que en el acta de acusación, tal como informa *Barricada*, no se alude a esta cuestión y que sólo se invoca el artículo 4, párrafo c, es decir, un artículo que trata del delito de opinión.

Ya a finales de setiembre y comienzos de octubre de 1979 habían sido detenidos algunos miembros de *El Pueblo* y del FO. Tras su puesta en libertad tuvo lugar una discusión entre ellos y el FSLN; una fracción de FO se adhirió entonces al FSLN.

A finales de diciembre y comienzos de enero de 1980, *El Pueblo* lanza virulentas acusaciones políticas contra el FSLN. En las huelgas en el sector nacionalizado, por ejemplo en la construcción en Managua, los militantes de FO forman coro, contra la CST, junto con sindicalistas dirigidos por una fracción estalinista y elementos corporatistas. La principal reivindicación que plantean es la del aumento de salarios.

Barricada los acusará de hacerle el juego a la burguesía y de dividir las filas obreras.

A comienzos del mes de enero, *El Pueblo* publica dos veces una larga declaración del Partido Socialcristiano, como publicidad, por razones financieras. El FSLN lanza un duro ataque contra esta publicación. *El Pueblo* reconocerá que no había sido una iniciativa feliz.

En repetidas ocasiones, *El Pueblo* difundirá noticias "sensacionalistas", que más tarde resultan falsas, como la de un pretendido ataque del EPS contra un puesto fronterizo de Honduras. Esta noticia había sido divulgada por una emisora de radio reaccionaria de Honduras.

Las fuerzas contrarrevolucionarias son las de la burguesía y el imperialismo

Básicamente, la línea política de *El Pueblo* es sectaria y ultraizquierdista. Basándose en las contradicciones reales y las debilidades del proceso revolucionario, *El Pueblo* y FO proponen una "marcha forzada al socialismo" y denuncian como compro-

so definitivo con la burguesía todas las opciones tácticas del FSLN. Además, esta denuncia no viene acompañada de ninguna propuesta, en positivo, de una orientación global que permitiera hacer avanzar a la revolución, movilizar y organizar a las masas.

Es evidente que una línea ultraizquierdista puede hacerle el juego a la burguesía en el transcurso de una revolución. Pero esto no implica en modo alguno que una corriente como la de *El Pueblo* y FO/MAP deba ser caracterizada de contrarrevolucionaria y colocada, a veces, al mismo nivel que la burguesía "vendepatria" y los somocistas.

Las fuerzas contrarrevolucionarias son las que están representadas por la burguesía y el imperialismo, incluidos los sectores burgueses que actualmente pueden parecer aceptar "meterse en el proceso", pero que sólo lo hacen para poder oponerse mejor después. Cuando el MDN de Robelo denuncia, junto con el FSLN, a los "ultraizquierdistas" que "pactan con la derecha", no lo hace sin duda para hacer avanzar la revolución.

El combate político contra una corriente del movimiento obrero que se caracteriza de ultraizquierdista no debe hacerse confundiendo con la reacción y la contrarrevolución. Esta batalla debe llevarse a través de un debate público (máxime con el prestigio que tiene el FSLN ante las masas) y tomando medidas que permitan contrarrestar el sabotaje de la burguesía, responder a las necesidades de las masas y favorecer su movilización.

Las medidas represivas adoptadas a causa de la difusión de ideas y escritos —cuando el principal diario de la burguesía, *La Prensa*, no deja de poner trabas a la revolución— pueden conducir a limitar la libre discusión en las organizaciones de masas (CST, ATC y CDS), y por tanto a limitar su capacidad de acción y la unificación de las masas trabajadoras. Esto puede ser incluso un obstáculo dentro del FSLN. Esto no puede sino minar la audiencia del FSLN e incluso dañar los intereses de la revolución.

El PC francés no se ha equivocado en esto. *L'Humanité* del 8 al 14 de marzo, presenta por un lado, falsamente, a FO como un grupo trotskista, y utiliza, por otro, las declaraciones de *Barricada* para afirmar que existe una "coincidencia" entre las maniobras de la CIA y la "actividad de determinados grupos izquierdistas". Pero *L'Humanité* hace esta campaña en nombre de una política de alianza con la burguesía, es decir, con las fuerzas sociales que se opondrán a cualquier avance de la revolución.

Por consiguiente, no podemos sino expresar nuestro desacuerdo con las medidas adoptadas y algunas explicaciones dadas, independientemente del juicio negativo que podamos hacer de la línea y las motivaciones de los dirigentes de FO/MAP.

Los PCs europeos trastornados por la intervención en Afganistán

Anna LIBERA

La entrada de los tanques soviéticos en Kabul ha suscitado, como era de esperar, reacciones tan vivas como diversas por parte de los partidos comunistas de todo el mundo. Reacciones que traducen tanto las dificultades de la burocracia soviética para despertar el apoyo unánime, siquiera de los partidos comunistas de Europa del Este, como las contradicciones de los partidos que se llaman eurocomunistas.

Si la mayoría de los PC en el poder en las democracias populares han aprobado la intervención, no han ocultado, sin embargo, la inquietud que les inspiran las nuevas tensiones en las relaciones internacionales que ha provocado. El PC rumano, por su parte, ha condenado la intervención, al igual que la Liga de los Comunistas Yugoslavos, que lo ha hecho en términos mucho más virulentos, exigiendo la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán y advirtiendo que una intervención similar en Yugoslavia chocaría con la resistencia armada del partido y de la población.

Ha sido la reacción de los PC occidentales la que más ha atraído la atención y suscitado la reflexión sobre la "muerte

prematura" del eurocomunismo y otras conclusiones precipitadas. Es cierto que entre el viaje triunfal de Georges Marchais a Moscú, y la asistencia de Enrico Berlinguer al Parlamento Europeo de Estrasburgo, el eurocomunismo pareció dar una gran espantada, peligrosa para su propia existencia.

¿Qué posiciones han adoptado los distintos partidos comunistas?

PCF: del silencio embarazoso al apoyo absoluto

Al día siguiente de la intervención soviética, *l'Humanité* órgano del PC francés, guarda un silencio prudente, limitándose a dar la noticia y añadir que "la operación no ha sido confirmada en Moscú." No era un buen momento para tomar posición: se estaba en plena tregua de fin de año y Marchais se encontraba de visita en Cuba.

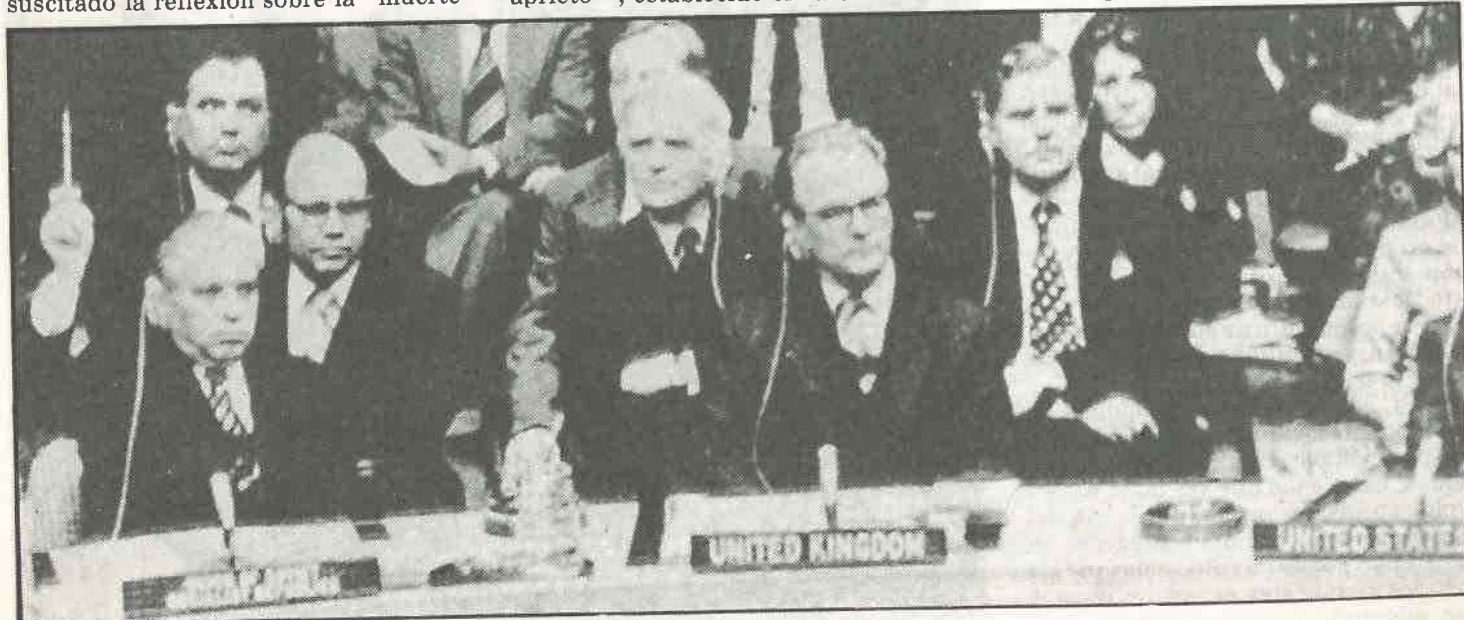
En *l'Humanité* del día siguiente, el 29 de noviembre, Yves Moreau justifica la intervención en términos aún embarazosos, desarrollando toda una elucubración que añade al principio de la "no ingerencia" —de la que se reclama el PCF y que a la sazón lo pone en un buen aprieto—, establecido en la Carta de la

ONU. "Para los comunistas franceses", prosigue, "son dos reglas fundamentales de las relaciones internacionales. La primera debe permitir a todos los Estados el ejercicio pleno de su soberanía y a los pueblos la libre determinación de su estatuto político, su régimen económico y social. La segunda regla no contradice, sino que complementa la primera, y garantiza, en efecto, que todo Estado tenga la posibilidad de precaverse contra las ingerencias exteriores apelando a sus aliados. Como se sabe, los soviéticos dicen haber respondido a tal llamamiento en Afganistán, de acuerdo con el Tratado firmado en diciembre de 1978 entre ambos países."

Ahí traza los primeros elementos de la línea que adoptará la dirección del PCF y que defenderá a bombo y platillo Georges Marchais.

Tras su vuelta precipitada de Cuba, éste hace suya inmediatamente la tesis soviética de la ayuda militar concedida a petición del gobierno afgano (sin embargo, la primera acción de los soviéticos será la de liquidar a ese gobierno). Esto lo adereza con un análisis internacional catastrofista, que afirma que el imperialismo está "con el agua al cuello" y concluye que los comunistas tienen que "tomar partido".

Para dejar muy claro cuál es el suyo, Marchais se traslada, con gran alarde de publicidad, a Moscú, donde celebrará largas entrevistas con los dirigentes soviéticos, y con Breshnev en persona. Desde un estudio de la televisión soviética remite unos cuantos insultos bien claros a los políticos franceses que critican su postura, cosa que reiterará pocos días después en una emisión de la televi-



El representante de la URSS vota una resolución del Consejo de Seguridad, que condenaba la intervención en Afganistán

sión francesa, con ese aplomo tan suyo.

L'*Humanité* del 11 de enero publica a toda plana el comunicado conjunto PCUS-PCF, que constata una coincidencia total entre ambos partidos en relación a la situación internacional, sin mencionar directamente, no obstante, a Afganistán.

Así, para la dirección del PCF las cosas son sencillas: las fuerzas de la revolución están a la ofensiva en todo el mundo: el imperialismo, acorralado, trata de lanzar agresiones reaccionarias: la URSS, como buena internacionalista que es, acude a socorrer a los pueblos amenazados, a petición suya. Ante esta agudización de los conflictos, los comunistas deben escoger claramente el lado de la revolución, que es el de la URSS.

La condena

En Europa occidental, únicamente los partidos comunistas de Alemania Federal y Portugal han adoptado una postura similar (aunque sin darle el mismo relieve que el PCF). Para Alvaro Cunhal, "la presencia de las tropas soviéticas responde a una petición formulada por el gobierno afgano en el marco de un acuerdo firmado entre ambos países." Por consiguiente: "A pesar de las campañas lanzadas por los países imperialistas, cuyo objetivo puede que sea el de ocultar sus propias contradicciones, la revolución afgana triunfará."

Los demás PC occidentales, así como los de México y Japón, en cambio, han condenado sin reservas la intervención y se han pronunciado a favor de la retirada de las tropas soviéticas (casi todos en un segundo tiempo).

En los primeros días de enero, el PC británico condenó severamente la entrada de los tanques soviéticos en Kabul, en nombre del respeto a la no ingerencia: el 14 de enero, en un editorial del *Morning Star*, el PCGB reclamaba la retirada de las tropas. En dicho editorial, "expresa su solidaridad con la revolución democrática, anti-feudal y antiimperialista del pueblo afgano", cuyos "problemas complejos no pueden justificar la intervención militar de otro Estado", y por esto "estamos en desacuerdo con la intervención militar soviética en Afganistán y exigimos la retirada de estas fuerzas."

Los PC belga, holandés, escandinavos, luxemburgués y finlandés adoptaron una posición parecida. Por razones evidentes, que tienen que ver tanto con su evolución más avanzada por la vía del eurocomunismo como su situación en sus propios países, las direcciones de los partidos comunistas español e italiano han adoptado posturas bastante más categóricas, acompañadas de ciertas



Los imperialistas concentran tropas en el Océano Índico

iniciativas y de una profundización de su "puesta al día" política y teórica. El PCE, no obstante, ha matizado más que el partido de Berlinguer.

El 3 de enero, el PCE declaraba, en un editorial de Mundo Obrero que **"la entrada de las tropas de un país en otro país viola los principios de soberanía e independencia, y contribuye a la tensión de las relaciones internacionales, creando nuevos peligros para la paz mundial."** Condena esta intervención, pero centra toda la denuncia en el imperialismo: **"Los Estados Unidos y las demás potencias que forman parte de la OTAN no tienen autoridad moral para reprocharle a la Unión Soviética su intervención militar en Afganistán."**

Al filo de los días, la dirección del PCE precisará sus críticas a la URSS (sin dejar de acompañarlas de la denuncia de la acción del imperialismo). Así, Azcárate, responsable de política internacional, explica: **"Es inadmisibles que una gran potencia utilice la fuerza en nombre del socialismo, para imponer su voluntad a un país vecino. Esto es violar los principios de independencia y de no ingerencia. Es también un comportamiento que está en radical oposición con las ideas fundamentales del marxismo. La Unión Soviética ha demostrado una vez más que su política se basa en consideraciones militares de gran potencia, y que desprecia los intereses de los pueblos (Entrevista en Libération, 18.1.1980)."**

Si bien Carrillo declaró ante los corresponsales de la prensa extranjera en Madrid que la URSS había dado muestras de "hegemonismo" y de "expansionismo", la crítica del PCE ha sido, globalmente, bastante moderada. Sucede que la condena de la intervención soviética no representa, ni mucho menos, la opinión unánime del partido, y Carrillo tuvo que defenderla ante asambleas encrespadas, como en Catalunya y en Galicia, por ejemplo, lo que le ha obligado a "equilibrar" sus juicios.

A finales de enero explicaba a una asamblea de militantes en Galicia: **"No cabe duda que hubo una interferencia anterior de la CIA y de los americanos. Pero responder a semejante actividad con una intervención militar, es un poco exagerado. Lo que es trágico, cuando un país interviene otro, es que después le es difícil retirarse. No digo que haya que darle garantías a la URSS para que repatrie sus tropas de Afganistán. Pero quizá haya que darle la seguridad de que se preservará la independencia de Afganistán"** Y concluyó: **"Los mejores defensores de la URSS somos nosotros, pues nosotros queremos que no se quede aislada."**

(Citado por Le Monde, 30.1.1980).

Sin embargo, el secretario general del PCE, que a finales de enero se reunió con Berlinguer en Roma, pudo declarar: **"No estamos a medio camino entre Marchais y Berlinguer. Estamos decididamente y sin ninguna duda al lado del PCI, cuya línea compartimos enteramente."** (Citado por La Republica, 27.1.1980). Y el comunicado conjunto del PCE y del PCI condena firmemente la intervención soviética, concluyendo: **"En este contexto, el PCI y el PCE constatan que dichos acontecimientos subrayan la actualidad de una estrategia -la del eurocomunismo- basada en el entendimiento de las fuerzas del movimiento obrero y democrático de Europa occidental, y la necesidad de desarrollarla."** (L'Unità, 27.1.1980).

El PCI es el partido que más lejos ha ido, tanto en la condena de la intervención soviética como en el análisis de las responsabilidades de la URSS en la agravación de las tensiones internacionales,

El 6 de enero, el mismo día en que Berlinguer había despedido friamente a Marchais, que había hecho escala, en Roma, camino de Moscú, para consultarle, la dirección del PCI publicó su primera declaración de condena de la intervención, invocando la independencia nacional y la soberanía de los pueblos, recordando que las revoluciones no se exportan, del mismo modo que tampoco las contrarrevoluciones y denunciando vigorosamente a los dirigentes soviéticos, que se encierran en la lógica de los bloques y ponen en peligro la distensión. Esta declaración no habla de la retirada de las tropas y no dice palabra alguna contra los proyectos del imperialismo.

Pocos días más tarde, Giancarlo Pajetta, ministro de Asuntos Exteriores del PCI, expone las razones de esta condena: **"No podemos olvidar que en las montañas afganas se han perdido, además de las vidas de soldados soviéticos y afganos, millones de consensos en el mundo entero, se ha metido la tormenta en las conciencias, se han desmovilizado fuerzas que, por el contrario, hay que agrupar y movilizar si se desea - y este es el caso- la coexistencia pacífica y la independencia de los pueblos, la reanudación del proceso de distensión y por tanto la garantía del desarme (...). En tanto que comunistas no hemos tenido ningún miedo ni ninguna duda en resaltar, mediante nuestra condena, de la intervención soviética y la expresión de nuestro desacuerdo inequívoco con los comunistas de la URSS y de otros países, nuestro internacionalismo y nuestro prolongado compromiso para salvar**

la paz, en interés de nuestro país y del mundo entero" (Rinascita, 11.1.1980).

La dirección pone esta acción "para salvar la paz" en manos de los gobiernos burgueses y de la OTAN. Este es el sentido de la moción de cuatro puntos que presentó Berlinguer en el Parlamento de Estrasburgo, de mayoría reaccionaria:

El Parlamento condena la intervención de la URSS en Afganistán;

exige la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán;

pide a los países europeos miembros de la OTAN que obren en esta institución con miras a que prevalezca la línea negociadora;

invita al Consejo de Ministros de la CEE que asuma una postura común el pro de la distensión.

Belinger en persona irá a defender esta moción, que tanto hace el juego a los gobiernos imperialistas. El PCI apoyará en Estrasburgo una moción, parecida a la suya en todos sus puntos, presentada por el grupo socialista europeo, que por razones de susceptibilidad política no quería votar un texto presentado por un partido comunista.

Tercera etapa de la reacción del PCI: Berlinguer defiende su posición ante una asamblea de secretarios de las federaciones provinciales de su partido, donde se elevaron numerosas críticas contra la posición de la dirección, por estar demasiado... alineada con los gobiernos occidentales. Afirma que el PCI no tiene una posición neutral entre los EE.UU. y la URSS, pero achaca a la URSS la responsabilidad de la situación actual.

Berlinguer subraya primero algunos "errores hay que subrayar, prosigue, que **"estas posturas norteamericanas vinieron acompañadas de una política de no intervención, y todavía menos militar, en regiones del mundo en que, sin embargo, se desarrollaban y triunfaban movimientos revolucionarios (...). Al mismo tiempo, la URSS, que si bien es cierto que continuaba con su política de desarrollo de la distensión en Europa(...), aprovechó también ciertos factores objetivos de la situación (lo que se denomina el complejo de Vietnam, de los EE.UU., la crisis de prestigio de los EE.UU. a escala mundial, para intervenir directa e indirectamente en determinadas regiones de Asia y Africa (Angola, Etiopía, Camboya)"**.

Ahí están las causas de la agravación de la situación internacional. Entre los "errores" de Carter y las intervenciones militares de la URSS, la balanza se inclina claramente en detrimento de esta última, a los ojos del secretario general del PCI.

¿Una "muerte prematura" del eurocomunismo?

La cacofonía de las declaraciones de los dos principales partidos eurocomunistas ha llevado a más de un observador, e incluso de un militante de esos partidos, a dibujar precipitadamente la escuela del eurocomunismo. Sin embargo, ninguna reacción impresionista permite explicar seriamente los fenómenos a los que estamos asistiendo.

En efecto, el eurocomunismo no es la opción subjetiva de un "buen" secretario general opuesto a un "odioso" estalinista; es un hecho objetivo, producto y respuesta al mismo tiempo a la crisis del stalinismo, del que no pueden escapar los PC de masas so pena de pagar un fuerte precio.

Lo explicamos en su tiempo a partir de los siguientes factores:

1. El control monolítico del Kremlin sobre la Komintern llevaba en sí mismo los gérmenes de su desintegración. La línea del "socialismo" en un solo país", utilizada para justificar la sumisión de los PC a la URSS, iba a alimentar también el crecimiento de tendencias nacionalistas en el seno de los distintos PC. Este fenómeno se manifestaría particularmente en los PC más importantes, que tenían sus propios lazos con sus burguesías respectivas. La inserción más profunda de estos PC en su sociedad nacional, el incremento su peso electoral y de su presencia en las instituciones, el control de numerosas organizaciones de masas, llevan a las direcciones de estos PC a definir cada vez más sus posiciones políticas en función de sus intereses de burocracia nacional, no ya en función de la defensa de los intereses del Kremlin. Además, reaccionan cada vez más a los acontecimientos internacionales a partir de su situación política interior.

2. Los partidos eurocomunistas sitúan su política en un marco internacional que es el de la coexistencia pacífica y del status quo, en el que atribuyen a la Unión Soviética un papel importante. Sin embargo, a la vista de los profundos cambios acaecidos desde el final de la guerra, particularmente en el tercer mundo, la coexistencia ya no puede jugarse entre dos potencias, y el "campo progresista" ya no se limita a los países "socialistas", sino que incluye a los movimientos de liberación y a las direcciones nacionalistas pequeñoburguesas que han accedido al poder, así como a las fuerzas cristianas progresistas y socialistas del mundo capitalista.

La crisis del sistema de dominación estalinista en los países del Este (inicio de revolución política en Polonia, Hungría y posteriormente Checoslovaquia), las brutales respuestas de la buro-

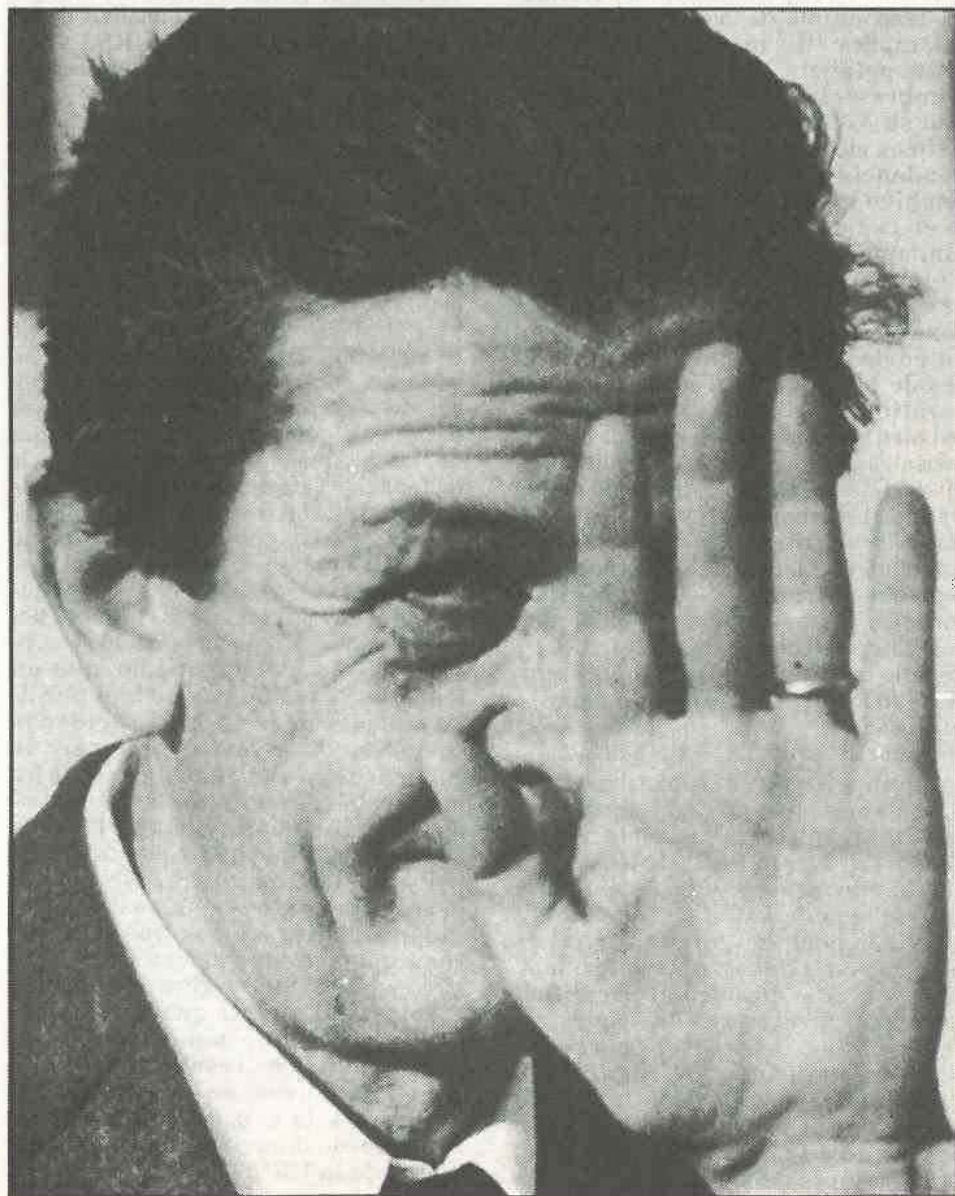
cracia del Kremlin han manchado profundamente, a los ojos de la clase obrera occidental, el «modelo soviético», en el preciso instante en que en sus luchas afirmaba unas aspiraciones democráticas y un potencial antiburocrático sin precedentes. Esto llevó a los PC «eurocomunistas» a criticar públicamente los aspectos más represivos de la dictadura burocrática en los países del Este, y a afirmar su defensa del pluralismo y de las libertades.

4. Desde el punto de vista de su estrategia, el eurocomunismo no es más que un refrito de los peores análisis revisionistas que preconizan el gradualismo y la colaboración de clases, mantenidos desde hace decenios por todos los PC y actualmente también por los PC que defienden a la burocracia del Kremlin. Lo que tiene de nuevo es la teorización de dichas revisiones (el abandono del leninismo, de la referencia a la

dictadura del proletariado, la defensa del Estado burgués como marco del paso gradual al socialismo, el rechazo del «modelo» soviético, la búsqueda de una «tercera vía» entre la soviética y la socialdemócrata).

Partiendo de este marco común, los dos principales partidos eurocomunistas, el PCI y el PCF, han desarrollado más o menos sus elaboraciones políticas y teóricas, y sus iniciativas, en función de su propia historia y de sus situaciones particulares. Esto es especialmente claro en lo que atañe a la política internacional.

El PCI, que inició este proceso en 1956 con las elaboraciones de Togliatti sobre el policentrismo, operó un «aggiornamento» sin dolor y empezó a poner en práctica una política internacional adecuada a su proyecto gubernamental de compromiso histórico, en torno a cuatro ejes:



Enrico Berlinguer: cruzada pacifista en los pasillos de la OTAN

- la lucha por el desarrollo de la distensión, que pasa por la superación de los bloques militares y del reparto del mundo que resultó de la guerra; en esta lucha se le asigna un papel fundamental a Europa, que debe presentarse como un polo autónomo en la arena internacional;
- las relaciones con el movimiento comunista internacional, que ya no deben pasar por las conferencias de

concepto atañe desde siempre al conjunto de la izquierda y de las fuerzas progresistas europeas». Y estos últimos años, el PCI ha desarrollado las relaciones y los debates con los grandes partidos socialistas europeos (PS francés, español y portugués, Partido Laborista británico, el partido socialdemócrata sueco y sobre todo el SPD alemán, que tanto admira, sin ocultarlo, Berlinguer).

Pero la dirección del PCF, con el retraso que lleva en el camino del eurocomunismo, y teniendo que avanzar a marchas forzadas, ha tratado de compensar con algunos golpes de efecto la ausencia de elaboración de una política internacional autónoma. El único documento que se refiere a la materia es el informe de Kanapa sobre el movimiento comunista internacional, que se centra en la cuestión del socialismo y las li-



los PC apadrinadas por Moscú, sino por las relaciones bilaterales con todas las componentes: la URSS, China, Vietnam y Yugoslavia (con la que China ha establecido relaciones a través de Tito. El PC chino envió una delegación de la FGCI a una visita oficial a China);

- las relaciones con los países del tercer mundo y los movimientos de liberación con los que los dirigentes del PCI mantienen vínculos muy estrechos (Argelia, Angola, Eritrea, OLP, etc.);
- las relaciones con la izquierda y los movimientos progresistas europeos. Como les agrada recordar a los responsables del PCI, «el eurocomunismo no es una alianza entre los partidos comunistas. Este

Estas concepciones han llevado al PCI en repetidas ocasiones a adoptar posiciones contrarias a la política soviética, pues ésta le parecía ir en contra de la distensión: exigencia de la retirada de las tropas soviéticas de Etiopía, condena de la invasión de Camboya por Vietnam, exigencia de que se suprima la fabricación e instalación de los misiles soviéticos, y ahora Afganistán.

Frente a esta política internacional en todas las direcciones, de los comunistas italianos, el PCF no ha realizado más que algunos balbuceos. Una primera razón, puede que trivial, pero no por ello menos cierta, es el profundo chovinismo de la dirección comunista francesa, que le lleva a considerar como sospechoso, de entrada, todo lo que sucede más allá de las fronteras de Francia.

bertades, y de las relaciones independientes entre los distintos partidos comunistas. Algún que otro viaje de Georges Marchais a México o Cuba no añade nada nuevo, al menos por el momento.

Hasta ahora —con la única excepción de Checoslovaquia—, la dirección del PCF jamás ha adoptado una postura distinta a la de la URSS sobre los problemas internacionales. Desde este punto de vista, su posición en torno a Afganistán no tiene nada de sorprendente.

Marchais: de París a Kabul, todo lo que divide es bueno

Así, la pregunta que hay que plantear es más bien esta: ¿Por qué ha querido armar tanto alboroto la dirección del

PCF con su apoyo al Kremlin, enviando a Moscú a Marchais, que desde hacía cinco años se negaba a poner pie en la URSS?

La respuesta hay que buscarla en la situación política francesa. Desde el otoño de 1977, el PCF ha tomado la opción explícita de rechazar toda la participación en el gobierno en el actual contexto de crisis. Ha desarrollado una política virulenta de polemica y división en dirección al Partido Socialista, con los objetivos: tratar de romper al PS y recuperar su hegemonía como único partido de la clase obrera. Así, ha abandonado, de momento, la Unión de la Izquierda, sin tener ninguna propuesta alternativa que no sean sus discursos sobre la unión nacional y sus llamamientos a la unidad por la base.

Por tanto, el apoyo patente del PCF al Kremlin a propósito de Afganistán tiene por objeto poner de relieve, a los ojos de los trabajadores, la alineación del PS con las posiciones del imperialismo; alentar la polémica y justificar la imposibilidad de establecer la unidad con ese partido. Pero cumple aún otra función, de cara a la base y a los simpatizantes del partido, que aún no se han recuperado del todo del trauma de la ruptura de la Unión de la Izquierda en septiembre de 1977. Acunados durante años con himnos a la unidad, los militantes comunistas se encuentran sumidos en un sectarismo a ultranza y privados de toda perspectiva, cosa que no es precisamente ideal de cara a reanimar el partido y darle una bandera para las elecciones presidenciales de 1981.

Así, la «opción internacionalista» y la «alineación en el campo de la revolución», afirmadas ahora por Marchais, deben ofrecer una perspectiva de cambio a los militantes comunistas. Como dice Jean Rony, miembro de la posición: «Cuan to menos abre una perspectiva en Francia, tanto más se aferra el PCF a su tradición, a su lentitud, mejor dicho, a los aspectos más cuestionables de su identidad».

La posición de la dirección del PCF no parece de contradicciones, ni mucho

menos. Así, según Marchais ha sonado la hora de la revolución en todo el planeta... salvo en Francia, debería añadir, pues apoya ostensiblemente al gobierno Barre (aborto, escándalo de los diamantes, asunto Baulin...).

Asimismo, la imagen de que quiere dotarse no puede ganar mucho de la referencia a la URSS, que ha perdido bastante poder de atracción entre los trabajadores. Pero lo más importante es que su política tiene poco futuro en una situación en que muchos trabajadores ven en la unidad con el PS una alternativa posible al gobierno.

Finalmente, la dirección del PCF no puede librarse de las presiones que le llevaron a emprender la vía del eurocomunismo. Por cierto se observa que pese a su lenguaje caricaturesco de «clase contra clase», el PCF no ha revisado ninguna de las teorizaciones de la fase anterior. Asimismo, pese al visto bueno dado a la burocracia soviética en el comunicado conjunto PCUS-PCF del 10 de enero pasado, la dirección del PCF ha condenado severamente la deportación de Sajarov, dos días después.

En suma: la actitud del PCF en estos momentos constituye tanto una opción obligada y un callejón sin salida, que no hará otra cosa, como ya se está viendo, que acentuar el malestar en su base.

Berlinguer: una cruzada pacifista en los pasillos de la OTAN

Las preocupaciones del Partido Comunista Italiano son muy distintas; son de carácter general e inmediato. El partido de Berlinguer tiene una estrategia, el compromiso histórico, esa colaboración de clases institucionalizada, que necesita, en opinión de sus defensores, del marco de la coexistencia pacífica, de la colaboración de clases a nivel internacional. Si por culpa de cualquiera de los bloques peligra esta coexistencia pacífica y se perfila un retorno a la guerra fría, se desvanecerá toda perspectiva de realización del compromiso histórico, pues no cabe ninguna duda que también la Democracia Cristiana elegirá su bando.

En lo inmediato, el PCI, que desde hace un año vuelve a estar en la «oposición», no ha renunciado a su participación en un gobierno de unión nacional. Sin embargo, la DC acaba de proponer, para salir del callejón sin salida en que se ha metido, la apertura de negociaciones programáticas, precisando que la composición del gobierno no es negociable y que no puede aceptar ministros comunistas, debido a los vínculos internacionales del PCI.

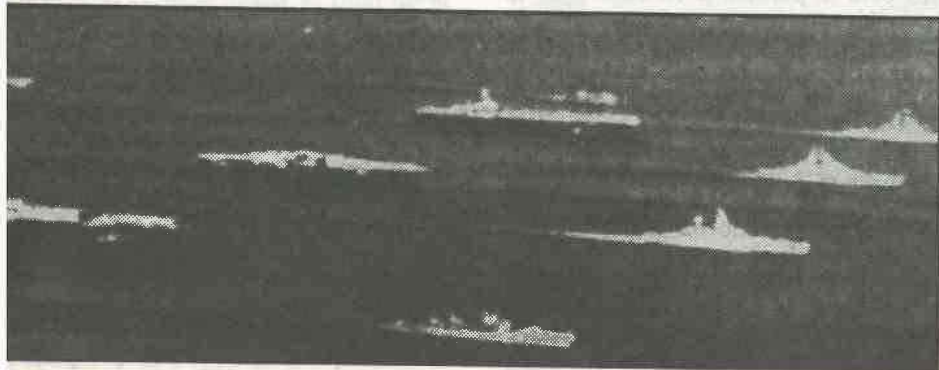
Y para desmontar este argumento, el PCI ha optado, también, por dar tanta publicidad a su posición sobre Afganistán, enviando a Berlinguer en persona a defender su moción en Estrasburgo. Espera también que los EE.UU. retiren su veto a su entrada en el gobierno. De ahí que la dirección del PCI no se haya dejado amedrentar por las críticas de sus militantes y haya afirmado que la responsabilidad fundamental recae sobre la URSS; es por esto que pone más que sordina a sus críticas al imperialismo es por esto que reafirma que está a favor de que Italia permanezca en la OTAN.

La posición defendida por el PCI concede un crédito total a los gobiernos imperialistas, y pone en sus manos, en las de sus instituciones políticas y militares, la tarea de salvaguardar la paz. Ya se sabía que Berlinguer se proponía construir el socialismo al amparo del paraguas militar del imperialismo, y héte aquí que ahora lanza una cruzada pacifista en los pasillos de la OTAN.

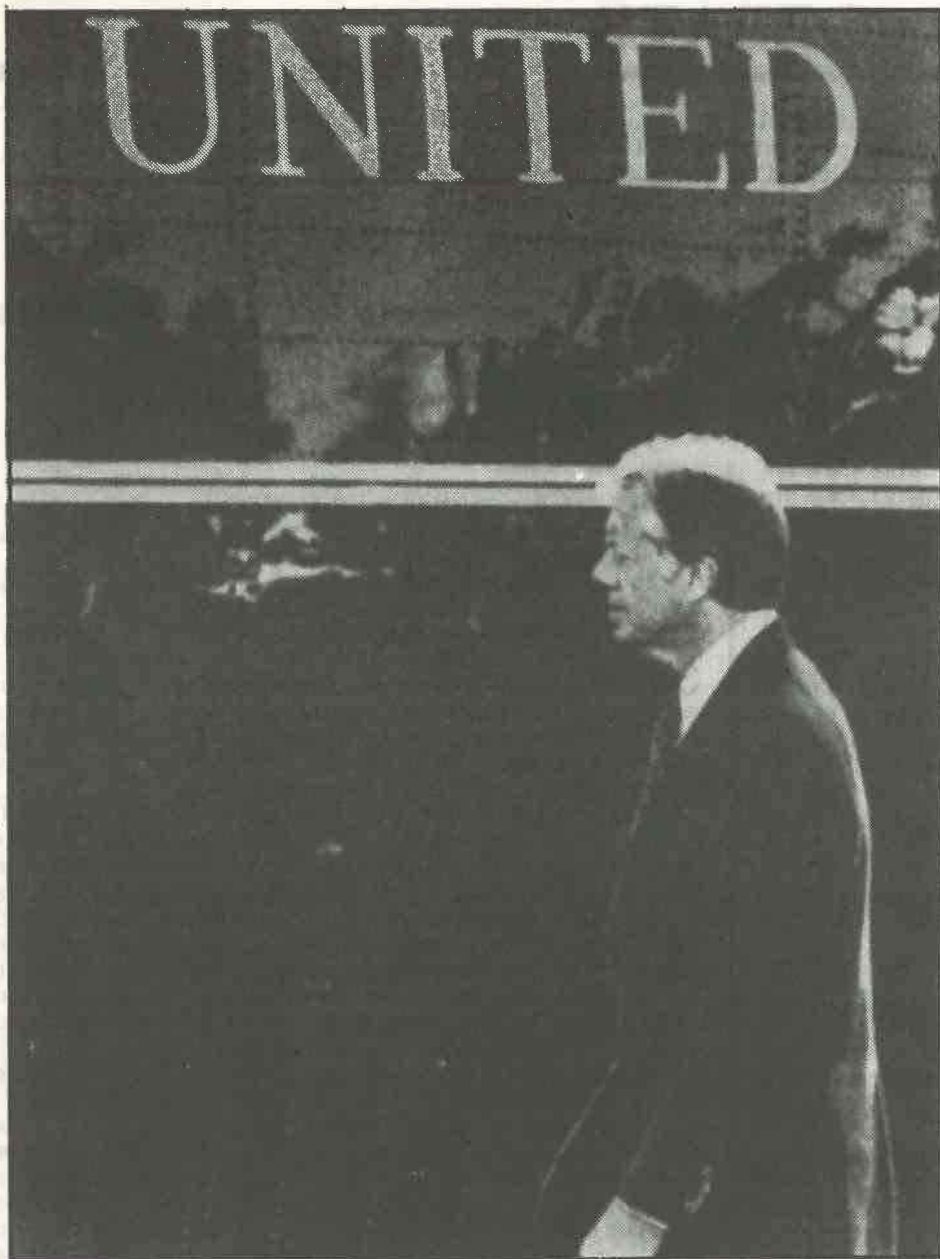
A partir de las inquietudes suscitadas por la intervención soviética en Afganistán, el PCI se ha apresurado a precisar sus análisis de la situación internacional y de lo que sucede en la URSS. Ha propuesto también la celebración de una gran conferencia de la izquierda en Europa.

La dirección del PCI estima que estamos asistiendo a un cambio de postura de la URSS, que «da la espalda a la distensión» y tiende a volver a «una política de fuerza y de división en zonas de influencia».

«Quiero subrayar», explicaba Berlinguer con motivo del 59º aniversario del PCI, «que la crisis de la distensión no empieza con Afganistán y no afecta únicamente a esta parte del mundo. Afecta en primer lugar al sudeste asiático, con los acontecimientos bélicos que protagonizaron, a comienzos de 1979, Vietnam, Camboya y China. Afecta a los enfrentamientos entre la URSS y China...» (L'Unité, 21.1.1980). Ya se ve de dónde viene la iniciativa. La responsabilidad de los EE.UU. estriba en el traslado separado entre Egipto e Israel y en la no ratificación de los acuerdos SALT II.



La flota USA en "estado de alerta"



Para Berlinguer, la balanza se inclina a favor de Carter

La razón de fondo de esta situación está, según los dirigentes del PCI, en la crisis de la «bipolaridad» resultante de la guerra. «Dividir simplemente el mundo en dos 'campos', en cuyo interior todos deben comportarse disciplinadamente, no es una respuesta, y menos una respuesta revolucionaria, pues se trata de un esquema que no corresponde a la realidad del mundo de hoy», escribe G. Boffa. «Como esquema, este ya era inadecuado cuando nació, en el lejano año 1947, aunque la guerra fría pudiera muy bien explicar su origen».

El desarrollo impetuoso de las luchas antiimperialistas ha abierto la crisis de dicho esquema. De ahí que «si hubiéramos justificado lo sucedido en Af-

ganistán, no sólo no habríamos apoyado una lucha por la emancipación, sino que habríamos discrepado profundamente en torno al contenido esencial del proceso revolucionario de nuestra época». (L'Unité, 27;1;1980).

Lo que no dice Boffa —y esto es lo que confiere el carácter totalmente contradictorio a la posición del PCI—, es que no son los «dos bloques» los que han sido puestos en tela de juicio por las luchas revolucionarias y de emancipación del tercer mundo, sino el statu quo, la coexistencia pacífica misma, basada en la negociación de las luchas revolucionarias y del enfrentamiento entre las clases que se produce a nivel inter-

nacional.

Los dirigentes del PCI estiman, por otro lado, que la invasión de Afganistán, al igual que la deportación de Sajarov, demuestran la misma incapacidad de los dirigentes de la URSS para hacer frente a los nuevos problemas de la época.

«En el fondo, durante toda la postguerra se ha manifestado una falta de preparación política y cultural de los grupos dirigentes soviéticos para hacer frente a los nuevos procesos revolucionarios en el mundo», explica G. Boffa, el soviólogo del PCI. En su opinión existe una relación evidente entre Afganistán y el asunto Sajarov: «Esto traduce las dificultades con que se ha topado la URSS, en tanto que potencia hegemónica de su bloque, en su intento de adaptarse a los nuevos acontecimientos que producía el proceso de distensión en su interior (...). La nueva fase política exigía, en efecto, una gran articulación de la vida interna de cada país: una dialéctica política más amplia, una mayor circulación de las ideas, un reconocimiento efectivo de los derechos políticos de los ciudadanos. Esto no se ha dado (...). Esta debilidad de la URSS es una de las razones de fondo que hacen que actualmente prevalezca una tendencia a considerar las relaciones internacionales en términos de guerra». (Rinascità, 1.2.1980).

Oficialmente no se va más lejos, pero muchos dirigentes y cuadros del PCI empiezan a ir más allá en su análisis de la URSS (a finales de enero, por ejemplo, el Instituto Gramsci organizó un coloquio con Rudolf Bahro, del que algunos cuadros del PCI afirman que comparten sus análisis sobre las sociedades de los países del Este).

En la base del PCF, del PCI y del PCE han surgido numerosas críticas. En el PCE se ha manifestado una fuerte oposición por parte de militantes que estiman que frente al imperialismo hay que defender a la URSS. Ante estas críticas, la dirección ha rectificado un poco su orientación, lanzando su campaña contra el imperialismo.

En el PCI, numerosos militantes han criticado la postura demasiado proimperialista de su dirección, explicando que por muy difícil que fuera, había que estar en el campo de los países socialistas. La dirección del PCI, por su parte, ha combatido frontalmente esta postura.

Tenemos ahí otro producto de la crisis del estalinismo y de su vástago eurocomunista, en esa pseudoalternativa entre la posición del PCF y la del PCI, entre el apoyo a la burocracia soviética y el apoyo a las posiciones del imperialismo.

DEBATE

Publicamos a continuación dos proyectos de resolución sobre Afganistán presentados en la reunión del Secretariado Unificado de la IVa Internacional. Esta reunión tuvo lugar entre los días 26 y 29 de enero de 1980. Y defendidos por diversos miembros del SU, quedaron en minoría. La resolución mayoritaria se publicó en Inprecor nº 13.

Tesis sobre Afganistán

1 El derrocamiento del régimen de Daúd, en abril de 1978, fue el inicio de la revolución social en Afganistán.

La guerra civil estalló cuando los capitalistas reaccionarios, los terratenientes y sectores del clero organizaron la resistencia frente a la revolución, particularmente, contra las primeras medidas de la reforma agraria. Estas fuerzas se opusieron a los obreros y campesinos, cuyos intereses estaban en el desarrollo y la profundización del proceso revolucionario. Desde el comienzo, la contrarrevolución fue apoyada por la dictadura militar capitalista de Pakistán y por el imperialismo, particularmente, el imperialismo norteamericano. El apoyo imperialista se acentuó tras el derrocamiento del sha por las masas iraníes.

La posible victoria de la contrarrevolución proimperialista en Afganistán constituye una amenaza para el estado obrero de la URSS. Desde el comienzo, Moscú suministró ayuda militar al nuevo régimen afgano, y en diciembre de 1979 envió tropas soviéticas en masa para apoyar al ejército afgano contra las clases explotadoras y sus soportes imperialistas.

En esta guerra civil, la victoria del gobierno del PDPA (Partido Democrático Popular de Afganistán), apoyado por las tropas soviéticas, sobre las fuerzas contrarrevolucionarias, sería un golpe para el imperialismo y la reacción afgana y correspondería a los intereses de las masas trabajadoras en Afganistán y en todo el mundo.

2 Como telón de fondo de los combates actuales en Afganistán, están las decenas de años de opresión y explotación imperialista, primero por Gran Bretaña, después, tras la 2a guerra mundial, principalmente por los Estados Unidos. Reducido a una situación semicolonial, Afganistán ha sufrido, de forma particularmente aguda, las terribles condiciones impuestas a todas las naciones oprimidas.

La revolución de abril de 1978 hizo frente a la siguiente situación: sólo el 15 % de las tierras de cultivo potencial estaban irrigadas; el 90% de los hombres y el 95% de las mujeres eran analfabetos; más del 40% de la población rural, que representa el 70% de la población total del país, no poseía tierras, y el 40% de los pequeños propietarios apenas lograban sobrevivir. El país cuenta con pocos fondos de reserva contra las catástrofes naturales -medio millón de personas murieron en la sequía de 1969-72. En un país de 18 millones de habitantes, sólo hay 4 ciudades con más de 100.000 habitantes, incluida Kabul, con sus 750.000 habitantes. La industria está poco desarrollada; el nivel de desempleo es superior al 20%, y un millón de trabajadores se ven obligados a abandonar Afganistán para buscar trabajo en los países vecinos; el 14% de la población aún es nómada. Un niño de cada dos muere antes de los 5 años de edad, y la esperanza de vida media es inferior a 40 años.

La condición de las mujeres es particularmente bárbara. De 8 niños escolarizados solo uno es del sexo femenino. Entre las

mujeres que han asistido a la escuela sólo trabajan el 5%. Subsisten tradiciones reaccionarias, como el "precio de la prometida" y la obligación de llevar el velo.

La cuestión nacional, en sus aspectos más importantes, sigue sin estar resuelta, con la dominación tradicional de los pashtunes sobre los baluchis, los usbecos, los turcomanos etc.

3 La clase capitalista y los terratenientes en Afganistán resultaron totalmente incapaces de responder a las necesidades más acuciantes del país. Los intentos de reforma del rey Amunila a comienzos de los años 20, fueron primero detenidos y después eliminados, tras su derrocamiento en 1928.

El gobierno Daúd, instalado en el poder en julio de 1973, cuando fue derrocada la monarquía, resultó asimismo incapaz de resolver los problemas del país. Tras prometer reformas que jamás fueron llevadas a la práctica, Daúd permitió que la familia real, de la que él mismo es miembro, continuara dominando el país. El rey y su familia seguían obteniendo una renta; el ejército seguía dirigido por los oficiales del antiguo régimen; no se llevó a cabo ninguna reforma agraria. Los partidos políticos estaban prohibidos, y los organizaciones obreras, particularmente el PDA, fueron objeto de una feroz represión.

El régimen Daúd no era más que corrupción e ineficacia; se estima que sólo la mitad de los fondos destinados al "plan" económico después de 1975 se emplearon efectivamente para objetivos útiles. Afganistán se veía cada vez más debilitado por el aumento de la deuda exterior. Frente a la agravación de la crisis social, Daúd se orientó hacia la instauración de estrechos lazos con el sha de Irán y el imperialismo norteamericano, y con el régimen reaccionario de Sia en Pakistán. Los consejeros de la Savak ayudaron a construir la policía política de Daúd.

A comienzos de 1978, Afganistán se encontró en una situación tan grave, que el régimen de Daúd no tenía ninguna perspectiva para proponer y se orientaba hacia una dependencia cada vez más directa con respecto al imperialismo, principal sostén de la reacción en este país.

4 El asesinato de Amir Akbar Jiber, uno de los principales dirigentes del PDA, el 17 de abril de 1978, provocó una reacción inmediata y violenta; una muchedumbre de 15.000 personas asistió a sus funerales, en señal de protesta. Los días siguientes se produjeron nuevas manifestaciones. Daúd respondió deteniendo a varios dirigentes del PDA y tratando de decapitar a la oposición.

Frente a las medidas represivas adoptadas por el régimen de Daúd, y apoyándose en la movilización antigubernamental, el PDA logró utilizar una parte del ejército para derrocar a Daúd e instaurar un nuevo régimen. El nuevo régimen realizó purgas en la alta jerarquía militar y en el aparato de Estado, anunció un programa de reformas en 30 puntos, a favor de los obreros y

campesinos, empezó a tomar medidas para aplicarlas. Entre las medidas sociales, la más importante era la reforma agraria, que empezó a realizarse el 1° de enero de 1979. Se fijó un techo para la propiedad de la tierra y todas las propiedades que sobrepasaran este techo eran confiscadas y distribuidas gratuitamente a los campesinos sin tierras y a los nómadas. Según el gobierno, la primera parte de este programa se llevó a término en junio de 1979, cuando se distribuyeron tierras a unas 250.000 familias. Además, todas las deudas contraídas por los campesinos ante los terratenientes, quedaron abolidas.

Entre las demás medidas progresistas tomadas por el gobierno del PDPA estaba la construcción de nuevas escuelas y centros sanitarios, una campaña de masas por la alfabetización, que englobó a centenares de miles de personas, y por primera vez en la historia afgana, la legalización de los sindicatos.

El nuevo régimen empezó también a agarrar dos de los problemas más acuciantes de las masas afganas; la opresión de las mujeres y el derecho de las minorías nacionales oprimidas en Afganistán. Se tomaron medidas particulares para mejorar la condición de las mujeres, como la enseñanza obligatoria para las niñas, cursos especiales para las mujeres casadas, la prohibición del matrimonio de niños y la reducción del "precio de la prometida". También se tomaron medidas contra la opresión de las minorías nacionales, tales como la publicación de periódicos, la difusión de programas de radio y la enseñanza en usbeco, baluchi y en Nuristán.

Estas medidas progresistas y otras, como la liberación de 8.000 presos políticos, le aportaron un apoyo popular al nuevo régimen. Incluso en la prensa imperialista se encuentran referencias a este fenómeno. Por ejemplo el **Wall Street Journal** del 16 de enero de 1979, señaló que cuando el gobierno del PDA cambió la bandera del país, "más de 150.000 personas en Kabul... se manifestaron para saludar la bandera, el primer día en que fue izada. En otras ciudades tuvieron lugar manifestaciones de apoyo. Estas manifestaciones estaban organizadas, pero según los testigos los participantes estaban realmente llenos de

entusiasmo".

Las primeras medidas de cara a la organización de las masas, impulsadas por el PDA, fueron la creación de organizaciones de mujeres y jóvenes, sindicatos y comités de defensa armados, a nivel local, para responder a los ataques contrarrevolucionarios.

Contrariamente a las mentiras de la prensa burguesa, que cuenta que lo que se produjo en Afganistán no era otra cosa que "un golpe de Estado teledirigido por la URSS", que impuso reformas contra la voluntad de la población, los hechos prueban que en Afganistán empezó, después de abril de 1978, una auténtica revolución social en interés de los obreros y campesinos.

5 Los que se habían aprovechado de la opresión y de la explotación en Afganistán -los capitalistas, los terratenientes, los usureros, los productores y traficantes de opio, los contrabandistas, los antiguos oficiales del ejército, los monárquicos y sectores de la jerarquía religiosa -respondieron a estas medidas progresistas y populares iniciando una guerra de guerrillas contra el gobierno del PDA. Este levantamiento se inició realmente a comienzos de 1979, tras las primeras medidas de reforma agraria.

Esta rebelión reaccionaria se centra en las regiones en que el opio constituye el cultivo principal, sobre todo en las proximidades de la frontera con Pakistán. Los propietarios de las plantaciones de opio y los contrabandistas, amenazados por la reforma agraria y las medidas tomadas contra el comercio del opio, utilizaron los ingresos obtenidos con este sucio comercio para financiar las operaciones militares contrarrevolucionarias.

Las fuerzas reaccionarias de la guerrilla pretenden desarrollar una "guerra santa islámica" contra el "comunismo ateo", tratando así de recuperar el levantamiento antiimperialista de los pueblos islámicos. Los medios de comunicación capitalistas, en todo el mundo, se hicieron eco de esta interpretación. Este hecho se explica por la alianza de los reaccionarios con el imperialismo, y se observa en sus denuncias de las luchas antiimperialistas de Irán. Además, casi todos los afganos son musulmanes, incluidos los partidarios del gobierno. Este no ha tomado ninguna medida restrictiva contra la libertad religiosa, y numerosos **molos** conocidos apoyan al régimen. La caracterización de la guerra civil, como una guerra de "musulmanes" contra "ateos", no es más que una cobertura demagógica de una guerra de clases de los explotadores contra los explotados y oprimidos.

Desde el comienzo, el imperialismo norteamericano se mostró hostil al gobierno del PDA y a sus medidas radicales, particularmente después de que la revolución iraní hubiera derribado a su fiel aliado de Teherán. Teme las repercusiones de la revolución afgana entre los pueblos oprimidos de la región, que amenazarían a los intereses imperialistas. La administración Carter tomó inmediatamente medidas para tratar de ahogar y hacer retroceder a la revolución afgana.

La prensa capitalista lanzó una campaña de propaganda en torno a la amenaza que constituía la revolución.

El mando atlántico de la OTAN celebró una reunión especial en junio de 1978, en Anapolis (Maryland, EE.UU.) para tratar las medidas a adoptar.

Los representantes norteamericanos congelaron toda nueva ayuda económica en febrero de 1979 y trataron de bloquear los precios concedidos a Afganistán por las instituciones financieras internacionales.

Junto con la dictadura en el poder en Pakistán, Washington apoyó y ayudó a las fuerzas contrarrevolucionarias que podrán ser utilizadas contra el gobierno de Kabul. El gobierno norteamericano utilizó instituciones estrechamente vinculadas a la CIA, como la Fundación Asiática y la Agencia Americana de Represión del Tráfico de Drogas, que guarda relaciones estrechas con los productores y traficantes de opio. Uno de los principales dirigentes de la contrarrevolución afgana, Sia



Nassery, es ciudadano de los Estados Unidos y tuvo conversaciones con los representantes del Departamento de Estado norteamericano en marzo de 1979, antes de dejar los Estados Unidos para unirse a la contrarrevolución en Afganistán.

6 La posición geográfica de Afganistán, en Asia Central, sus fronteras con Irán, Pakistán y lo que actualmente es la URSS, sus minorías nacionales imbricadas entre estos distintos países, lo han convertido desde hace tiempo en un centro de la lucha internacional. El imperialismo británico trató de controlar Afganistán para proteger las fronteras del imperio indio y presionar sobre Rusia. Por esta razón se lanzó en tres ocasiones a la guerra contra Afganistán. Trás la revolución rusa, esta política constituida uno de los aspectos del esfuerzo del imperialismo por oponerse y contener y rodear a la Unión soviética.

Trás la segunda guerra mundial, los Estados Unidos trataron sin éxito de integrar a Afganistán en el Pacto de Bagdad, mediante una combinación de amenazas y "ayudas". Entre las amenazas estaba el apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno pakistaní contra la minoría pashtún de Pakistan y el bloqueo económico parcial en 1960-63, con el cierre de la frontera pakistaní; este bloqueo sólo se rompió gracias a un puente aéreo soviético e indio.

Las medidas adoptadas por Washington con respecto al régimen de Daúd y actualmente su intervención en apoyo de las fuerzas reaccionarias en Afganistán no sólo reflejan la voluntad del imperialismo de aplastar a los obreros y campesinos objetivo de establecer un régimen proimperialista, manejable, que aceptara también la instalación de bases militares dirigidas contra la URSS y la revolución colonial en toda la región.

7 Con el ascenso del estalinismo en la Unión Soviética, que representaba los intereses de la casta burocrática privilegiada, las relaciones entre la Unión Soviética y Afganistán ya no vinieron determinadas en función del interés general de las masas trabajadoras en Afganistán y en el mundo entero, como era el caso durante los primeros años de la URSS bajo la dirección de Lenin y Trotsky, sino en el marco contrarrevolucionario del "socialismo en un solo país". La burocracia soviética quería instalar en Afganistán un régimen capitalista "neutral", que no se convirtiera en una base militar del imperialismo, dirigida contra la URSS. Con este fin, a partir de los años 50, el Kremlin firmó importantes acuerdos comerciales militares con Afganistán, pero no protestó seriamente contra la política reaccionaria de los diferentes regímenes afganos ni contra las condiciones sociales impuestas a las masas. Moscú empujó al PDA a aceptar compromisos con las fuerzas burguesas nacionales "tan ávidas de paz".

Estas relaciones se vieron enturbiadas, por un lado, cuando Washington logró que Daúd tomara sus distancias con respecto a Moscú, a mediados de los años 70, y estableció relaciones más estrechas con el imperialismo y sus clientes en la región. Después, por otro lado, con el cambio de 1978, que no estaba requerido ni previsto por Moscú y con el esfuerzo de las luchas desarrolladas por la contrarrevolución apoyada por el imperialismo, lo que perturbaba el juego de la "coexistencia pacífica". Ante esta nueva situación, el gobierno soviético respondió a las peticiones de ayuda que hacía el gobierno del PDA, firmando una docena de acuerdos económicos y enviando consejos y equipos militares. La ayuda militar aumentó con la extensión y el refuerzo de la contrarrevolución.

La lucha por llevar a cabo una verdadera reforma agraria, y tras medidas, como la organización de una respuesta a la ofensiva militar contrarrevolucionaria apoyada por el imperialismo, constituía un formidable desafío incluso para una dirección revolucionaria. Pero el PDA es un partido estali-

nista, que tiene un programa de colaboración de clases.

Debido a sus vacilaciones y sus métodos burocráticos, el PDA minó el amplio apoyo popular que se había ganado con las primeras medidas que había adoptado. Temiendo que las masas tomaran la iniciativa y escaparan a su control, el PDA no fue capaz de canalizar a los obreros y campesinos en una dinámica revolucionaria dentro de los límites de lo posible y de lo necesario. Desgarrado por salvajes batallas fraccionales y por las purgas y la represión, y sin haber ganado una base social en las amplias masas, lo que le habría permitido llevar a la práctica sus medidas progresistas, particularmente en el campo, el PDA se vio incapacitado para llevar una lucha eficaz frente a la contrarrevolución. Fue un factor de refuerzo de la contrarrevolución apoyada por el imperialismo.

En este contexto, y tras varios meses de vacilación, Moscú decidió enviar a decenas de millares de soldados soviéticos a Afganistán. El Kremlin piensa que existía la amenaza de una victoria de la contrarrevolución, que pondría en peligro al Estado obrero en la Unión Soviética, y por tanto los intereses de la casta burocrática soviética misma, que dependen de la existencia y del mantenimiento de la economía nacionalizada y planificada en la URSS.

Algunos periodistas burgueses han avanzado la hipótesis de que el Kremlin había enviado a sus tropas a Afganistán porque temía que la guerra civil en este país se convirtiera en un factor de descontento para los musulmanes y las nacionalidades oprimidas en la Unión Soviética, que viven cerca de la frontera afgana. El nivel de vida y las conquistas sociales, cualitativamente superiores en la Asia Central soviética, son argumentos contra esta hipótesis. La idea de que los asiáticos de la Unión Soviética puedan verse atraídos por los llamamientos de la reacción afgana "en nombre del Islam", viene refutada también por la confianza que ha demostrado Moscú enviando a Afganistán a una mayoría de tropas procedentes de estas nacionalidades.

La consecuencia inmediata de la entrada de las tropas de combate soviéticas fue un esfuerzo significativo de la lucha frente a la contrarrevolución. Sin embargo, esto no significa que la burocracia soviética haya abandonado su orientación de colaboración de clases, en su política exterior. Al contrario, la casta burocrática enfoca todos los problemas desde el punto de vista de la defensa de sus propios intereses privilegiados y parasitarios.

Pero esta política de colaboración de clases no significa simplemente un apoyo directo a Washington y a las fuerzas contrarrevolucionarias. Para asegurar su posición frente al imperialismo, la burocracia soviética busca puntos de apoyo entre los obreros y los campesinos. Esto no sólo implica su apoyo sin principios al programa de direcciones burguesas y pequeño burguesas, sino también, en determinadas circunstancias, cuando se trata de una cuestión vital, una ayuda económica y militar a otros Estados obreros, a movimientos antiimperialistas y a gobiernos en guerra contra el imperialismo.

Los revolucionarios no rechazan estas ayudas, rechazan la política contrarrevolucionaria del Kremlin.

Cuando coinciden parcial y temporalmente los intereses de la burocracia y los de los trabajadores, como sucede en el caso de la defensa de la Unión Soviética frente a las amenazas contrarrevolucionarias, el Kremlin plantea y resuelve el problema de la misma manera con lo que lo hace con otros problemas, de forma absolutamente independiente de los intereses e incluso de las ideas y sentimientos del proletariado internacional.

Esto se vio en Afganistán, en la forma burocrática en que fue depuesto y después asesinado Hafisula Amin, y sustituido en la presidencia por Babrak Karmal; también se vio en el hecho de que la URSS no movilizó a la clase obrera internacional contra el peligro de contrarrevolución en Afganistán. Estos métodos permanecen dentro del marco establecido por el imperialismo y siembran la confusión en torno al verdadero papel y los objetivos reales de la Unión Soviética.

Pero no es la utilización de la potencia militar soviética contra las fuerzas reaccionarias la que constituye un obstáculo para el desarrollo de la revolución en Afganistán. Cualesquiera que sean las intenciones del Kremlin, esta participación es prógresista -pero la política de Moscú es globalmente una política contrarrevolucionaria y de colaboración de clases en Afganistán y en el mundo entero.

El aplastamiento definitivo de la contrarrevolución exige la aplicación de medidas progresistas a nivel social y económico; esto ha empezado ya y debe llegar hasta la expropiación de los capitalistas y la instauración de un Estado obrero.

Para responder a los intereses de los obreros y campesinos, los medios más eficaces son la movilización y la organización independientes de las masas. Moscú y el PDA tratarán de controlar las iniciativas independientes de las masas y limitar su participación.

Pero cualesquiera que sean las orientaciones políticas burocráticas del PDA y de la burocracia soviética, los obreros y los campesinos afganos no podrán avanzar si no aplastan a la contrarrevolución. Las victorias sobre las fuerzas reaccionarias

pueden animar a las masas a luchar por sus propios intereses.

8 Algunas organizaciones obreras, presionadas por el imperialismo, han condenado la utilización de las tropas soviéticas en Afganistán. Esta es la posición de los partidos comunistas de Italia, España, México, Gran Bretaña y Australia, entre otros, y de los partidos socialdemócratas.

La burocracia de Pekín, seguida por los grupos maoístas en el mundo entero, no sólo ha condenado esta intervención, sino que se ha alineado además en la campaña imperialista y ha prometido aumentar su ayuda a la dictadura en el poder en Pakistán.

Todas estas fuerzas se han alineado en el campo de la reacción, cuando en Afganistán se desarrolla una guerra civil contra los intereses más elementales de los obreros y campesinos afganos, y contra el Estado obrero soviético. Para estos PC y partidos socialdemócratas, sus relaciones de colaboración de clases con el imperialismo son más importantes que la victoria de la contrarrevolución en Afganistán, que condenaría a las masas afganas a una feroz represión y a la miseria.

Acusar a las tropas soviéticas de haber violado el principio de la «autodeterminación» de Afganistán, es profundamente hipócrita. Son los imperialistas, y no la Unión Soviética, los que han oprimido a Afganistán durante decenas de años y los que han mantenido en una situación de atraso y subdesarrollo. La victoria de las fuerzas contrarrevolucionarias no permitiría la «autodeterminación» de Afganistán, sino su dominación aún más directa por el imperialismo. Además, esta posición equivale a rechazar el reconocimiento del actual gobierno del PDPA como gobierno legítimo de Afganistán, sólo porque este gobierno no está a favor de la ayuda de las tropas soviéticas.

Otro argumento es que la intervención soviética va a poner a las masas afganas en manos de la reacción. Esto supondría que



los nacionalistas afganos preferirían una toma del poder reaccionaria a la chilena o a la indonesia, que no la presencia soviética. Esto supondría además que los campesinos apoyarían a los terratenientes, los obreros a sus patronos, capitalistas, y que los oprimidos se unirían a las fuerzas proimperialistas tan sólo porque las tropas soviéticas están en el país. Esto es absolutamente contradictorio con las leyes de la lucha de clases.

La verdadera cuestión para las masas en el mundo, es la lucha por hacer fracasar los intentos contrarrevolucionarios del imperialismo, por detener y hacer retroceder las conquistas de los obreros y de los campesinos, y no la de formar un régimen contrarrevolucionario y proimperialista. Entrando en el coro de la campaña de propaganda capitalista contra la Unión Soviética, estos PC, socialdemócratas y maoístas no sólo han clavado un puñal en la espalda de los obreros y de los campesinos, sino que una vez más han traicionado a los trabajadores de sus

propios países.

Si la Unión Soviética retirara sus tropas, ello envalentonaría a las fuerzas contrarrevolucionarias y les permitiría probablemente la victoria. Esto significaría que los elementos más reaccionarios y proimperialistas de la sociedad afgana tomarían el poder reprimiendo salvajemente a las masas, desmoralizadas, y harían retroceder sus luchas durante todo un periodo. El imperialismo se aseguraría una base en la región. Afganistán se convertiría en la punta de lanza de la contrarrevolución imperialista, dirigida contra la Unión Soviética, contra la revolución iraní (que sería la primera en sufrir la cólera de las fuerzas imperialistas reforzadas de nuevo) y contra las masas oprimidas de la región en general. Esto significaría un golpe muy severo contra la revolución mundial, esto envalentonaría al imperialismo y aumentaría el peligro de guerra.

Por otro lado, el papel de las tropas soviéticas era el de ayudar a la lucha de los afganos frente a la contrarrevolución. Una derrota de las fuerzas reaccionarias quitaría un obstáculo en la batalla que libran los obreros y los campesinos para profundizar en el proceso revolucionario, y sería un golpe importante contra la política imperialista en la región.

Esto tendría repercusiones en la lucha de las masas paquistaníes contra la dictadura en el poder. Esto ya se vio en las manifestaciones de los baluchis en Pakistán, a favor de la intervención soviética. Esto debilitaría las fuerzas reaccionarias en Irán, privándoles del sólido apoyo de este bastión reaccionario y proimperialista, y por consiguiente reforzaría las luchas de los obreros y campesinos, que combaten por desarrollar el proceso revolucionario en este país. Abriendo un nuevo campo de batalla contra el imperialismo, esto ayudaría a las luchas antiimperialistas del mundo entero, desde Indochina a Nicaragua.

Además, aún sería más difícil entonces, para el imperialismo, utilizar su enorme poderío militar contra las masas trabajadoras a nivel internacional o contra la Unión Soviética y los demás Estados obreros. Esto ayudaría al proletariado internacional a ganar tiempo —particularmente en los Estados Unidos— para desarmar a los imperialistas promovedores de guerras.

Una derrota de las fuerzas contrarrevolucionarias en Afganistán significaría un nuevo cambio en la relación de fuerzas a nivel internacional, en detrimento del imperialismo.

Por tanto, las tareas en relación a esta lucha revisten gran importancia. La condena de la utilización de las tropas soviéticas constituye una ayuda a la contrarrevolución y al imperialismo —ya sea conscientemente, por razones de colaboración de

clases, como es el caso de determinados PC o de los socialdemócratas, o inconscientemente, como es el caso de los maoístas.

9 El imperialismo norteamericano ha organizado una campaña de propaganda con el fin de desorientar a la clase obrera del mundo entero. Trata de ocultar la verdadera naturaleza de la guerra civil en Afganistán, y de incrementar la participación de Washington.

Estimula la oposición anticomunista a la intervención soviética y trata de unir las fuerzas en torno a la exigencia de la retirada de las tropas.

El objetivo es también el de crear un clima favorable para que los trabajadores de los Estados Unidos acepten un empleo de tropas imperialistas contra las luchas de los oprimidos en el mundo entero.

Washington y sus aliados han respondido de esta manera a la utilización de las tropas soviéticas en Afganistán, intensificando la ayuda militar a los reaccionarios afganos y a la dictadura militar de Pakistán.

Han aplicado medidas de chantaje contra la URSS y Afganistán, y han acelerado sus preparativos de guerra. Entre estas medidas están:

- la suspensión de los envíos de cereales y otros bienes a la URSS;
- el desvío de los suministros de alimentos realizados por las organizaciones caritativas internacionales, destinados a Afganistán, hacia las bases contrarrevolucionarias de Pakistán;
- la amenaza de boicoteo de los Juegos Olímpicos de Moscú, en 1980;
- los intentos de reinstaurar el servicio militar obligatorio en los EE.UU.;
- el incremento de los presupuestos militares de los imperialistas;
- las conversaciones para establecer nuevas bases militares en el Océano Índico y en el Golfo Pérsico.

La tarea fundamental de la IV Internacional debe consistir en luchar contra la ofensiva reaccionaria, lanzando una campaña en el seno de la clase obrera para dar a conocer la verdad en torno a la guerra en Afganistán, y el papel contrarrevolucionario de Washington.

Debemos participar en los movimientos de protesta contra las medidas adoptadas por los imperialistas norteamericanos y sus aliados contra la revolución afgana y la URSS.

Debemos convencer a la clase obrera internacional que defender la revolución afgana responde a sus intereses vitales.

Resolución sobre la intervención soviética

La tarea primordial de los marxistas revolucionarios ante los acontecimientos que se desenvuelven en Afganistán es la de denunciar la hipocresía de la campaña de propaganda imperialista y reaccionaria, que es pretexto de la intervención de las tropas soviéticas en Kabul llama a la lucha contra el «comunismo ateo», el «imperialismo soviético» y otros espantajos que esgrime constantemente la burguesía mundial. En particular, los marxistas revolucionarios deben poner en guardia a los trabajadores de todos los países, especialmente a los de los países imperialistas, contra el objetivo real de esta campaña de propaganda, que no es otro que el de preparar las condiciones para nuevas agresiones imperialistas contra las luchas populares.

Dicho esto no deja de ser cierto que oponerse a la propaganda imperialista no puede sustituir, en sí, a una posición política. Si, en efecto, los marxistas revolucionarios defienden a la URSS incondicionalmente frente al imperialismo, no están en modo alguno obligados a defender cualquier acción emprendida por la burocracia soviética, por muy progresista o antiimperialista que sea en sus motivaciones declaradas. En el caso de Afganistán, el movimiento obrero se enfrenta a uno de los problemas más espinosos de la lucha de clases: el derecho de las naciones a la autodeterminación. Conviene recordar la posición de los bolcheviques a este respecto. Lenin libró numerosas batallas en torno a esta cuestión, y particularmente en 1919, cuando polemizó contra los que deseaban restringir el derecho de las

naciones a la autodeterminación en función de la naturaleza de sus direcciones, incluso concederlo tan sólo a las naciones dirigidas por los trabajadores.

«No podemos negarle a ningún pueblo del antiguo imperio ruso el derecho a la autodeterminación... ¿Qué podemos hacer entonces por los pueblos sometidos hasta ahora a la influencia de sus molas? ¿Podemos ir y decirles: vamos a derribar a vuestros explotadores? No podemos hacerlo, porque están completamente sometidos a sus molas. Hay que esperar, en estos casos, a que la nación interesada haya evolucionado, a que el proletariado se haya diferenciado de los elementos burgueses, cosa que es ineluctable... Los Scheidemann pretenden ya que nosotros queremos conquistar Alemania. Por supuesto, esto sólo son pamplinas. Pero la burguesía tiene sus intereses, su prensa, que divulga a bombo y platillo estos rumores por todo el mundo, a centenares de miles de ejemplares, y Wilson les apoya en su propio interés. Los bolcheviques tienen, dicen, un poderoso ejército y tratan de implantar mediante la conquista el bolchevismo en Alemania... Debemos actuar de manera que los socialtraidores alemanes no puedan decir que los bolcheviques imponen su sistema universal, que lo podrían introducir como dicen, a punta de bayoneta del Ejército Rojo en Berlín. Pero desde el punto de vista de la negación del principio de la autodeterminación de las naciones, esto es precisamente lo que puede suceder... El comunismo no se implanta mediante la violencia». (Lenin, Informe sobre el programa del partido, presentado en el VIII Congreso del Partido Bolchevique, 19 de marzo de 1919).

Sin embargo, la posición de los marxistas revolucionarios no ha erigido jamás el principio democrático del derecho de las naciones a la autodeterminación en principio absoluto. Este derecho sigue siendo tributario de los intereses de la lucha de clases del proletariado mundial. Puede ser ignorado legítimamente, aunque provisionalmente, en el caso de que el Estado obrero se vea forzado a actuar por razones de autodefensa. No obstante, e incluso en ese caso, hay que actuar con la máxima circunspección. La cuestión afgana debe examinarse a la luz de estas premisas.

No cabe duda que la intervención soviética en Afganistán se ha realizado violando groseramente el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. En efecto, es notorio que las mismas tropas soviéticas derribaron a Amin para sustituirlo por Karmal, a quien trajeron del exilio con ellas. También es notorio que entre los regímenes de Taraki, Amin y Karmal, apoyados todos ellos, en su momento, por el Kremlin, no existe ninguna diferencia cualitativa. La reciente liberación de los presos por el gobierno de Karmal no puede probar lo contrario; además, no ha podido ganarse la simpatía popular que le ha enajenado el hecho de haber sido impuesto desde el exterior. Por otro lado, el apoyo imperialista a los «mudayahidin» afganos, dirigidos por la reacción feudal-religiosa, no ha alcanzado jamás las proporciones comparables a las del apoyo soviético a Kabul, antes incluso de la intervención directa de las tropas del Kremlin. El apoyo imperialista a los rebeldes afganos no ha alcanzado jamás las dimensiones de la intervención exterior que hubiera justificado la de las tropas soviéticas, como pretenden los dirigentes del Kremlin.

De todos modos, si la situación era tan grave que el régimen de Kabul estaba realmente amenazado de ser derrocado por los «mudayahidin», el único medio correcto de impedir semejante salida habría sido el de incitar a este régimen a abandonar sus métodos de dictadura militar y a tratar de apoyarse en una movilización de masas en torno a sus propios intereses, impulsando su autoorganización en soviets. Como se sabe, esta política está en las antípodas de la burocracia estalinista, ávida de generalizar sus propios métodos. Afirmar que una conquista reaccionaria del poder en Kabul constituiría una grave amenaza

para la seguridad de la URSS es, por cierto, totalmente ridículo.

Condenar la intervención de las tropas soviéticas en Afganistán no resuelve, sin embargo, el problema de la actitud a adoptar al respecto. En efecto, es posible defender que ante este «hecho consumado», exigir la retirada de las tropas soviéticas ahora iría en interés de la reacción y del imperialismo. Nosotros pensamos, por nuestra parte, lo contrario.

Toda prolongación de la estancia de las tropas soviéticas en Afganistán sólo puede alimentar las siguientes tendencias:

- la tendencia de la rebelión afgana a incrementar su fuerza y su popularidad, aprovechándose del resentimiento nacional afgano contra la intervención soviética y del apoyo imperialista, que toma como pretexto esa misma intervención. El Kremlin está a punto de embarrarse en una guerra que jamás podrá terminar, en la medida en que es absolutamente ilusorio querer suprimir una guerrilla en un país montañoso cuando ésta dispone además de dos bases de apoyo: Pakistán e Irán. La lógica de semejante empresa «contra-insurreccional» es la ampliación permanente de la zona de combate y la incursión de territorios que sirven de base de apoyo a la guerrilla.
- la tendencia reaccionaria anticomunista del movimiento islámico en el conjunto del mundo musulmán. Ya la reacción ha aprovechado, en los países musulmanes, la intervención soviética en Afganistán para organizar una inmensa bronca contra el «comunismo ateo», presentado como un régimen que trata de imponer la URSS, mediante la fuerza, a las poblaciones musulmanas. Washington y sus aliados cuentan ahora con la cuestión afgana para invertir la orientación antioccidental dominante que caracteriza al movimiento islámico desde la toma de los rehenes norteamericanos en Teherán. Además, esta campaña puede tener repercusiones en el mismo seno de la URSS, donde la opresión nacional por parte de la burocracia crea las condiciones ideales para ello.
- la justificación por los imperialistas de su reanudación de la carrera de armamentos, so pretexto de que la URSS demuestra en Afganistán que intenta imponer por la fuerza regímenes que le son fieles. El asunto afgano ha reducido ya a la nada los esfuerzos del movimiento obrero de los países imperialistas contra los planes de incremento del potencial militar nuclear en Europa occidental. Contribuye a disipar los efectos paralizantes de la guerra de Vietnam en la capacidad de intervención militar exterior del imperialismo norteamericano. Contribuye, además, a desorientar a la oposición antiburocrática en los Estados obreros.

En este contexto, es necesario que las tropas soviéticas se retiren de Afganistán y que el Kremlin le reconozca al pueblo de este país el derecho a disponer de sí mismo, reparando así el daño causado por su intervención al proceso de la revolución permanente en Afganistán y en el conjunto de la región. La eventualidad de una toma del poder por los rebeldes musulmanes en Kabul —que en modo alguno es inevitable—, es en todo caso menos nociva para la revolución mundial que lo que sería una guerra prolongada de la URSS en Afganistán.

Los marxistas revolucionarios deben tomar parte e impulsar las acciones de presión política del movimiento obrero y antiimperialista sobre la URSS, a favor de una retirada inmediata de las tropas soviéticas de Afganistán. Al mismo tiempo, deben combatir toda forma de boicot de la URSS y oponerse a toda argumentación del tipo de las que la califican de imperialista. Deben ejercer también su deber de solidaridad hacia las fuerzas afganas antif feudales y antiimperialistas, explicando que la exigencia de retirada de las tropas soviéticas no debe confundirse en modo alguno con un apoyo a los «mudayahidin». Los marxistas revolucionarios tendrán así la ocasión de explicar la diferencia entre su concepción del socialismo y de la burocracia estalinista.

República Popular China

El movimiento democrático en China

Joseph KRASNY

TRAS su aparición en el otoño de 1978, el Movimiento democrático chino se enfrenta actualmente a una fuerte oleada represiva. Después de haber intentado sacar provecho del desarrollo de la contestación y de utilizarla en la denuncia de la Banda de los Cuatro, el nuevo equipo dirigente en torno a Deng Xiaoping ha optado ahora claramente por el enfrentamiento.

que se desolidarizase de la revista *Exploración*.

Pero se produjo exactamente lo contrario. Una revista como *La Primavera de Pekín*, que anteriormente había criticado las posiciones de Wei y que es conocida por su apoyo a la "fracción liberal" del aparato, declaró: "Es un craso error condenar a esas personas. Lo que nos decepciona profundamente es que el Comité Central sea tan débil e impotente en

la lucha contra los privilegios y caprichos burocráticos, pero tan resuelto y enérgico en el tratamiento de Wei Yingsheng". La mayoría de la oposición comprendió que a través de Wei se amenazaba al conjunto del movimiento.

De este modo, la represión alcanzó un estadio superior. Ataca en dos frentes que son significativos por los "silencios" que suponen. Se trata, en efecto, de una parte de los oponentes que se ha ligado al movimiento social de contestación (marchas de campesinos, movilizaciones peticionarias, jóvenes instruidos que vuelven del campo a las ciudades, parados), y, por otro lado, de los lazos establecidos entre miembros del Partido y redactores de las revistas democráticas.

El primer aspecto viene ilustrado por la condena, el 24 de diciembre, de Fu Yuehua, a dos años de prisión, por haber participado en una marcha de campesinos, en enero de 1979, "contra el hambre, contra la persecución, por la democracia,

El final de la "primavera de Pekín"

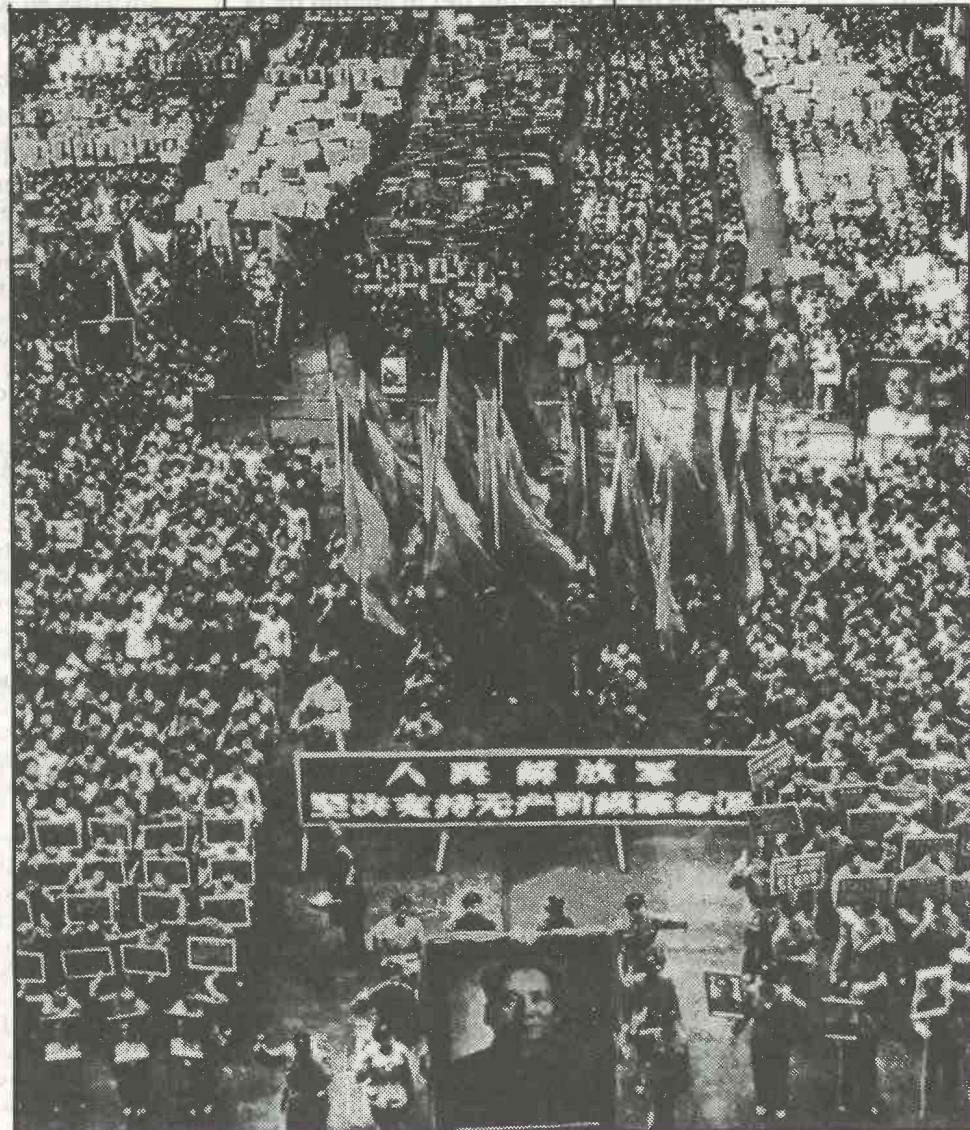
Del "principio de los tres noes", proclamado en diciembre de 1978 en el III Pleno del XI Comité Central del PCCh, donde los partidarios de Deng derrotaron a los de los Cuatro, se ha pasado a los "Cuatro principios fundamentales", recordados con firmeza en noviembre de 1979 por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular.

"No agarrar la trenza, no poner la gorra, no aporrear", rezaba la primera fórmula, o en otras palabras: ni detenciones arbitrarias, ni juicios precipitados, ni denuncias a ultranza.

"Papel dirigente del Partido, respeto de la dictadura del proletariado, apoyo al régimen socialista, fidelidad al marxismo-leninismo y al pensamiento de Mao Zedong", dice la segunda, cuya proclamación promete "severos castigos" a quienes la contestan abiertamente.

Así, tras una primera oleada de detenciones, en la primavera de 1979 (que según algunos observadores habría afectado al menos a 2.000 personas en Pekín y Shanjai), se ha celebrado el juicio contra Wei Yingsheng, redactor jefe de la revista pekinesa *Exploración*, condenado en octubre a quince años de prisión. Mediante la introducción de un reflejo nacionalista - Wei fue acusado de haber revelado "secretos de Estado" en una conversación con un periodista extranjero en torno a la guerra chino-vietnamita -, el objetivo de este primer juicio era manifiestamente el de dividir al movimiento democrático.

Al rechazar abiertamente el marxismo, Wei representa, en efecto, a un ala muy minoritaria de un movimiento que en su gran mayoría razona dentro de un marco conceptual marxista. Se trataba por tanto de desequilibrar a la oposición, haciendo



"Nosotros pensamos que el presidente Mao es una persona, no un Dios" (De un *dazibao* aparecido en noviembre de 1978).

por los derechos humanos". Obrera pekinesa, condenada al paro tras su denuncia de un mando que la había violado, no es una "figura intelectual" del movimiento democrático, sino más bien una "militante de base", una "activista" que varios testimonios describen como una persona que ayudaba a los campesinos pobres que acudían a la capital, explicándoles dónde y cómo debían formular sus reclamaciones...

El otro aspecto viene ilustrado por los editoriales de la prensa oficial del 29 de enero de 1980. El del *Diario del Pueblo* carece de ambigüedad: "A los miembros del Partido, a los cuadros les está prohibido establecer contactos secretos con los perniciosos elementos perturbadores y que realizan actividades clandestinas. Está prohibido apoyarles, so pena de aplicarseles las sanciones estipuladas tanto por la ley como por las normas disciplinarias del Partido".

El *Periódico de los obreros* escribe, por su parte: "Nuestra democracia es una democracia socialista, es decir, una democracia dirigida, centralizada (...). La pretendida democracia, que rechaza la dirección del Partido, no es más que una forma de liberalismo burgués y de anarquía."

Los miembros de la dirección de la Liga de la Juventud Comunista, que en la capital participaban en la revista *La Primavera de Pekín*, han sido invitados a hacer su auto-crítica. Al parecer, esta publicación ha sido suspendida voluntariamente. Otra revista pekinesa, la *Tribuna del 5 de abril*, ha propuesto dejar de aparecer a cambio de la puesta en libertad de uno de sus miembros, Li Qing, detenido el 11 de noviembre por haber difundido las actas del juicio de Wei.

Detenciones y condenas, periódicos secuestrados y autocríticas... la represión se desarrolla tratando de amalgamar a los partidarios del antiguo régimen detestado de la Banda de los Cuatro con la actual contestación democrática. De este modo se trata de encubrir, a los ojos de la población, estos ataques contra militantes cuya implantación popular aún es débil.

Y a primera vista no se sabe bien que podría impedir que la represión fuera "rentable", por lo menos de momento. Los militantes del movimiento democrático son poco numerosos —de diez a veinte por revista—, son conocidos, aparecen públicamente, no se esconden; no están arraigados en un vasto movimiento social; apenas están organizados a escala nacional, pues los vínculos políticos entre ciudad y ciudad están aún poco estructurados. Materialmente no parece difícil que la burocracia pueda detener a sus principales animadores, como ha empezado ya a hacer de forma selectiva.

Sin embargo, quedarse ahí sería hacer un análisis poco profundo y mantenerse al nivel de las apariencias. El movimiento democrático es específico: no es ni una repro-



Hua Guofeng, actual presidente del PCC

ducción de las Cien Flores de los años cincuenta, ni una reedición de la Revolución Cultural de los años sesenta. Lo que lo caracteriza fundamentalmente no es, como ha sucedido a menudo en el pasado político de China, la instrumentalización de una protesta de masas por una fracción de la burocracia en las luchas internas por el poder. Al contrario, lo que nos parece primordial es el surgimiento de grupos de militantes dispuestos a organizarse autónomamente para llevar un combate antiburocrático duradero, en nombre del retorno a



Deng Xiaoping, el "hombre fuerte"

un socialismo auténtico. Y estos militantes tienen cuatro bazas a su favor:

1. una **tradicón política**, una experiencia de la represión, un pasado que los relaciona con las fracciones rebeldes de los Guardias Rojos durante la Revolución Cultural, antes de su recuperación por Mao Zedong;

2. una **reflexión teórica nueva** que se emancipa poco a poco del galimatías maoísta y que busca puntos de apoyo en la producción teórica del movimiento obrero internacional;

3. vínculos con ciertas **frangas del Partido**, un eco indudable entre los cuadros menores e intermedios;

4. la existencia de numerosas dificultades económicas que según las regiones dan lugar a una crisis social latente muy peligrosa para el régimen.

Tradiciones y diversidad de la oposición

A diferencia de la disidencia en los países del Este, la gran mayoría de los oponentes chinos son trabajadores, obreros. Aunque entre sus miembros hay algunos enseñantes y estudiantes, el movimiento se apoya fundamentalmente en la clase obrera urbana y se identifica con la causa de los obreros y los campesinos, rechazando cualquier forma de elitismo.

"*Algunos periodistas extranjeros piensan que las organizaciones por los derechos humanos que han hecho su aparición en China son del mismo tipo que lo que se ve en Occidente o en la Unión Soviética*", explica Xu Wenli, redactor jefe de la *Tribuna del 5 de abril*, de Pekín. "*Es falso: existen diferencias. Por ejemplo, en Occidente y en la Unión Soviética, los animadores del movimiento por los derechos humanos son intelectuales de mucha categoría, que tienen fama en sus países; mientras que en China no son sino obreros corrientes, miembros de las clases bajas*".

En Cantón, la metrópoli del sur, todos los impulsores de revistas contestatarias (*La Voz del Pueblo*, *La Calle del Pueblo*, *El Oleaje*, *La Vida*) son obreros. Son una decena, a veces menos, en cada revista. Hacen el periódico entero, de la A a la Z, ellos solos, en locales públicos (la dirección aparece en la publicación), dedicando a ello su tiempo libre y trabajando por las noches. La tirada es de quinientos, seiscientos ejemplares, como máximo mil, y la venta se hace en la calle, en voz en grito.

Esta base fundamentalmente obrera de la disidencia se explica por factores específicamente chinos. Durante los últimos diez años, varios millones de habitantes de las ciudades y jóvenes instruidos (salidos de la enseñanza secundaria), han sido deportados a las aldeas, obligados a seguir el movimiento "xiafang" ("adelante, al campo"), que se lanzó tanto para mitigar la revuelta juvenil al final de la Revolución Cultural como para hacer frente al exceso

Extremo Oriente

de población urbana y al paro.

En este país pobre, donde el proletariado propiamente dicho es tan sólo una minoría, los que han podido permanecer en la ciudad están relativamente privilegiados. El status social del trabajo fabril es, en efecto, bastante elevado. No es extraño que los cuadros hicieran uso de sus prerrogativas para colocar a su progenitura en las fábricas, particularmente cuando la revolución Cultural paralizó el sistema universitario y las posibilidades de estudiar. Así, a diferencia de Europa del Este, encontramos a jóvenes obreros de la industria urbana particularmente bien informados, a través de sus relaciones familiares, sobre las luchas políticas en las altas esferas.

Y a la inversa, los círculos intelectuales y artísticos, que se reponen lentamente de un periodo terrible durante el cual estaba proscrita toda libertad de creación, apenas participan en el movimiento democrático. En la *intelligentsia* de las grandes ciudades encontramos lo que algunos sinólogos llaman la "postura disidente pesimista", en la que prevalece el individualismo: no hay nada que hacer, simplemente hay que vivir de otra manera, inmediatamente.

Al haber rebasado, en su mayoría, la treintena, los militantes del movimiento democrático forjaron sus primeras armas políticas a finales de los años sesenta, durante la Revolución Cultural. La participación en esos acontecimientos, que la propaganda oficial reduce actualmente a una inmensa "gamberrada", es un precioso capital, del que en modo alguno reniegan.

En efecto, es importante distinguir entre la revuelta antiburocrática espontánea en la Revolución Cultural y la manipulación burocrática que la desvió. "Me uní a los Guardias Rojos en abril de 1966", explica Wei Yingsheng, por ejemplo. "Sé exactamente por qué se rebelaban: no porque Mao los animara, sino porque estaban indignados de ver todas las desigualdades y todas las irregularidades en la sociedad y en la escuela. Que Mao los haya utilizado más tarde, dándoles su apoyo con el fin de lograr sus objetivos personales, es otra historia".

A menudo miembros de la fracción "rebelde" de los Guardias Rojos (que se oponía a la que se reivindicaba de la legitimidad del Partido), los disidentes de hoy, en su mayoría ven en aquellos inicios de la Revolución Cultural la primera gran revuelta contra la burocracia y sus privilegios, retomada unos diez años más tarde por las manifestaciones de abril de 1976, en la plaza Tien An Men de Pekín y en otras ciudades, que dieron la estocada a la Banda de los Cuatro.

Estos inicios de la Revolución Cultural no constituyen solamente una referencia política. El hecho de haber participado en aquellos acontecimientos da "solidez" a estos militantes: han vivido un periodo

de guerra civil, de una brutalidad y violencia extremas. Una estimación razonable calcula en dos millones los muertos durante aquellos años de "yundong" (o campaña política interrumpida).

El texto del grupo Li Yise, en Cantón (*A propósito de la democracia y de la legalidad bajo el socialismo*), avanza la cifra de 40.000 "recolucionarios masacrados por el sistema de Lin Biao" y de un millón de personas "perseguidas, vejadas, encerradas", y ello tan sólo en la provincia de Cantón. No se trata solamente de vícti-



Chu Enlai, antiguo primer ministro

mas del ejército, que intervino a partir de 1967, sino también de personas muertas en los enfrentamientos entre bandas políticas rivales o, como en Cantón, en las batallas campales que durante días se libraron, con armas blancas, las dos principales fracciones de los Guardias Rojos.

Al haber vivido no sólo la represión, sino también las torturas, la crueldad, las ejecuciones sumarias - todo ese retorno de las tradiciones violentas propiamente "feudales", como las caracterizan ellos mismos -, la exigencia democrática de los oponentes actuales está arraigada en sus propias vivencias, y no surge únicamente de consideraciones teóricas. En esto ya no es

posible dar marcha atrás.

En este sentido, una de las novedades aportadas por el movimiento democrático, en comparación con otros periodos de agitación política en China, es la diversidad de los enfoques, de los textos, de la producción literaria y periodística. Detrás de los títulos más o menos evocadores (*Tribuna del 5 de abril*, *La tierra fértil*, *La mies de otoño*, *La espuma de las olas*, *El cuaderno de la juventud*, *La voz de la democracia*, *Nosotros*, *La flor de febrero*, *El vagabundo...*) se esconden tanto revistas literarias como publicaciones políticas, y también una especie de boletines internos destinados en particular a los militantes del movimiento (como la *Discusión* en Cantón, o *Pensar* en Hangchou, en el Chekiang).

Una variedad de publicaciones que refleja también una diversidad de posiciones: desde la crítica del marxismo hasta posiciones marxistas radicales, pasando por el apoyo a la fracción supuestamente liberal del Partido. Un caso extremo: en el Guisú, una revista - *El Deshielo* - muestra interés por el Cristianismo. También aparecen referencias a los filósofos de la Ilustración, a Rousseau, al espíritu de las Leyes de Montesquieu.

Estas nuevas referencias constituyen una revancha contra la religiosidad política extrema en la que vivió la juventud china a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta: más allá del espectacular culto a la personalidad, la educación recibida en las escuelas era también religiosa, limitándose al breviario "rojo".

Un antiguo Guardia Rojo de Cantón nos contó las discusiones organizadas y obligatorias que provocaba la noticia de que uno de ellos había soñado la noche anterior con Mao.

Mientras el nuevo equipo dirigente trata de imponer un tecnocratismo de alto vuelo, algunos oponentes buscan el hilo de un pensamiento racional, coherente, materialista. De ahí las referencias a la Ilustración, o a veces al Renacimiento, por oposición a la noche negra de la Edad Media y del feudalismo.

"Nos consideramos todos marxistas-leninistas", reza uno de los textos expuestos en noviembre de 1978 en el Muro de la democracia de Pekín, hoy suprimido. "Está bien, entonces hagamos nuestro el auténtico espíritu del materialismo. Que los hechos, la verdad, sean fielmente relatados a las masas. ¡No hay que engañarse a sí mismo y burlar a las masas! ¡No hay que falsificar la historia! La historia no permitirá que nadie la ultraje de esta manera. Nosotros pensamos que el presidente Mao es una persona, no un Dios".

"El culto de los nuevos ídolos es aún más peligroso que las viejas supersticiones feudales", dice el manifiesto de la "Sociedad de la Ilustración", en la provincia de Guisú. "Cuando los ídolos desaparezcan del corazón del pueblo, entonces podremos hablar

de una verdadera liberación. Los ídolos son los enemigos declarados de la democracia y de la ciencia”.

Otro texto que apareció en el Muro, este anónimo, dice irónicamente: “El presidente Mao ha dicho: el amor y el odio tienen siempre un carácter de clase. Me pregunto: ¿a qué clase pertenecía el amor entre el presidente Mao y Yang Qing, cuando estaban en Yan'an...? ¿Quién crea la historia? ¿El presidente Mao o las masas?”.

Y en un artículo aparecido en julio de 1979, Wang Xishe, uno de los autores del *dazibao* Li Yishe, que hoy prosigue solo el combate, empieza lanzando pullas contra el nuevo culto que ha sucedido a los anteriores, el “culto negativo” de la Banda de los Cuatro: “Es como si hubieran sido casi unos dioses, investidos de un amplio poder mágico. ¿Todos los desastres que ha sufrido China durante el último decenio son culpa suya! ¿Si simplemente no hubieran existido, no habríamos padecido tanto! Así, no habrán sido determinadas relaciones sociales las que crearon la Banda de los Cuatro, sino los Cuatro los que crearon la relación social. He aquí una nueva mistificación, una nueva religión”.

Por encima de su diversidad, hay un punto que unifica al movimiento democrático: su acuerdo con las “cuatro modernizaciones” económicas oficiales, aunque en la medida en que vengan acompañadas de una quinta: la democracia.

“La modernización puede lograrse en China”, explica Wang Xishe en una entrevista realizada en diciembre de 1979, “pues es una aspiración del pueblo. Pero hay una condición previa: primero hay que suprimir el sistema burocrático. Si los conservadores del partido se obstinan en mantener sus privilegios, chocarán violentamente con los intereses del pueblo. Y de este enfrentamiento nacerá una nueva inestabilidad política. La exigencia de democracia y de modernización es irresistible. En esta coyuntura, el papel del movimiento democrático consiste en apoyar la reforma de la productividad, y a través de ello, en transformar el sistema político. Pues sólo con el desarrollo de la producción la estructura social y política podrá soportar un cambio importante y significativo. Nosotros exigimos que el desarrollo de la productividad venga acompañado de los derechos fundamentales del pueblo”.

Un renacimiento marxista

En la medida en que su arraigo social constituye un punto fuerte de los oponentes chinos, en comparación con los disidentes de algunos países del Este europeo, no se ha dejado de subrayar la mayor debilidad de sus producciones teóricas.

“Las carencias, al nivel de la reflexión teórica, explican el carácter poco conceptual del movimiento”, escribe un si-



Enseñanza para una burocracia “eficaz”

nólogo francés. “La ausencia de capacidad intelectual limita también considerablemente su alcance”. Este juicio es superficial, pues en un año el movimiento democrático ha dado a luz, progresivamente, a una reflexión totalmente nueva, desde el encarcelamiento de los militantes trotskistas chinos en 1952-53. Una reflexión marxista original que a pesar de la falta de informaciones, de la penuria de textos, va abriéndose camino.

Un primer aspecto significativo es la referencia a Yugoslavia. Tanto Wei Yingsheng como los oponentes marxistas la presentan como un modelo de socialismo democrático, en oposición al poder burocrático chino. Un entusiasmo que nos parecerá ingenuo y que hizo, por ejemplo, que Wang Xishe calificara a Tito, en un discurso pronunciado en la Universidad de Cantón en abril de 1979, como “el más grande marxista contemporáneo”.

Este “modelo yugoslavo” es de hecho un hilo conductor que lleva a los oponentes chinos hacia las corrientes antiestalinistas del movimiento obrero, y al final, quizás, a la oposición de izquierdas. Dos razones lo explican: por un lado, Yugoslavia fue denunciada como el modelo de revisionismo por el maoísmo triunfante; por otro, los únicos textos antiestalinistas que pueden encontrar fácilmente los disidentes son los libros yugoslavos de los años cincuenta.

En ellos descubren las críticas al estalinismo que ellos mismos formulan también, y una problemática autogestionaria del socialismo que les parece responder a su búsqueda de una democracia socialista. Tras describir la autogestión yugoslava con ayu-

da de unos folletos editados en 1953, Wang Xishe, en su artículo “Nuevas exigencias a la dictadura del proletariado”, termina así: “Y recordad cómo se levantaron contra Stalin y liberaron su pensamiento”. En su opinión existe sin duda un parentesco entre ambas situaciones.

La referencia a Yugoslavia permite comprender las dificultades del renacimiento del marxismo en China. Interrogado a este respecto en diciembre de 1979, Wang Xishe se reserva esta vez su juicio sobre Yugoslavia e insiste sobre todo en la jerarquización de la información. “No tenemos más que noticias fragmentadas”, añade.

Hay que saber, en efecto, que existen al menos diez niveles de difusión de la información, de noticias y de textos, partiendo del escalón más alto, donde prácticamente todo es traducido. De todos modos, pese a estos obstáculos objetivos, aparecen nuevas posiciones, restableciendo la tradición marxista. Cantón desempeña en este terreno una función particular, gracias a la proximidad de Hong Kong, donde es fácil encontrar una serie de publicaciones de izquierda en chino y donde la extrema izquierda organizada está representada fundamentalmente por las dos organizaciones de la IV Internacional.

Desde este punto de vista, Wang Xishe nos parece ser la “figura” del movimiento democrático, cuyo pensamiento es el más avanzado. Resumámoslo en algunas rúbricas:

- **La naturaleza del régimen chino:** abandonando el concepto ambiguo y maoizante de “burguesía recién nacida”, empleado en el *dazibao* de 1974, firmado Li Yishe, Wang

Extremo Oriente

habla ahora claramente de burocracia. "La base actual de la sociedad china es un tipo particular de producción capitalista. Pero esta sociedad, tomada globalmente, es una nueva sociedad democrática, en transición del capitalismo al socialismo. De la combinación de ambos resulta un sistema social burocrático". (Conversación mantenida en diciembre de 1979).

• **El estalinismo:** "Lo rechazo, y con esto quiero decir que lo considero inaceptable en el plano teórico. El pasado del movimiento comunista mundial y la historia del socialismo de este medio siglo demuestran que el estalinismo simplemente no marcha. Hay aspectos correctos y otros equivocados en el pensamiento de Mao Zedong, y todos estos últimos proceden del estalinismo. El error más grave de Stalin consistió en poner el Partido fuera de control por el pueblo y la sociedad. Esto da lugar a una idolatría del partido y de sus jefes y ha transformado el marxismo-leninismo en una nueva religión. Esta es una de las raíces de la burocratización de los países socialistas. Me intereso así, por las teorías de Trotsky y de Kautsky. Merecen ser estudiadas seriamente en todo lo que afecta a la historia del movimiento comunista. Hay que rechazar la idea de que todo lo que refutaron Lenin y Stalin era necesariamente malo".

• **La URSS:** "La URSS no es ni un Estado capitalista, ni un Estado revisionista, es un Estado socialista burocratizado. No existe en la URSS una auténtica dictadura del proletariado, y desde este punto de vista no hay ninguna diferencia sustancial con China. Mao pensaba que la orientación de su dirección determina la naturaleza del Estado. ¡Es absurdo! En el fondo, los sistemas económicos de la URSS y China son los mismos. Pienso además que debería haber una distensión entre ambos países. La política de cada uno debería ser autónoma, sin que China trate de imponer su voluntad a la URSS, y viceversa". En otra respuesta, afirma su apoyo a los movimientos disidentes de los países del Este y formula el deseo de que sea revisada la condena de la revolución de 1956 en Hungría.

• **La democracia socialista:** En su artículo de julio de 1979, Wang reclama el retorno a una auténtica dictadura del proletariado, que no sea ni la del Partido ni la de algunos individuos. Exige un "control directo y democrático de los medios de producción por los trabajadores". Reivindica la elegibilidad y revocabilidad de los cuadros, y precisa que su salario no debería ser superior al de un obrero cualificado. Se pronuncia a favor de las comunas autónomas, exige que el Partido se limite a una función política y concluye expresando el deseo de que se establezcan "relaciones sociales basadas en la autogestión comunitaria".

Wang no es un caso aparte. Por ejemplo, en Wuhan, en la provincia de Hupei, Lu San, uno de los impulsores del "Grupo 5 de abril" y de la revista *El Tañido*, escribe:

"El principal obstáculo para lograr las cuatro modernizaciones son las ideologías que se apoyan una a otra... El día en que desaparezcan las ideologías feudales, el burocratismo no podrá sobrevivir durante mucho tiempo. Y el día en que sea derrocado el burocratismo, las ideologías feudales perderán su base". Desde junio de 1979, esta revista es constantemente molestada por la policía, y sus dirigentes, Qin Yong Min y Xiong Hang Min, han sido detenidos repetidas veces.

En Shanjai, Shu Yang escribe en *La Voz de la Democracia*, a propósito del "destino del socialismo en China": "Consideramos que las posiciones, los objetivos y los métodos del marxismo siguen siendo correctos. La teoría marxista de la lucha de clases y del socialismo científico no está superada. Ha sido enriquecida y desarrollada en la nueva práctica social. Pero el modelo marxista de socialismo es mucho más difícil de alcanzar.

No descansa solamente en la victoria de la revolución proletaria en un solo país, sino también en su victoria a escala mundial. En este sentido, Marx escribió un día que sólo liberando a la humanidad el proletariado se liberará a sí mismo".

En el artículo teórico de Wang ya citado encontramos también este enfoque racionalmente internacionalista: "El socialismo", escribe, "no es asunto de un solo país; es un sistema mundial. Las condiciones materiales previas del socialismo no incluyen únicamente unas fuerzas productivas altamente desarrolladas, sino también el mercado mundial creado por el capitalismo (...) Engels afirmó claramente que el socialismo no podrá triunfar en un sólo país, sino que, por el contrario, debía enfocarse ante todo desde el punto de vista del mercado mundial".

Y Shu Yang, el disidente de Shanjai, prosigue: "No pensamos que la naturaleza social del Estado chino sea socialista. Es una etapa de transición hacia el socialismo. Porque: 1) los propios productores no han sido integrados en los medios de producción; 2) la propiedad de los medios de producción toma la forma de una propiedad colectiva de todos los miembros de la sociedad; 3) la producción social no es directamente una producción socializada, sino una producción mercantil; 4) las clases aún no han desaparecido. Existen aún 'semiclasas'. El Estado aún no ha desaparecido (...) Para llevar a término la evolución hacia una sociedad socialista e impedir que los servidores de la sociedad se conviertan en sus amos, es necesario establecer y formalizar un sistema socialista democrático".

En esta reflexión sobre la democracia socialista, uno de los signos de la emergencia de un "pluralismo marxista" es asimismo la discusión sobre las posiciones de Lenin en torno a la realización de la dictadura del proletariado a comienzos de la Revolución Rusa. Wang Xishe, por ejemplo, es uno de

los que piensan que Lenin apoyó la dictadura del partido y que en este sentido fue el iniciador de la dictadura burocrática.

Malestar en el seno del PCCh

Existen algunos vínculos entre determinados miembros del Partido y los animadores del movimiento democrático. A primera vista, esto responde a la tradición política china: bajo la cobertura de una oposición, se encuentran corrientes que ante todo quieren apoyar a una fracción burocrática contra otra y asegurar su victoria mediante una agitación "fuera del partido".

En Cantón, en 1979, *La Voz del Pueblo* era muy representativa de esta sensibilidad. Rechazando categóricamente el calificativo de "disidentes", uno de sus redactores nos dijo que "los reformistas en el seno del Partido son la fuerza motriz del movimiento de reforma social. Nuestra tarea es apoyarles".

En la capital, la revista *La Primavera de Pekín* representaba una corriente parecida, animada por miembros del Comité Central de las Juventudes Comunistas. En ella podía leerse, por ejemplo, que si "el sistema de la Comuna de París" es un modelo de democracia, sus principales características - sustitución del ejército por la milicia, y de la burocracia por cuadros elegidos y revocables - son actualmente inaplicables en China: "Instaurar inmediatamente la Comuna llevaría a la anarquía".

De todas maneras, estos partidarios de una "reforma gradual" del sistema no escamoteaban sus críticas concretas a la burocracia. Uno de los números del verano de 1979 de *La Primavera de Pekín* explicaba que los privilegios burocráticos bloquean el desarrollo de las fuerzas productivas y que no basta con oponerse a tal o cual cuadro corrompido, sino que conviene atacar al propio sistema de privilegios.

Se revelaban casos concretos de injusticias cometidas: obreros obligados a dormir en las propias naves de la fábrica, mientras que algunos cuadros gozan de una superficie para habitar de 20 a 30 metros cuadrados por persona; o los golpes y la detención sin acusación de un obrero pekinés tras una discusión con un superior.

Por tanto, hay que ser prudentes y no hablar inmediatamente de cinismo o de manipulación burocrática. En el mismo seno del Partido existen bases objetivas para la reivindicación de la democracia. Hunde sus raíces tanto en la historia reciente como en el pasado del PCCh.

En primer lugar, la oleada de reclutamiento, lanzada durante la Revolución Cultural, constituye actualmente un importante factor de inestabilidad. De los 35 millones de miembros del Partido, más de la mitad fueron reclutados durante la Revolución Cultural. Como se

dice en China, "tomaron el helicóptero", y para mantenerse tuvieron que seguir los múltiples virages ideológicos, permanecer siempre en guardia, desconfiar de cualquier paso en falso.

Sin embargo, ahora, para realizar siquiera su trabajo administrativo, para impulsar la modernización económica, necesitan un mínimo de estabilidad. Necesitan no tener ya miedo de la menor extravagancia, de la mínima audacia. En este sentido, y dentro de su propia lógica burocrática, algunos de ellos resienten la necesidad de una liberalización, de una ligera apertura democrática.

No es un azar, por ejemplo, que Xi Shongxun, jefe del Partido en la provincia de Cantón, cuyo liberalismo reconocen todos los oponentes cantoneses (un liberalismo "realista": "no es ni un apoyo, ni siquiera una tolerancia", precisa Wang Xishe), sea también el que haya defendido, ante una conferencia de trabajo del Comité Central, una autonomía regional y un mayor poder de decisión a nivel local.

Por otro lado, la comparación entre el estado del Partido en China tras la muerte de Mao y el del Partido en la URSS tras la muerte de Stalin, resulta instructiva. Stalin destruyó la dirección revolucionaria del partido bolchevique mediante purgas y asesinatos, procesos y campos de concentración. Todos los que podían aspirar a su sucesión eran burócratas de carrera, sin pasado revolucionario, todos ellos estalinis-

tas fieles.

En China no sucede lo mismo. Mao no hacía ejecutar a sus rivales después de derrotarlos. En cuanto al tratamiento de los oponentes en el seno del Partido, durante los once conflictos internos que aparecen en la historia oficial, cinco de los cuales se produjeron después de 1949, la Revolución Cultural ocupa un lugar especial. Es cierto que hubo violentas purgas durante la Revolución - pero tras la conquista del poder, sólo durante la Revolución Cultural se impidió que los cuadros opuestos a la línea maoísta ocuparan funciones públicas.

De este modo, son muchos los hombres y mujeres que vuelven a sus asuntos, a nivel nacional, provincial o local, tras la muerte de Mao, y que combatieron durante los años treinta y cuarenta. Estos dirigentes experimentados, prestigiados además por su oposición a los excesos maoístas de los años sesenta, están dispuestos, al menos algunos de ellos, a aceptar una reflexión sobre cuestiones fundamentales como la relación entre democracia y socialismo. Si no van tan lejos como para poner en tela de juicio su propio status ni el sistema burocrático en su conjunto, abordan en la misma prensa teórica del PCCh temas que recuerdan a las discusiones en el movimiento democrático.

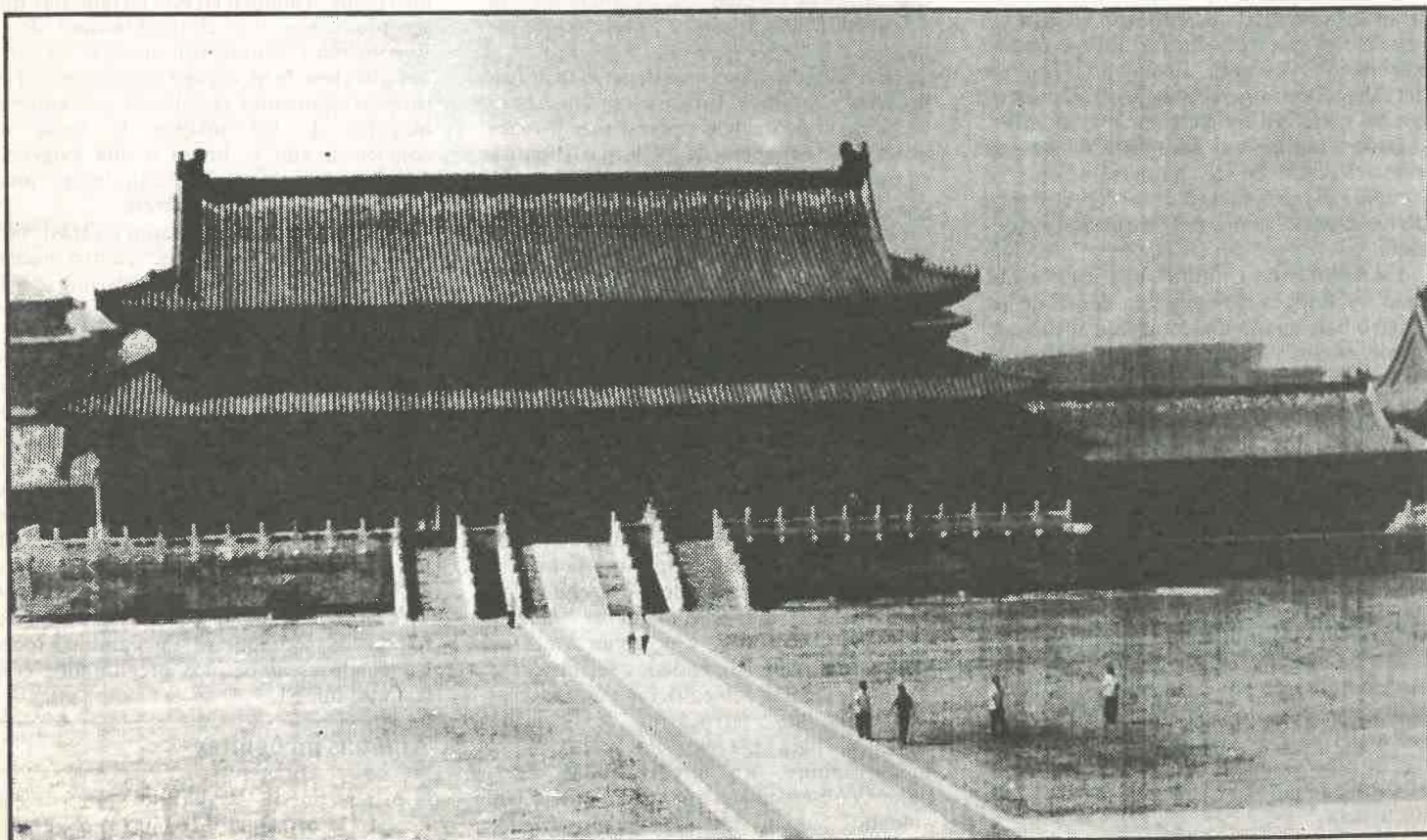
Esto es particularmente claro en la revista mensual *Shexue Yanchiu* (Estudios Filosóficos), el más franco de los periódicos teóricos oficiales, cuya difusión es de casi 250.000 ejemplares. También se denota en

la Academia de Ciencias Sociales, una de cuyas publicaciones reclamaba, en octubre de 1979, que se restablezca la autoridad de la ley no sólo "por encima de las directrices de los dirigentes", sino también "por encima de las decisiones del Partido".

Hecho significativo: Wang Xishe envió, por un lado, su artículo a la Academia de Ciencias Sociales, antes de publicarlo en Cantón, y por otro se refiere con elogios a un ensayo publicado en la revista *Shexue Yanchiu*.

Los pocos centenares de militantes del movimiento democrático podrían ser eliminados de la noche a la mañana si no estuvieran vinculados a los centenares de miles de funcionarios, administradores, trabajadores y enseñantes que constituyen la tendencia democrática en el universo oficial y que ponen profundamente en duda el maoísmo, sus valores y sus métodos.

En Shanjai, una revista oficial, *Leer*, publicó una discusión contradictoria sobre la mayor tolerancia en la lectura: ¿Tiene que haber una selección? Y la respuesta de varios participantes era favorable a una libertad de difusión y de edición. Al día siguiente del proceso de Wei, otra publicación oficial, el *Diario de Guangming*, publicó artículos que discutían la nueva línea y provocó especulaciones entre los "pekinólogos" al llamar a una "exploración (investigación) teórica independiente". Esto se interpretó como una discreta referencia al periódico de Wei.



Extremo Oriente

Una crisis social latente

Las dificultades de la nueva política económica china son manifiestas (ver INPRECOR n° 13): los objetivos de las "cuatro modernizaciones" han sido revisados a la baja; inflación, aumento de los precios de una serie de bienes de consumo de primera necesidad, desigualdad social creciente, mercado negro, estancamiento de la producción de cereales, etc.

Revelando así el trasfondo que justifica su existencia, las revistas democráticas tienen todas una rúbrica permanente en que se denuncian los privilegios de la capa dirigente. Se recuerda hasta la saciedad que los cuadros superiores tienen a cinco personas a su servicio, que tienen televisores en color procedentes de la Alemania Occidental, un frigorífico, moqueta, teléfono (mientras que en promedio hay un aparato por cada 1.000 habitantes), tiendas especiales, hospitales particulares etc.

En todas partes el mismo refrán: a los responsables les importan un comino las "cuatro modernizaciones", pero "modernizan" a su propia familia, enviando a sus hijos al extranjero (es el caso del hijo de Deng Xiaoping, que está estudiando en los Estados Unidos). Los privilegios de los hijos de los cuadros son denunciados a menudo como el abuso más escandaloso: a finales de los años sesenta, se refugiaron en el ejército (el 70% de los estudiantes de las escuelas militares de medicina de Shanjai, Xian, y Chongqing, por ejemplo); después serán los primeros que entrarán en las universidades, que volvieron a abrirse tras la Revolución Cultural; finalmente, hoy en día salen al extranjero o encuentran puestos que los ponen en contacto con extranjeros.

Otro tema es la crítica de la improvisación de la modernización. Se compara el lanzamiento de las "cuatro modernizaciones" con el del "Gran Salto Adelante".

La Revolución Cultural, el "sistema Lin Biao" y después el reino de la Banda de los Cuatro han legado una situación social que puede resultar explosiva, particularmente en las ciudades. La apuesta tecnocrática de la "línea de Deng" consiste en desarmarla. La apuesta del movimiento democrático podría consistir en participar en esto.

Se trata en primer lugar de la masa de jóvenes instruidos del movimiento *Xiafang*, que han vuelto a las ciudades. Se estima en 17 millones los jóvenes educados que fueron deportados al campo durante los diez años de Revolución Cultural. Han venido a engrosar la masa de parados urbanos, que algunos estiman en 20 millones. En la ciudad de Shanjai tan sólo, en 1979 había 300.000 parados, a los que acaban de sumarse 200.000 estudiantes de bachillerato "a la espera de un puesto de trabajo". Hacen pequeños trabajillos o caen en la delincuencia.

Estos jóvenes han engrosado las filas de



los "peticionarios". Este movimiento, llamado *shangfang*, fue en 1979 la principal forma de agitación de masas. Un *dazibao* del Muro de la Democracia, firmado por Shang Xifeng, obrero agrícola de Shanxi, evaluaba en 100.000 estos *refugiados shangfang* en la capital, donde dormían en las calles, mendigando y robando por la fuerza de las cosas. Estos "peticionarios" protestan contra el hambre, contra las exacciones de los cuadros, reclaman justicia y rehabilitación, o exigen simplemente trabajo.

Todo ello dió lugar a verdaderas manifestaciones y motines. En varias provincias se ha hablado de huelgas generales de jóvenes instruidos. En enero de 1979, participaron en una de ellas, en el Yunan, 50.000 personas. La *Calle del Pueblo*, una de las revistas cantonesas, afirmaba que en el otoño pasado 3.000 jóvenes instruidos se habían manifestado durante 24 horas en la provincia de Chekiang, haciendo marchas, sentadas y huelgas de hambre. En Shanjai se desarrolló un movimiento similar a comienzos de 1979. Los manifestantes exigían trabajo, una vivienda y cupones de racionamiento para la alimentación. El 14 de diciembre de 1979, tres de los impulsores de estas manifestaciones fueron condenados a 9, 5 y 2 años de cárcel, respectivamente.

Esta crisis social urbana es reconocida por las autoridades, que la camuflan como delincuencia. A finales de 1979, el ejército tuvo que intervenir para mantener "la ley y el orden" en nueve, y posteriormente en trece provincias: los soldados recibieron la orden de vigilar los edificios públicos, las estaciones de ferrocarril, los locales oficiales, para prevenir un asalto de la muchedumbre. En noviembre de 1979, algunos observadores afirmaban que 15.000 soldados habían sido acantonados en 800 escuelas de secundaria, e incluso de prima-

ria, en la aglomeración pekinesa. Finalmente, no parece que la guerra con Vietnam haya arreglado las cosas. Se habla de soldados que se negaron a ir a la primera línea e incluso una división entera.

Nada sería más peligroso para las autoridades que una unión de la contestación literaria, periodística, con las reivindicaciones de los peticionarios de toda clase, parados, campesinos, jóvenes instruidos. También en este terreno hay que ser prudentes: tras el traumatismo de la Revolución Cultural, son muchos los jóvenes que caen en un oscuro apolitismo. Los propios oponentes reconocen que entre la mayoría de los jóvenes la toma de conciencia aún se limita a una exigencia estrictamente material: trabajo, mejor nivel de vida, bienes de consumo etc.

De todas maneras, hay aquí un trasfondo social que, caso de que las "cuatro modernizaciones" se atasquen, puede unir a la oposición política organizada. Según un sondeo realizado en diciembre de 1978 y publicado por la revista, favorable a Deng, *Dongxiang* (publicada en Hong-Kong), el 76% de los chinos consideraban que en China no se respetaban los derechos constitucionales. La pregunta planteada era la siguiente: "¿Considera usted que se respetan los derechos del ciudadano garantizados por la Constitución?" El 75% de los obreros respondió que NO, así como el 92,9% de los cuadros de la industria, el 71% de los estudiantes, el 100% de los enseñantes de secundaria... En cambio, todos los cuadros campesinos preguntados contestaron que SI.

Algunas incógnitas

Esta respuesta "seguidista" pone de manifiesto la principal incógnita con que nos topamos al tratar de hacer un pronóstico

sobre el futuro político de China: el campesinado.

El intento de recomposición del orden burocrático puede evaluarse con ayuda de dos cifras. Una de ellas se relaciona con el análisis precedente y muestra que cerca de dos tercios de la población china tiene menos de 25 años de edad. La otra recuerda que el 77% de la población es campesina.

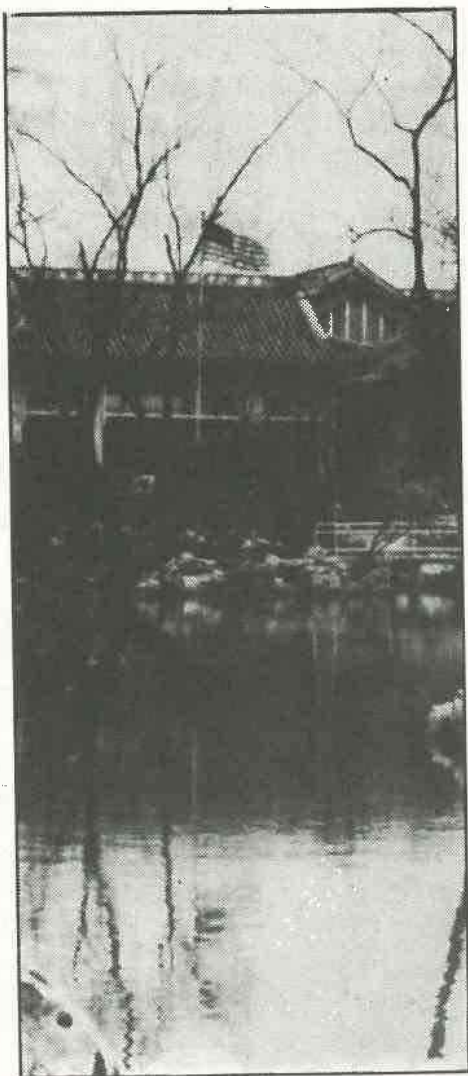
Sin embargo, la "NEP" preconizada por el equipo dirigente tiende a relanzar una economía de mercado en el campo y multiplica las garantías otorgadas a los campesinos, criticando las comunas populares, su rigidez y su pesadez. Un estribillo: conceder un respiro a los campesinos tras los tumultos de la Revolución Cultural. De todos modos, esta orientación no deja de encontrar obstáculos en el seno del aparato, como revelan las críticas en nombre del "espíritu de Dashai" (nombre de una comuna rural considerada como un "modelo" por la tradición maoísta), publicadas en el *Diario del Pueblo* en marzo de 1979, y por *Bandera Roja* en junio.

Los militantes del Movimiento Democrático no abrigan ilusiones sobre su fuerza real. Suponer que porque ellos mismos son obreros, el movimiento ya tenga una base de masas proletaria, sería confundir los deseos con la realidad. No es en absoluto evidente que muchos de sus compañeros de trabajo se identifiquen a estos hombres, cuyo nivel político y cultural es frecuentemente muy alto. En revancha, es indiscutible que cuentan con una amplia simpatía, pasiva y silenciosa.

El porvenir dependerá en gran parte de la capacidad de los oponentes para pasar del estadio de la **reflexión** y del debate político al de su puesta en **práctica**, entre las masas obreras y campesinas y entre los jóvenes instruidos en paro. En suma, de su capacidad para pasar al estadio de la **organización**.

En este sentido se dio un paso adelante el 10 de enero de 1980. Tres revistas de Cantón (*El Oleaje*, *La Vida*, *La Calle del Pueblo*) lanzaron el primer llamamiento nacional a todas las "publicaciones populares" de China. Frente a la represión a las "cruces pruebas" por las que tiene que pasar el movimiento democrático "desde el pasado mes de octubre", este texto propone "perder toda la ilusión" y "prepararse a combatir" en una "lucha prolongada" entre lo "antiguo" y lo "nuevo".

Reivindica la libertad de publicación y un estatuto legal para el conjunto de revistas democráticas. Afirma que la fundación de "una revista nacional que responda a las necesidades de la situación actual es una sugerencia. Debemos unirnos para obtener la libertad de edición y para que sobrevivan nuestras publicaciones", escriben sus autores. "La táctica guerrillera de quienes actúan por su propia cuenta sólo llevará al fracaso de nuestras publicaciones, una tras otra. Esta lección debe mantenerse viva. No



La embajada norteamericana en Pekín.

esperaremos a que nos rompan todos nuestros palillos, uno después de otro, para empezar a reforzarlos; poniéndolos en híz. Asimismo tenemos que vincular estrechamente nuestras publicaciones con los intereses y las necesidades de las amplias masas populares, con el fin de suscitar una atención más constante por su parte. Es del pueblo; fuente inagotable, de donde alimentamos nuestra voluntad".

Han aparecido una serie de debates entre distintos componentes del movimiento democrático, en torno a cuestiones organizativas y de orientación más general. Sin embargo, la revisión crítica de la historia china no ha hecho sino empezar. Si el pasado de numerosos militantes de las revistas contestatarias tiene sus raíces en los movimientos de los Guardias Rojos de 1966, el movimiento antiburocrático se caracteriza por una ruptura política, ligada al trauma que produjo la experiencia de la Revolución Cultural entre la juventud china.

Los Guardias Rojos denunciaban el sistema sociopolítico vigente en China a

comienzos de los años sesenta, es decir, en la época en que encabezaban el partido Liu Shaoqi y Deng Xiaoping. Creían responder a un llamamiento de Mao. El movimiento democrático que renace en 1976 denuncia, a su vez, el reinado de la Banda de los Cuatro, e inicia la crítica del "izquierdismo" maoísta en el preciso instante en que Deng Xiaoping vuelve a su cénit y emprende un curso más "realista". Son pocos los artículos que, como el de Yi Ming, publicado en la *Voz del Pueblo*, de Cantón en julio de 1979, tratan de hacer un análisis retrospectivo de la historia de la Revolución china, dedicándose fundamentalmente a sacar a la luz las raíces del izquierdismo maoísta.

No obstante, parece indispensable establecer el lazo entre la crítica de la orientación de Liu y Deng y la de Mao, si bien abriendo un debate más amplio en torno al balance global del curso seguido por la Revolución China desde 1949. Pues ¿cómo detectar sinó las bases objetivas que explican la llegada al poder de la Banda de los Cuatro y cómo definir sinó los ejes de un programa antiburocrático de conjunto?

Pero se puede ser relativamente optimista. La comparación de la "Primavera de Pekín" con la campaña de las Cien Flores de 1957 permite comprenderlo. Aunque se parecen, ambos períodos se distinguen entre sí en dos aspectos esenciales.

En 1957, todas las secciones del Partido estaban unidas tras el dirigente histórico, Mao. El Partido consolidó sus posiciones y se benefició de los efectos de las primeras reformas revolucionarias de la economía china. Hoy en día, en cambio, los efectos de la edad y de las luchas reiteradas por el poder han dividido profundamente al aparato y han hecho que la población pierda confianza en el Partido, mientras que la economía sale de un caos indescriptible.

Y sobre todo, el movimiento democrático - a diferencia del de las Cien Flores, lanzado por Mao - se ha desarrollado de forma muy **autónoma**. Ha disfrutado un período largo de reflexión y debate teórico. Está compuesto por jóvenes obreros endurecidos por varios años de privaciones personales y luchas políticas. Su programa goza de una mayor argumentación teórica y es más avanzado que el de los estudiantes de 1957. Su inspiración es claramente socialista, más que simplemente liberal.

Los hombres y mujeres con que se ensaña la represión en estos momentos tienen por tanto a su favor que no son unos novatos. Su pasado, en la Revolución Cultural, les confiere una experiencia de la represión política. Aunque se le fuerza a la ilegalidad y a la clandestinidad, el movimiento democrático no tendrá que desaparecer. Liberados de toda ilusión en torno a la capacidad del poder para autorreformarse, algunos militantes profundizarán en sus críticas y buscarán aliados fuera del partido, fuera de la "élite".

¿TE FALTA ALGUN NUMERO? SUSCRIBETE



SI TE SUSCRIBES: AYUDAS A INPRECOR A SEGUIR ADELANTE SIN PERDERTE NINGUNO SUSCRIBETE